

PERÍODO 130°



REPÚBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

16^a REUNIÓN – 11^a SESIÓN ORDINARIA

3 DE OCTUBRE DE 2012

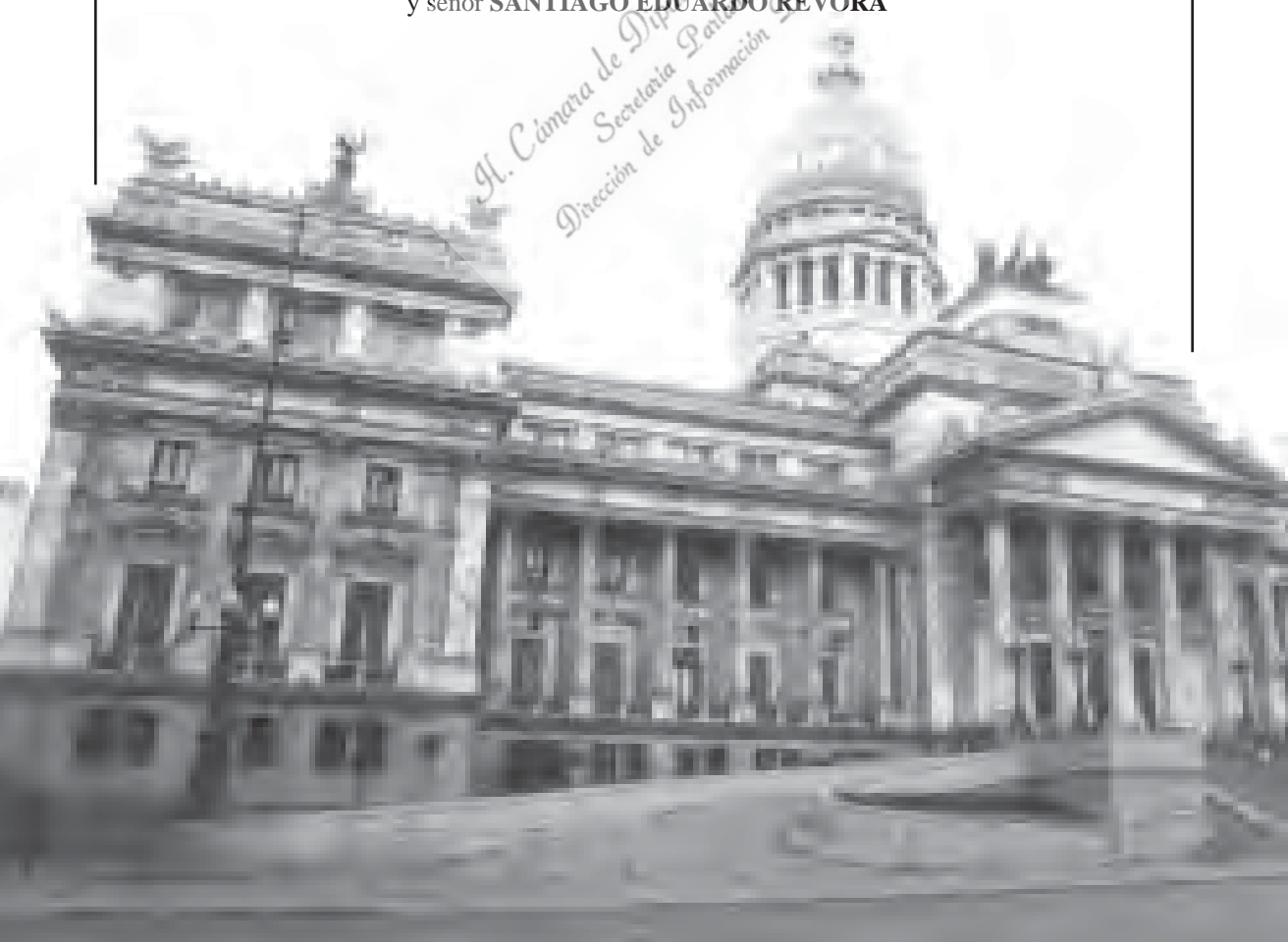
Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, don **AMADO BOUDOU**,
y de la señora presidenta provisional del Honorable Senado, senadora **BEATRIZ
ROJKÉS DE ALPEROVICH**

Secretarios:

Señor **JUAN HÉCTOR ESTRADA** y señor **JUAN HORACIO ZABALETA**

Prosecretarios:

Señor **LUIS GUSTAVO BORSANI**, señor **MARIO DANIELE**
y señor **SANTIAGO EDUARDO REVORA**



*H. Cámara de Diputados de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección de Información*

PRESENTES:

AGUIRRE DE SORIA, Hilda C.
 ARTAZA, Eugenio J.
 BARRIONUEVO, Walter B.
 BASUALDO, Roberto G.
 BERMEJO, Rolando A.
 BIANCALANI, Fabio D.
 BLAS, Inés I.
 BONGIORNO, María José
 BORELLO, Marta T.
 CABANCHIK, Samuel M.
 CABRAL ARRECHEA, Salvador
 CANO, José M.
 CASTILLO, Oscar A.
 CIMADEVILLA, Mario J.
 COLAZO, Mario J.
 CORRADI DE BELTRÁN, Ana María
 CORREGIDO, Elena M.
 DE LA ROSA, María G.
 DI PERNA, Graciela A.
 DÍAZ, María Rosa
 ESCUDERO, Sonia M.
 ESTENSSORO, María E.
 ESTENSSORO, María E.
 FELLNER, Liliana B.
 FERNÁNDEZ, Aníbal D.
 FILMUS, Daniel F.
 FUENTES, Marcelo J.
 GIMÉNEZ, Sandra D.
 GIUSTINIANI, Rubén H.
 GODOY, Ruperto E.
 GONZÁLEZ, Pablo G.
 GUASTAVINO, Pedro G.
 GUINLE, Marcelo A.
 HIGONET, María de los Ángeles
 IRRAZÁBAL, Juan Manuel
 ITURREZ DE CAPELLINI, Ada del Valle
 JUEZ, Luis A.

LABADO, María Esther
 LATORRE, Roxana I.
 LEGUIZAMÓN, María Laura
 LINARES, Jaime
 LUNA, Mirtha M. T.
 MANSILLA, Sergio F.
 MARINO, Juan C.
 MARTÍNEZ, Alfredo A.
 MAYANS, José M.
 MEABE, Josefina A.
 MONLLAU, Blanca M.
 MONTERO, Laura G.
 MORALES, Gerardo R.
 NEGRE DE ALONSO, Liliana T.
 NIKISCH, Roy A.
 PARRILLI, Nanci M.
 PÉREZ ALSINA, Juan A.
 PÉRSICO, Daniel R.
 PETCOFF NAIDENOFF, Luis C.
 PICHETTO, Miguel Á.
 RACHED, Emilio A.
 REUTEMANN, Carlos A.
 RIOFRIO, Marina R.
 RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo
 ROJKÉS de ALPEROVICH, Beatriz L.
 ROLDÁN, José M.
 RUIZ DÍAZ, Elsa B.
 SANZ, Ernesto R.
 VERA, Arturo
 VERNA, Carlos A.

AUSENTES, CON AVISO:

MENEM, Carlos S.
 MORANDINI, Norma E.
 ROMERO, Juan C.

LICENCIA POR ENFERMEDAD:

LORES, Horacio
 VERANI, Pablo
 LÓPEZ, Osvaldo R.

SUMARIO

1. **Izamiento de la bandera nacional.** (Pág. 5)
2. **Homenajes al senador (m. c.) Alcides López y al cineasta Octavio Getino.** (Pág. 5)
3. **Cuestión de privilegio.** (Pág. 6)
4. **Constitución de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.** (Pág. 7)
5. **Asuntos entrados. Mensaje solicitando acuerdo.** (Pág. 8)

6. **Destino de un predio en Santiago del Estero.** (S. – 3.338/12.) Moción de preferencia. (Pág. 8)
7. **Fertilización asistida.** (C.D. -28/12.) (Pág. 9)
8. **Convocatoria a la ministra de Seguridad.** (S.- 3.516/12.) Moción de preferencia. (Pág. 10)
9. **Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Acuerdos.** (Pág. 21)

Promover al grado inmediato superior a la teniente coronel odontóloga del Ejército Juana Ama Mauad de Fiorda. (O.D. N° 897/12.)

Institución de la distinción “Evita Compañera - Honorable Senado de la Nación”. (O.D. N° 985/12.)

Conmemoración del centenario de la creación de la Federación Agraria Argentina. (O.D. N° 989/12.)

XVII Fiesta Nacional del Ave Raza, en Rauch, provincia de Buenos Aires. (O.D. N° 996/12.)

11. **Reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.** (O.D. N° 1.041/12 y anexo.) (Pág. 34)
12. **Modificación del Código Penal. Incorporación de la figura del delito de femicidio.** (O.D. N° 983/12.) (Pág. 82)
13. **Apéndice.**

I. **Plan de labor.** (Pág. 101)

II. **Asuntos entrados.** (Pág. 105)

III. **Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.** (Pág. 169)

IV. **Actas de votación.** (Pág. 758)

V. **Inserciones.** (Pág. 776)

—En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 54 del miércoles 3 de octubre de 2012:

Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. — Invito al señor senador por la provincia del Neuquén, Marcelo Fuentes, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Fuentes procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

2

HOMENAJES AL SENADOR (M. C.) ALCIDES LÓPEZ Y AL CINEASTA OCTAVIO GETINO

Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de ayer, se acordó rendir varios homenajes. Vamos a comenzar con el homenaje por el fallecimiento del senador nacional (m. c.) Alcides López.

Tiene la palabra el señor senador Vera.

Sr. Vera. — Señor presidente: el 12 de septiembre falleció en Entre Ríos quien fue senador nacional por mi provincia, de la Unión Cívica Radical, Alcides López. Nos sorprendió su fallecimiento. Se trata de una persona que transitó prácticamente toda su vida en la Unión Cívica Radical, fue un hombre de la política y de la función pública.

Brevemente, debo decir que, en una sociedad que mira bastante de reojo a la política y también a la función pública, el hecho de que López se haya dedicado a ellas con verdadera vocación merece, al menos de mi parte, un profundo reconocimiento y ponderación de lo que fue su paso por la función política, como expresión de una vocación, y por la función pública.

Por consiguiente, pido a mis pares el acompañamiento en este homenaje a quien fue una personalidad importante de la política radical en Entre Ríos y de la política en general.

Sr. Presidente. — Muchas gracias, senador.

Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: por supuesto, desde nuestro bloque revalorizamos siempre la trayectoria de un hombre político. En ese sentido, vamos a acompañar el homenaje que planteó el senador por Entre Ríos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. — Señor presidente: hace unos cuantos años, allá por 1935, llegaba a la Argentina procedente de España, más precisamente de León, un cuadro político de envergadura, de esos que uno, cuando joven militante, lo miraba de lejos; y alguna vez, siendo jefe de Gabinete de Ministros de este país, me tocó tratarlo y conocerlo. No puedo decir que era un amigo sino un tipo cercano a los afectos, por la forma de ser.

Octavio Getino fue un formador del cine para la liberación, uno de los que creían que con el arte se podía hacer política y que, trabajando, puntualizando y fortaleciendo el esquema de la propia política, se podía llevar adelante un montón de otras estrategias, porque dentro de la discusión del arte estaba el compromiso con la política de lo social, con la política de los

Solicitud de informes sobre el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito. (O.D. N° 973/12.)

Construcción de un puente sobre el río Nahueve, Andacollo, Neuquén. (O.D. N° 974/12.)

Solicitud de informes sobre el sistema de determinación de tarifas de vuelos de cabotaje, especialmente el tramo Buenos Aires - Santa Rosa, La Pampa. (O.D. N° 975/12.)

Beneplácito por la puesta en marcha del corredor petrolero por parte de Aerolíneas Argentinas y Austral. (O.D. N° 976/12.)

Solicitud de informes sobre los trabajos de calado en el puerto de la ciudad de Buenos Aires. (O.D. N° 977/12.)

Beneplácito por la puesta en marcha del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar. (O.D. N° 978/12.)

II Congreso Nacional de Aeropuertos - Airport Show Argentina. (O.D. N° 979/12.)

Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Villa Constitución, Santa Fe. (O.D. N° 980/12.)

Transferencia de lotes en Neuquén para la construcción de viviendas del Programa Crédito Argentino del Bicentenario. (O.D. N° 981/12.)

Restablecimiento de los servicios del ex “Gran Capitán” y del “Tren de los Pueblos Libres”. (O.D. N° 982/12.)

Institución de la distinción “Evita Compañera - Honorable Senado de la Nación”. (O.D. N° 985/12.)

Conmemoración del centenario de la creación de la Federación Agraria Argentina. (O.D. N° 989/12.)

XVII Fiesta Nacional del Ave Raza, en Rauch, provincia de Buenos Aires. (O.D. N° 996/12.)

Sr. Presidente. – En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.¹

11

O.D. N° 1.041/12 Y ANEXO

REPARACIÓN DE LOS DAÑOS DERIVADOS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Sr. Presidente. – Corresponde ahora la consideración de los órdenes del día con proyectos de ley que por Secretaría se enunciarán.

Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, corresponde considerar el dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Sr. Presidente. – Ante todo, quiero hacer una aclaración.

Hay una lista de oradores, a la que quiero dar lectura para ver si están de acuerdo y, de ser así, cerrarla.

Los señores senadores anotados para hacer uso de la palabra son los siguientes: Corradi, Martínez, Negre de Alonso, Bongiorno, Artaza, Escudero, Cano, Basualdo, Morales, Fernández; y para el cierre del debate, Verna, Giustiniani, Rodríguez Saá, Petcoff Naidenoff y Pichetto.

Sra. Díaz. – Por nuestro bloque no hay ningún orador...

Sr. Presidente. – Entonces, incorporamos a los senadores López y Castillo.

Sr. Pichetto. – Diez minutos por orador.

Sr. Presidente. – Muy bien.

En consideración en general.

Tiene la palabra la señora senadora Corradi.

Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente: este proyecto ha sido enviado por el Poder Ejecutivo y ha ingresado a este Senado bajo el expediente S.-155/2012. Lo que pretende es modificar el sistema vigente de la ley de riesgo de trabajo, número 24.557, y esto es como consecuencia de que se advierte que este sistema, en su aplicación, ha evidenciado fallas o imperfecciones.

En caso de producirse un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, el trabajador damnificado o el derechohabiente, en caso de corresponder, se presentaba a recibir la indemnización para reparar el daño –hay daños que son irreparables e igualmente el empleado espera una indemnización por el accidente que

¹ Ver el Apéndice.

ha sufrido—, pero la suma que recibía en esos casos era demasiado baja y, en muchos otros, tardaba un largo tiempo para percibirla.

En oportunidad de sancionarse la ley, el artículo 39 establecía la prohibición al trabajador de iniciar acciones judiciales. Sin embargo, más tarde, la Corte Suprema de Justicia emitió más de diez fallos otorgándole al trabajador o al familiar la posibilidad de iniciar las acciones judiciales. Ante esto nosotros podemos apreciar hoy un grado altísimo de litigiosidad debido a que, justamente, el trabajador ha sido motivado a iniciar estas acciones, pudiendo hacerlo por haber recibido sumas demasiado bajas.

Este proyecto tiene como finalidad buscar la forma de proteger al trabajador, para que en caso de accidente de trabajo o de enfermedades profesionales reciba la suma justa que se adecue al porcentaje de discapacidad o de daño sufrido en el accidente de trabajo y que esa suma sea recibida en un corto plazo.

En este proyecto se establece expresamente que las indemnizaciones van a ser dinerarias y de pago único. A partir de la sanción del presente proyecto de ley desaparece la renta periódica establecida en la norma anterior. Únicamente en especie serán abonadas o percibidas la asistencia médica, farmacéutica y de rehabilitación, que no van a ser reemplazadas por dinero.

Con respecto a darle la posibilidad y la certeza de que la suma de dinero o la indemnización va a ser recibida en tiempo, se establece expresamente un plazo de 15 días a partir de la muerte, homologación o determinación de la incapacidad del trabajador. Y en este plazo, o sea, a los 15 días, el trabajador damnificado o la familia van a recibir, por parte de la aseguradora de riesgos del trabajo, la liquidación donde se establezca perfectamente cuáles son los conceptos, la suma liquidada y se notificará al trabajador que puede disponer ya del pago de la indemnización.

A partir de esta notificación, que es muy importante, surgen dos situaciones. Por un lado, se termina con esta ley de la doble vía, porque, como decía anteriormente, el trabajador tenía —o tiene hasta el momento— la posibilidad de percibir la suma de la indemnización que le otorga la ART, pero igualmente puede iniciar acciones judiciales. A partir de la sanción de este proyecto y después de la notificación de la ART sobre la

disposición de la indemnización, el trabajador o la familia podrán aceptar la indemnización, o bien optar por la vía judicial. Vale decir que queda establecido que será una vía o la otra: la del sistema o la judicial.

También es muy importante el momento en que se realiza la notificación, porque recién a partir de haberse recibido se puede comenzar una acción judicial, no antes.

El otro motivo es porque al día siguiente de haberse recibido la notificación —estamos hablando de luego de los 15 días— se empieza a computar el período de la prescripción de los derechos del trabajador. Con esto, se deroga el artículo 39 al que he hecho referencia, que prohibía la iniciación de acciones judiciales, y respecto del cual la Corte en distintos casos había ordenado o resuelto en favor de su no cumplimiento.

En el caso que hubiera acción judicial después de la sentencia, de la conciliación o de la transacción, la ART deberá depositar en el respectivo expediente la suma de dinero liquidada, más los intereses y las costas que le hubiesen correspondido.

En el caso de que se produjese el accidente de trabajo o la muerte mientras el trabajador esté en el trabajo o a disposición del empleador, se prevé una indemnización complementaria —se considera que es integral y para reparar cualquier otro daño que no esté previsto en la indemnización normal—, que se va a calcular aplicando el 20 por ciento sobre el total de la indemnización. Además, fija un piso mínimo de 70.000 pesos para el caso en que se produzca la muerte, siempre en el concepto de la adición de pago único.

En el caso de que se produzca la incapacidad laboral permanente se establece, justamente para proteger al empleado y que no queden desactualizadas las sumas que perciba, la aplicación semestral de una actualización utilizando el RIPTE, que es el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo.

En el afán y siguiendo con el espíritu que ha impulsado la aprobación de esta ley, que es precisamente bregar para que la suma sea justa, el régimen de alcúotas va a ser definido con-

juntamente por la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para definir estas alícuotas se va a tener muy en cuenta el nivel de riesgo y la siniestralidad presunta y efectiva del trabajador en su trabajo, considerando la actividad que desarrolle. El nivel de riesgo con relación al grado de cumplimiento de la normativa y las normas de seguridad e higiene van a ser también consideradas a fin de que se determinen las alícuota y éstas sean adecuadas o coherentes de acuerdo con la actividad o el riesgo que tiene el trabajador en el lugar de su trabajo.

Con respecto a las ART, se establece la limitación de su presupuesto en gastos de administración y otros no prestacionales. Se va a fijar 20 por ciento como monto máximo para destinar a la administración o a la comercialización. De ese 20 por ciento del total de los recursos que tiene la ART para hacer frente a ese posible siniestro, como máximo se va a poder destinar el 5 por ciento en concepto de comercialización o intermediación.

Asimismo, es importante mencionar que a través del decreto del Poder Ejecutivo 1.720/2012 se crean las ART mutuas, que son organizaciones sin fines de lucro que surgen a partir de negociaciones colectivas entre sectores empresariales y organizaciones sindicales. Éstas van a tener como finalidad ocuparse de las gestiones de las prestaciones siempre detrás del espíritu de que el servicio sea lo más adecuado y justo para el trabajador damnificado.

Además, se crea bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, un registro laboral de la ART mutua. En este caso, se van a unificar todos los antecedentes de las entidades surgidas de la negociación colectiva y la solidaridad sectorial.

Sin lugar a dudas, este proyecto viene a mejorar el sistema vigente. Al respecto, teníamos conocimiento del alto grado de litigiosidad debido a que, como ustedes saben, motivados por la suma insignificante recibida a lo largo de mucho tiempo, la familia del trabajador accidentado inmediatamente buscaba la vía judicial para reparar el daño. Y esto acompañado por quienes también motivan o estimulan al trabajador para que utilice esta vía.

Tampoco es que se va a perder el derecho por parte del empleado o trabajadores de iniciar la

acción judicial. Aquí se trata de que el trabajador o la familia no consideren necesario recurrir a la acción judicial, porque la suma que recibe en concepto de indemnización es coherente con el daño o perjuicio que ha sufrido.

Por último, éste es un proyecto que, de ser sancionado, va a contribuir a proteger al empleado y a su familia, además de darle un marco de previsibilidad al empleador que también es perjudicado en estas acción ya que, por un lado, tiene que hacer frente al pago de la ART y, por otro lado, al finalizar el proceso judicial, tiene también que hacer frente a un costo o a un gasto adicional.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Martínez.

Sr. Martínez. – Señor presidente: en primer lugar, debo aclarar sobre la forma en que se llevó adelante la firma de este dictamen. Un día jueves, a última hora, ingresó el proyecto al Senado de la Nación, el lunes fue feriado y el martes al mediodía tuvimos reunión de comisión. En dicha reunión vino el ministro Carlos Tomada junto con algunas personas de su gabinete; también tuvimos la presencia de algunos miembros del sector empresarial, como es el caso de De Mendiguren y de Wagner, y de algunos sindicatos en la persona del señor Antonio Caló, de la UOM, y de un representante de SMATA.

En ese sentido, cuando íbamos avanzando en el tratamiento de este proyecto, recuerdo –producto de lo que había planteado la senadora Negre de Alonso y que por supuesto acompañé con absoluta convicción– que veíamos que había que incorporar en el debate, por lo menos para escucharlos, a otros sectores. Por ejemplo, en ese momento había que escuchar a la representación orgánica de los trabajadores a través de la CGT y de la CTA. Inclusive, propuse el nombre de algunos expertos abogados laboralistas como es el caso del doctor Sappia, que luego concurrió, o de Cornaglia y otros. Lamentablemente, cuando estábamos culminando la charla, el senador Pichetto manifestó que creía que el dictamen ya estaba firmado. Inclusive, en ese momento le pregunté si estaba mi firma, para enterarme de si figuraba en el dictamen.

En esa oportunidad planteé, prácticamente sin haber podido leer el proyecto, que me pa-

recía saludable avanzar en la modificación de las ART, y mucho más respecto de la modificación del artículo 39, ya que en varios fallos la Corte lo había declarado inconstitucional. Inclusive varios proyectos presentados que fueron cayendo con el transcurso del tiempo, como el de la senadora Di Perna –que estaba en la comisión–, planteaban esa modificación. Por lo tanto, consideré razonable, reitero, que se avanzara en esto.

Independientemente de esa decisión, con absoluta convicción y acompañando lo propuesto por la senadora Negre de Alonso, para el martes convoqué a una reunión, lo cual se lo comuniqué a la señora presidenta cuando me crucé con ella. Al respecto, quiero que quede claro que no fue una convocatoria en nombre de la comisión. Simplemente, convocamos a la gente de la CGT, de la CTA, a abogados laboristas, etcétera, quienes estuvieron presentes en la reunión del martes 2 de octubre y manifestaron sus posiciones. Inclusive, estuvimos de acuerdo con la casi totalidad de lo presentado por el senador Giustiniani como dictamen en minoría, que de alguna manera recreaba lo que en su oportunidad habían manifestado Víctor De Gennaro y otros en la Cámara de Diputados; o sea, la reforma de la ley relacionada con las aseguradoras de riesgo de trabajo. En ese sentido, los propios representantes del oficialismo reconocieron que esto era el plan A, no el B ni el C.

Nosotros dijimos que a lo que realmente debíamos tratar de apuntar era a reducir los siniestros y las enfermedades más que al resarcimiento. De todas maneras, considerábamos que era necesario y justo que el resarcimiento se hiciera con los valores que correspondan, en los tiempos que correspondan y de la manera en que corresponda. Sin embargo, veíamos que se perdía la posibilidad de un debate integral de la modificación.

Con relación a los antecedentes, la ley vigente es de 1995 y el acuerdo marco data de 1994; todas esas normas fueron duramente cuestionadas en su momento. Ésta es una ley Cavallo –una de las tantas que todavía nos quedan–, y debemos avanzar especialmente en el tema del trabajo. A partir de la sanción de dicha ley, la Corte comienza a dictar los fallos “Aquino”, “Yosco”, “Milone”, “Castillo”, “Venialgo”, “Marchetti”, “Silva”, “Suárez”, “Torrillo”, “Arostegui”,

“Ascuá”, entre otros. De esta manera se fue subsanando este mecanismo perjudicial –que se mantiene aún, porque todavía no se modificó la ley pertinente– para los empleados.

Aplicando el artículo 19 de la Constitución Nacional, se advierte la inconstitucionalidad del artículo 39, especialmente en el párrafo primero, de la ley 24.557. Una de las cosas muy importantes que pueden advertirse es que la Corte mantiene algo que no tiene la ley ni la actual modificación que se propone, que es el derecho a la reparación plena. Con relación a evitar la posibilidad de la doble vía, según el proyecto, se pagará el resarcimiento de acuerdo con los nuevos valores –ajustados por el RIPTE y demás– o va a la justicia civil. Al respecto, una de las cosas que siempre nos han dicho los trabajadores es que el fuero natural es el del trabajo. Y cuando uno ve los diversos fallos del fuero del trabajo y de la justicia civil, siempre en el ámbito laboral el resarcimiento para el empleado es mucho mayor que el que hace la justicia civil, lo cual es lógico. Por lo tanto, es lógico que avancemos en que la jurisdicción justa y necesaria para este tipo de cuestiones sea la del fuero laboral.

El proyecto contradice de alguna manera la doctrina de la Corte, en cuanto a establecer la opción civil excluyente con renuncia de la indemnización tarifada, con el agravante de derivar las acciones civiles a la justicia civil, como no fue dispuesto por primera vez a través de la ley 24.028, de 1991. Después, se propone que en dicho ámbito civil no se deberán tener en cuenta los principios del derecho del trabajo sino la legislación de forma y los principios correspondientes al derecho civil. Como consecuencia, es prácticamente calcada de la ley 24.028, del año 91, cuando todos –creo que todos– los que estábamos acá planteábamos, de alguna manera, que estos mecanismos de flexibilización laboral que se enunciaban a favor de una mayor recuperación del empleo, realmente, eran el peor camino que se logró para los “laburantes”. Es así de claro.

O sea que los juicios siguen siendo, hasta ahora, el método más eficaz que tiene un damnificado para acceder a la vía de la reparación integral, independientemente de que esta litigiosidad enorme que tenemos hoy tenga que ver más con la alta siniestralidad que se da dentro de sistema laboral. Por eso, insistimos en la

posibilidad concreta que hubiéramos tenido de avanzar más en el tema de la prevención que en el tema del resarcimiento.

Por otro lado, en este proyecto de ley —y también se mantenía anteriormente—, se tipifican cuáles son las enfermedades laborales. Cuando uno ve los dictámenes, los acuerdos, las sugerencias de la Organización Internacional del Trabajo con respecto a este tipo de cosas, siempre plantea que no sean circunstancias cerradas sino abiertas, en función de las nuevas enfermedades laborales y de la nueva tecnología o de la aplicación de distinto tipo de cosas. Por ejemplo, en esta resolución, una de las últimas de la OIT, se incorpora el tema de los químicos, la forma en que pueden actuar sobre las personas, los fertilizantes o el manejo de alguna cuestión nuclear.

Nosotros, al tenerlo cerrado, lo que estamos haciendo, en definitiva, es abrir la litigiosidad, porque van a tener que recurrir por esta vía aquellos que quieran, de alguna manera, ser resarcidos ante una enfermedad profesional nueva, o ante la muerte de una persona por un evento de estas características.

Una de las cosas que nosotros vemos —y estaba bien, y yo decía que era positivo— con relación al aumento de los montos de los resarcimientos, es que éstos fueron, digamos, “planchados” durante muchísimo tiempo, y ahora, a partir de 2010, vamos a aplicarle ese régimen, como para ir actualizándolos en forma semestral. Pero en esto podemos hacer un paralelo con el tema de los jubilados: lo que es anterior, la readecuación que no tuvo en ese período hace que, de alguna manera, el atraso anterior no sea corregido y sea posible, también, que haya algún tipo de litigio.

Con respecto a lo que tiene que ver con las comisiones médicas, hemos hablado con los empleados, concretamente, o con gente de los sindicatos. Ayer, tuvimos la presencia de un doctor que es el que maneja en la CTA este tipo de cuestiones. Él nos manifestaba que habitualmente es difícil que alguien recurra a estas comisiones médicas ante una propuesta de la ART, y que llegan a un acuerdo previo para evitar las cuestiones engorrosas que pueden ser llevadas adelante por una incapacidad o por una víctima de accidente de trabajo. Y los mismos datos nos daba la gente del oficialismo

cuando decía que solamente el 6 por ciento de las víctimas reclaman ante estas comisiones las propuestas que les hace la ART cuando no están de acuerdo. O sea, estamos hablando de que el 94 por ciento acuerda previamente para evitarse los trámites. Ustedes imagínense un operario en cualquier lugar lejano de la patria. Para poder avanzar en este tipo de situaciones, muchas veces, lo que tiene que hacer es viajar para poder hacer el reclamo. Entonces, lo que hace es ver cómo puede cobrar lo más rápido posible sus indemnizaciones.

Otra de las cosas que manifiesta la Corte en forma permanente es que los reclamos son acumulables, es decir que las presentaciones que hacen los trabajadores, en muchos de los casos que hemos analizado, deben ser acumulables en este sistema para que haya equidad en cuanto al equilibrio de las sanciones que se le otorgan. Otra de las cosas importantes es que, muchas veces, falta patrocinio jurídico obligatorio para que se puedan defender. Tiene que ser a través de una persona que está sindicalizada habitualmente, para que sean los abogados del sindicato los que acompañen este reclamo. Pero en aquellos casos donde no existe la posibilidad de un trabajador “en blanco”, muchas veces le cuesta mucho y, a veces, tiene que hacer cola en la Justicia para que le designen un defensor. Y esto hace que sea más engorroso aún el tema de la presentación que tiene que hacer un trabajador.

Nosotros vemos lo que existe en la legislación vigente en cuanto a que la generación de la enfermedad o la muerte de una persona tiene que ser comprobada que ha sido a sabiendas y con intención del empleador. Realmente, creo que deberíamos avanzar para modificarlo. Si bien no soy un experto en el tema, lo he acompañado al senador Fuentes en una de las charlas, y él me hacía recordar una frase escrita en una bodega de Cuba y realmente lo entendía. Uno ve que podría haber alguna posibilidad para que este tipo de cosas sean siempre tratadas con una balanza que equilibre al trabajador y no al empleador, que es el que habitualmente tiene las herramientas para poder avanzar en eso.

El mensaje de los jueces de la Corte —en particular, los doctores Petracchi y Zaffaroni— señalaba que si se trata de restablecer reglamentaciones legales en el ámbito de protección de los trabajadores dañados por un infortunio

laboral, el deber del Congreso es hacerlo en el sentido de conferir al principio *alterum non laedere*—tuve que ver qué era, después lo entendí—, toda la amplitud que éste amerita y evitar la fijación de limitaciones que, en definitiva, implican alterar los derechos reconocidos por la Constitución Nacional. Esto tiene que ver también con que son cuestiones que deberían haber sido consideradas en este proyecto de ley.

Tenemos varias otras cosas más que tienen que ver con el tema al que se refería la senadora presidenta de la comisión; es decir, el decreto donde se genera el tema de las mutuas. Tenemos legislaciones en Chile y en España que han sido progresistas e interesantes cuando establecen los mecanismos para generar este tipo de mutuas. Después, la nueva lista de enfermedades profesionales de la OIT, del 25 de marzo de 2010. También queríamos avanzar en el sentido de que, desde una perspectiva amplia, debe contemplarse al trabajador en su unidad psicofísica y espiritual. Este retroceso no tiene otra explicación que satisfacer los eternos reclamos de los obligados del sistema que no invierten en prevención y quieren desentenderse de la reparación de los daños y riesgos provocados a sus dependientes.

Ayer nos explicaban con mucha claridad abogados laboristas con determinadas experiencias que existen empresas a las cuales les conviene pagar luego los resarcimientos más que invertir para poder hacer la prevención. Y creemos que, lamentablemente, en este caso, se ha perdido una oportunidad importante y, en algunos casos, se trata casi de un retroceso que impide avanzar en una reforma integral.

El día que vino el ministro Tomada, yo explicaba con claridad que veíamos con agrado la modificación de este proyecto de ley. Quizás, en la forma tranquila que tengo de expresarme y de no confrontar, se pudo haber malinterpretado lo que yo dije en aquel momento pero por suerte quedó claro, luego, en la versión taquigráfica y en la reunión que tuvimos ayer en el anexo del Congreso de la Nación.

Me quedan trece minutos pero se los voy a dejar luego al senador Morales y no los voy a rifar porque creo que los va a pagar mejor que cualquier otro.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Gracias, presidente. En realidad, es muy importante el proyecto de ley que estamos tratando. Es mucho más importante de lo que pensamos; se trata de una ley que impacta en el mundo económico, que impacta en el mundo de los derechos humanos. Cuando digo que impacta en la economía, estoy hablando de los dos sectores a los que involucra la relación laboral: la unidad productiva y los trabajadores.

No existe un país sin unidades productivas, pero la unidad productiva está formada por tres sectores —necesariamente por tres sectores—: por el capital, por lo que algunos autores llaman “el gerenciamiento” —en palabras del jurista santafecino Dobson— y por el imprescindible factor humano que son los trabajadores. Ésa es la unidad productiva. Es imposible pensar en un país sin la existencia de unidades productivas.

Por eso digo que creo que, por ahí, no medimos la importancia de lo que estamos tratando. Y hace diez años que venimos atrás de esto. Efectivamente, hace nueve, diez años que estamos leyendo en los periódicos que se está consensuando una nueva ley; que hace cerca de una década que la jurisprudencia, la doctrina, pero fundamentalmente los sectores involucrados, son los que estaban pidiendo una nueva protección.

Entonces, ¿era necesario? Sí, era necesario. ¿Es una herramienta imprescindible para un país? Es una herramienta imprescindible para un país. Ahora, ¿es ésta la herramienta adecuada, la que ha mandado el Poder Ejecutivo? Nosotros creemos que no es adecuada ni para los empresarios ni para los trabajadores. Esto no va a solucionar la problemática que hoy tiene la República Argentina en este sentido.

Este proyecto de ley que ha mandado el Poder Ejecutivo, en realidad, es simplemente una tarificación de resarcimiento por el daño causado. Vuelve al sistema de la tarifa o del número clausus, en ese sentido, que es casualmente lo que está declarado inconstitucional y es casualmente lo que debemos atacar. Porque si nosotros transformamos en un número objetivo el daño al trabajador, estamos deshumanizando la relación de trabajo; la estamos tratando con pautas absolutamente económicas y no con

pautas humanas. Entonces no estamos solucionando el problema que dice el Poder Ejecutivo que quiere solucionar. Pero además, estamos violando el artículo 14 de la Constitución Nacional: estamos violando el principio de igualdad entre las partes.

Me pregunto entonces, ¿dónde está la integridad de la reparación? Porque el concepto de integridad no puede ir unido a un concepto de tarifa. No puede ir unido a un concepto objetivo, plasmado en una legislación pétrea en ese sentido. El concepto de integralidad comprende a la persona. Por eso, dice Mario Ackerman, en ese librito tan lindo y que lo recomiendo –bien chiquito, rápido de leer–: “Si son humanos, no son recursos”.

Del mismo modo, por eso no podemos hablar de “recursos humanos” cuando hablamos de los trabajadores. Porque el que habla de recursos humanos habla desde una visión economicista de la relación laboral, y entonces, frente a ese papel –porque siempre atrás del papel está la persona–, no tenemos el producto de un número, dentro de una ley, de una tarifa y de un vademécum; tenemos una familia. Tenemos una persona, con cuerpo y espíritu, con psiquis, con dolores y con afectos. Sin embargo, establecemos una indemnización tarifada, dejando de lado todas las circunstancias que rodean a la persona humana. Éste es el error del proyecto. Volvemos al sistema de la tarifa. O sea, volvemos a tratar a los trabajadores como si fueran simples recursos. Y los recursos pueden ser una moneda o un bien de cambio. Esto es lo que no podemos compartir.

Por otra parte, ¿qué pasa con el lucro cesante? ¿El trabajador no tiene derecho al lucro cesante? ¿Es correcto tarifar el daño moral en el veinte por ciento? ¿Y la pérdida de chance? Lamento que no esté presente la presidenta de la comisión. Ella decía recién que se reconoce el 20 por ciento. Pues bien, casualmente, esa tarifa y ese porcentaje pétreo, es también la oposición a la indemnización integral del trabajador. Asimismo, me pregunto: ¿una mano de un trabajador, vale menos que la de un empresario? ¿Un dedo de un trabajador vale menos que el de una persona que atropellan en la calle o en un accidente automovilístico? ¿Son menos los trabajadores a quienes les fijamos tarifas máximas para cobrar?

Ahora bien, la verdad es que este proyecto tampoco protege al empresario, como se dijo aquí, ni a las fuentes de trabajo. Porque en realidad, si nosotros avanzáramos en un buen sistema de cobertura –creo que, inclusive, se dijo en la reunión a la cual concurrí Tomada–, deberíamos avanzar mucho más hacia la protección del trabajador y hacia un sistema de transparencia del trabajo no registrado, para transformarlo en uno registrado. O sea, una buena herramienta jurídica tiene un impacto importantísimo. Pero este sistema no otorga estas posibilidades. ¿Sabe, señor presidente, qué va a pasar? Van a cobrar la indemnización tarifada, pero la cuestión va a seguir, porque vamos a empezar a recorrer de nuevo los caminos de las inconstitucionalidades, dado que esta norma no brinda solución personal a las situaciones de cada uno.

En la reunión que se celebró ayer, algunos hablaron de la protección integral del trabajador, más allá de la situación en la que se habían visto disminuidas sus capacidades. Creo que a eso tenemos que aspirar. O sea, a una relación, partiendo de la base de que la unidad productiva debe estar protegida desde todos los ángulos, y no que la válvula de la ecuación económica sea el trabajador.

Hoy todos saben que las ART no depositan y que el sistema es inocuo. Todo el mundo recorre los diez años de juicio. Y esto provoca otra cuestión, que señalé al ministro y al secretario, como es la venta de los juicios. Porque no vamos a negar que a los trabajadores les compran esos derechos en los procesos judiciales y que, después, aparecen a cobrar personas que no tienen nada que ver con ellos. Sin embargo, esto tampoco está solucionado en este proyecto de ley.

El secretario dijo que había una importante causa penal en la provincia de Córdoba, gracias a una investigación que había hecho el ministerio, respecto de todo un sistema de fraude existente en estos temas. Por supuesto, es dolorosísimo pensar que con la salud, con la vida y con las circunstancias personales y familiares de un trabajador se puede lucrar y que, atrás de eso, está la corrupción. Es gravísimo. Pero creo que con este proyecto de ley todo esto no se soluciona. O sea, la venta de juicios no se soluciona. La cesión de derechos, la explotación de los trabajadores y el lucro con la necesidad

que tienen éstos al momento de una enfermedad o de un accidente no se solucionan a través de este proyecto.

Tampoco es veraz el sistema de actualización. En esta iniciativa, se establece un sistema de actualización cuando en la República Argentina, en nuestro querido país, una de las cosas más cuestionadas es el sistema de índices y estadísticas que proporciona el gobierno. Ahora bien, se establecen topes de índices de actualización para las indemnizaciones de los trabajadores pero no para las tasas bancarias; tampoco para determinados créditos sociales; ni pensamos en las tasas usurarias o, como hemos leído esta semana, que se han duplicado las comisiones bancarias. Pero eso sí: la indemnización de los trabajadores va a estar unida a un sistema que, además, no condice con la causa fuente de la relación.

Yo no integro la comisión que trató este tema, pero como es algo que a mí me interesa mucho fui a escuchar al ministro Tomada. Y la mayor sorpresa que tuve fue el informe que hizo el secretario: él habló de los sistemas A, B y C, y con este proyecto de ley estamos tratando el sistema C, que es la reparación. Pues bien, el secretario dijo que se había registrado un gran avance en la reducción de la siniestralidad en la República Argentina y señaló que todavía había cosas pendientes en esa materia en las actividades de la construcción, pesquera y agrícola. Ahí pedimos que se escuchara al sector de los trabajadores organizados y se nos dijo que no porque se iba a firmar inmediatamente el dictamen de comisión.

La sorpresa de la que hablo tiene que ver con el hecho de que nosotros hemos escuchado al representante de los trabajadores organizados, de la CGT, al secretario general Hugo Moyano, y al representante de la CTA, señor Micheli, quienes nos dijeron que la siniestralidad ha aumentado. Éste es el debate que no permitimos. ¿Por qué no lo permitimos si hace diez años que estamos detrás de esto? A todos nos interesa sacar una buena herramienta. Quienes somos abogados sabemos la importancia que tiene esta ley en la relación jurídica laboral. Para un empresario es importante, y para un trabajador es la vida. Pero la ecuación de la unidad productiva, si no es equilibrada y justa, no es posible. Y la Nación, sin unidades productivas, tampoco es posible.

Entonces, ayer escuchamos que la siniestralidad aumentó. ¿Cómo aumentó? A raíz de esto, hoy tuve otra desagradable sorpresa en la Comisión de Trabajo: a mí me pareció muy bien que vinieran aquí el ministro y el secretario, quien dijo que nos dejaría toda la información al respecto. Lamento que no esté presente en este momento la presidenta de la comisión, pero allí le dijeron a mis asesores que el secretario no había dejado absolutamente nada. O sea que no podíamos ver los gráficos y únicamente nos podíamos guiar por lo que figuraba en la versión taquigráfica. Yo quería controlar y confrontar la información para que todos juntos pudiéramos ver los resultados de lo que había sido la información que había venido del Poder Ejecutivo y lo que nos aportaron los representantes de los trabajadores.

Señor presidente: las sumas, para ser integrales, deben ser discrecionales en la mano del juez; para eso está el juez. El juez es el que tiene la herramienta jurisdiccional para dimensionar el mayor o menor daño, el mayor o menor impacto en la psiquis de esa persona, en sus padecimientos, en su familia o, por ejemplo, todo lo que necesita de por vida una persona que queda con una incapacidad total para poder estar en condiciones y estar medianamente integrada a la vida social.

Éste es un proyecto de ley que vuelve a un sistema tarifado que fracasó absolutamente, que confía en que va a solidificar y a beneficiar a los trabajadores cuando está comprobado que fracasó, y que no va a terminar con la corrupción porque no están los mecanismos necesarios para impedir todo lo que hoy sabemos que está pasando con los derechos de los trabajadores que sufren estas discapacidades que actualmente no son atendidas por las ART.

Quiero referirme a otros temas que tienen que ver con esto. No puedo dejar pasar que esta ley avanza sobre los derechos de las provincias y sus facultades no delegadas a la Nación, sus autonomías, con respecto a las regulaciones procesales.

Fíjese, señor presidente, que en primer lugar limita una acción judicial, ya que dice que no va a poder iniciar la acción judicial hasta que no sea notificado. Pregunto qué sucede si la empresa ha quebrado y hay que entrar a verificar cuando existen plazos. ¿No la va a iniciar? ¿Qué

pasa si el trabajador hace la opción y después la empresa quiebra? El trabajador se queda desprotegido; la ART no le va a pagar porque hizo la opción. ¿Se da cuenta que no protege al trabajador?

Pero, además, no es válida para las provincias, porque las invita a adherirse, pero sí para la ciudad. Fíjese que manda al fuero civil las acciones de indemnización civil con la legislación civil. A ver, ¿nos olvidamos que existió el general Perón en la República Argentina? ¿Nos olvidamos que el peronismo le dio validez constitucional y reconoció los derechos de los trabajadores y los mandamos a pleitear como si fueran un ciudadano más? ¿Dónde están los principios protectorios del derecho de trabajo? Recordemos la Ley de Contrato de Trabajo de 1974, y hay un montón de leyes anteriores. Vamos a mandar a pleitear al trabajador en sede civil con las normas del derecho civil; no vaya a ser que el juez se equivoque y lo quiera proteger con las normas del derecho laboral. Señor presidente: esto no es lo que quiere el peronismo; el peronismo quiere un país pujante, con unidades productivas de pie, con empresarios y empresas de pie y con trabajadores también de pie.

Este párrafo –una línea y media– es nefasto, señor presidente; lo debe haber hecho de Mendiguren. ¿Sabe por qué? Porque es un mentiroso; lo dije públicamente y lo vuelvo a decir. Este señor, que vino acá a defender y que lamento que represente al empresariado argentino, es un vil mentiroso. En 2002, vino como ministro de Producción del presidente Duhalde a presentar el proyecto de reactivación productiva en la Argentina; eso fue en el Salón Azul de este Senado, y donde está usted, señor presidente, se encontraba el senador Gioja. Ese día hizo una gran presentación en *PowerPoint*, muy ilustrativa. ¿Sabe qué, presidente? Es tan caradura que decía “los empresarios vamos a poner en marcha el país”, “ahora van a ver”, “confíen en nosotros”. Tenía un mapa donde exponía cómo las provincias se iban a poner de pie. ¡Imagínense el momento que los argentinos estábamos viviendo en ese entonces!

Y este señor, que es un mentiroso y un caradura, ese día a la mañana, había cerrado las dos o tres empresas textiles que tenía en Justo Daract, San Luis. Entonces, me tuve que parar y decirle: ¡usted miente! Y hoy vuelve a mentir,

porque vino acá a decir que está todo perfecto y muy bien. La verdad es que todo lo que venga de esa persona... He visto a los trabajadores llorar y golpear las puertas de las fábricas. Mire, mientras él, acá, en el Senado, decía que la Argentina y el empresariado se ponían de pie, cerraba sus propias fábricas. Borraba con el codo lo que escribía con la mano. Por lo tanto, no me merece ninguna autoridad moral, absolutamente.

Y hay otra cosa que quiero decir. En determinadas cuestiones me pongo a pensar y me callo la boca porque digo “para qué vamos a entrar en una discusión”. Se habla del neoliberalismo, de la década del 80 y de la inflación como si la democracia no hubiera existido desde el 83, como si al ex presidente Alfonsín, al ex presidente Menem y a los que integraban las Cámaras de Diputados y de Senadores no los hubiera votado el pueblo argentino.

El ministro habló –y no lo digo yo– de que íbamos a dar una vuelta al neoliberalismo. Mire, los que tenemos alguna memoria, tal vez, por nuestra condición de abogados, nos acordamos de la ley 24.432. Lo que han incorporado ahora con respecto al pacto de cuota litis y a la ley de honorarios es lo que estableció Cavallo en esa ley. Los que somos abogados tenemos memoria y sabemos de qué se trata porque quienes estábamos en los colegios públicos y en la Federación de Abogados luchamos mucho contra esto. Ahora están haciendo lo mismo que en ese entonces. Primero, avasallan a las autoridades provinciales diciendo cómo los jueces deben regular los honorarios; lo mismo que decía Cavallo a través de la ley 24.432. No quiero aburrirlos leyendo cada artículo que defendía el ex ministro Cavallo.

En segundo lugar, dice que está prohibido el pacto de cuota litis. Me pregunto: ¿el ministro de Trabajo de la Nación no sabe lo que es el orden público laboral? Porque el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla el pacto de cuota litis y que le pone un tope del 20 por ciento, sólo puede ser derogado por otra ley de orden público superior, y hasta ahora la única es la ley de quiebras, porque afecta la economía de un país. Esta ley no es de orden público. Entonces, no puede modificar el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¡Pues, señores, muy tranquilamente el ministro vino, presentó esto y, por ende, defendió algo

que es absolutamente inconstitucional! Por eso digo que estamos avanzando sobre derechos protectorios de los trabajadores. Sin duda, hace falta una herramienta, pero no creo que ésta sea la adecuada.

Señor presidente, ahora que ya volvió la senadora presidenta de la comisión –no quería hablar en su ausencia–, voy a repetir lo que dije cuando vino el ministro de Trabajo: soy la senadora más antigua, soy una defensora de la casa. Y quiero decirles a todos los senadores que ese día no estaban presentes que a mí me ha molestado muchísimo que quienes vinieron en esa oportunidad a la reunión –el señor de Mendiguren, el señor Caló y el señor Romero– le agradecieran al ministro de Trabajo la posibilidad de venir al Senado de la Nación y de haberse sentido invitados por él, en desmedro de la presidenta de la comisión. Yo, como colega de la presidenta de la comisión, me sentí muy afectada. Por eso, quiero reiterar que nosotros debemos respetarnos, hacer respetar nuestros lugares y nuestra investidura.

Mucho más lamento que para una ley, una herramienta tan importante, no se haya permitido ingresar a debatir al seno de la comisión –el senador Martínez aclaró bien que lo de ayer no fue la comisión– a la abogacía organizada, la CGT y la otra corriente organizada representativa de los trabajadores, la CTA. El intercambio de ideas y el debate nutren, señor presidente. ¿Y sabe qué? Fortalecen a la democracia. En la Argentina todos queremos a los trabajadores de pie. Y los peronistas queremos el fortalecimiento de los trabajadores pero también el de la unidad productiva para un país mejor.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Artaza.

Sr. Artaza. – Señor presidente: sobre el proyecto que regula a las aseguradoras de riesgos del trabajo que estamos tratando hoy, se han exployado muy bien el miembro informante, senador Martínez, y los demás senadores.

Quiero tomar las expresiones de la senadora Negre de Alonso, porque me cuesta comprender que parte del justicialismo que está hoy en el gobierno pueda defender este dictamen que ha tenido este tratamiento tan veloz aquí, en el Senado, en la correspondiente comisión, y sobre el que se ha omitido el debate. Me cuesta creer que se haya tratado en tan poco tiempo

este dictamen. Es un retroceso que me resulta incomprensible por parte de quienes representan a sectores nacionales y populares. Por eso es que podemos coincidir, como con la senadora Negre de Alonso o con la exposición que ha hecho nuestro miembro informante desde el radicalismo.

Uno puede pensar que esto no está de acuerdo con los trabajadores porque no se consultó a la CGT ni a la CTA. Tampoco está de acuerdo con los fallos de la Corte Suprema de Justicia. No están de acuerdo los productores de seguros que se ven perjudicados en sus ingresos, ni las pymes, que son pequeños empleadores. Todos ellos no están de acuerdo y no se los consultó, se omitió el debate. Eso es lo que no puedo entender.

Cuando hice mención a un proyecto de agremiación o sindicalización de las fuerzas de seguridad para que avancemos en otro paradigma y legislemos sobre la realidad –aunque sea discutible que avancemos en ese debate–, el senador Pichetto dijo: el senador Artaza parece que presenta proyectos para la felicidad. Bueno, tengo la esperanza de legislar para cambiar la realidad, para hacer feliz a la gente. Creo que muchos de nosotros presentamos los proyectos para eso. Para amargura, ya están proyectos de este tipo, que no convencen a la mayoría. Debiera decir con respeto al amigo senador Pichetto que para amargura ya está este proyecto. Realmente, no es compatible con el justicialismo que se dé un retroceso tan grande, volviendo a los noventa.

¿Quién se beneficia si en un tratamiento tan veloz en las comisiones han escuchado solamente a dirigentes de la Unión Industrial, de la Cámara Argentina de Comercio y de los sindicatos amigos y no se ha consultado a la CGT, ni a los trabajadores, ni a las pymes? Técnicamente se ha expresado muy bien el senador Martínez. Estamos en una época de reparación en la cual los grandes partidos nacionales podemos llegar a coincidir como, por ejemplo, lo vimos en la ley de estatización de YPF. Por eso, me resulta insólito que ustedes desde el Senado puedan defender un proyecto de ley que beneficia únicamente a las ART.

–Ocupa la Presidencia la señora presidenta provisional del Honorable Senado, senadora doña Beatriz Rojács de Alperovich.

Sr. Artaza. – Y, si vamos a hilar muy fino, finalmente las ART son en su mayoría los banqueros. Volvemos a cerrar el círculo. Realmente, me resulta incomprensible que haya tenido un tratamiento tan veloz.

Una vez escuché en este recinto –y me pareció loable– a una senadora decir: “Yo no vengo a ser aquí ‘la recluta Fernández’”. Eso lo dijo la actual presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Espero que la lucidez de todos ustedes, de una parte del justicialismo, no les permita cometer este retroceso respecto de los derechos de los trabajadores, como bien explicó la senadora Negre de Alonso. Incomprensible retroceso que les da angustia a los trabajadores por tener que elegir si van a aceptar lo que les propone la ART o si tienen que ir por la vía judicial. La verdad es que me resulta incomprensible y espero que en esta ocasión, como en otras, nos puedan escuchar. Hoy hablé de las sumas no remunerativas, que hubiera evitado este conflicto que estamos viviendo, como antes del mínimo no imponible y otros tipos de leyes.

Honestamente, lo digo con la esperanza de que pueda revertir esta forma recluta de esperar a ver qué les dice el Poder Ejecutivo, me hubiera gustado para este gobierno, que tiene un límite constitucional y que ha tenido luces y sombras como todos los gobiernos en la Argentina –y que los seguirá teniendo–, que cuando termine dentro de tres años esto hubiera sido un logro en el sentido de seguir avanzando en los derechos, como lo hemos hecho. Es decir, superando prejuicios para poder avanzar como lo realizamos con tantas legislaciones que hemos tratado en este Senado de la Nación y también en la Cámara de Diputados.

Por esta razón, me resulta incomprensible que haya tenido este tratamiento. Y, por eso, reivindico el rol del Congreso de la Nación. Aquí tendría que haberse dado el debate y citar, como lo hemos hecho desde la Comisión de Trabajo y Previsión Social ayer, a los diferentes actores, a los trabajadores, a las pymes y a los productores que se ven perjudicados. Esto se hizo mediante un dictamen que se firmó en forma sorprendentemente veloz, escuchando únicamente a los representantes de las corporaciones como la Unión Industrial Argentina o las ART. Hemos visto que se han quejado los trabajadores, las pymes, los productores, pero

no hemos visto quejarse a las ART, que son las grandes beneficiadas.

Como decía, este gobierno tiene un límite constitucional y dentro de tres años finalmente va a terminar este período, pero van a seguir los litigios que va a producir este proyecto de ley que tiene todas las posibilidades, obviamente, de ser inconstitucional.

Por eso, respetuosamente, los llamo a la reflexión. Es una lástima que este tema, que requería grandes acuerdos de políticas de Estado, no haya sido tratado de otra forma –como bien explicaron diversos senadores– y se beneficie a los trabajadores argentinos. Sobre todo, se podría haber escuchado a aquellos sindicatos que reúnen a trabajadores que sufren gran cantidad de accidentes de trabajo y que podrían haber aportado una mejora para alcanzar un consenso respecto de este proyecto de ley.

Por otra parte, si bien es cierto que podría haber tenido modificaciones, también es cierto que, al menos, podría no producir un retroceso. Y no me refiero a la época de la reparación, como estamos viviendo ahora, que hubiera sido pertinente que tenga esta norma, sino respecto del derecho humano de la salud de los trabajadores.

Por eso, en coincidencia con lo expresado por el senador Martínez y otros senadores de mi bloque, adelanto que no vamos a acompañar este dictamen.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador López.

Sr. López. – Señora presidenta: la posición de mi bloque es a favor del proyecto.

Nosotros no vamos a hablar de las centrales de trabajadores en tercera persona, sino que lo haremos en primera persona, porque somos parte de la Central de Trabajadores de la Argentina. Tampoco vamos a hablar de los trabajadores en tercera persona, porque también somos trabajadores. En esta etapa de nuestra vida laboramos de senadores, pero no dejamos de ser trabajadores. Digo esto para que quede claro que aquí no hay una línea divisoria entre quienes defienden los derechos de los trabajadores y sus enemigos. Los defensores de los derechos y de los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras estamos dispersos en diversos espacios, tanto a nivel

de partidos políticos como de organizaciones sindicales y sociales.

Sí considero que hay diferentes miradas sobre cómo se implementan, en la práctica, algunas herramientas tendientes a la mejor defensa de los derechos. Como punto de partida, me parece que en algún lugar tenemos que respetar las diversas posiciones. Por supuesto, al adherir a una u otra posición, cada uno podrá acertar o equivocarse. También eso dependerá de las perspectivas de cada uno, que generalmente son subjetivas y tienen que ver con las circunstancias, la historia y la pertenencia de cada cual.

Es verdad que el sistema ideal sería aquel a resultas del cual ningún trabajador, por causa vinculada al trabajo, tenga que terminar enfermo o accidentado; ni mucho menos muerto. Pero ese sistema no existe.

Entonces, partiendo de la base de que el desenvolvimiento del trabajo nos expone a riesgos que pueden terminar en una enfermedad o accidente, lo que este proyecto contiene es un sistema de reparación. Es decir que parte de la hipótesis del daño consumado, lo cual se desprende claramente del artículo 1°. Es una norma que se desentiende o que desdeña la prevención. En ese sentido, dice: “Las disposiciones sobre reparación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales constituyen...”, y prosigue. La hipótesis que se toma como punto de partida es el riesgo, y esto es así, quizás, en todo sistema de seguro. Por lo tanto, se parte de la hipótesis del daño y se instituyen diversas alternativas para repararlo.

De la prevención nos podemos ocupar en otros cuerpos normativos. Inclusive, es mejor que no esté prevista en este proyecto, porque cuando se tocan dos temas que corresponden a dos segmentos absolutamente distintos de la vida, puede que ninguna de las dos cuestiones sea debidamente resuelta. En consecuencia, con seguridad será mejor que trabajemos por separado en la mejor ley de prevención y en la mejor ley de seguridad e higiene en el trabajo.

Quizás, una de las principales causas de siniestralidad laboral sea la sobrecarga en cuanto a las horas de trabajo. Existen muchos diagnósticos y estadísticas vinculados con eso. Por ello, inclusive de acuerdo con lo que viene sosteniendo la OIT desde hace varias décadas, nosotros sostenemos que en algún momento

tendremos que revisar el régimen de jornada. Tal vez, eso tenga que ver con encarar el problema por sus causas más que por sus consecuencias.

En el proyecto en tratamiento se mejora sustancialmente el monto de las distintas reparaciones a las cuales puede acceder un trabajador en situación de enfermedad o de accidente vinculado con el trabajo. Así, a través de cláusulas muy concretas se pretende reducir algunos costos relacionados con comisiones y con gastos operativos, administrativos o de funcionamiento del sistema, que no son el objeto del mismo, que es la reparación. También se prevé el mecanismo de actualización automática de estos valores, cuya inexistencia ha significado bastantes problemas en el sistema actualmente vigente, y se abrevian bastante los plazos.

Además, así como nos referíamos al ideal en cuanto a sistema, también hablamos del ideal en cuanto a reparación cuando el daño se concretó. El ideal, siempre, es la reparación plena. Sin embargo, es un ideal, es decir que sirve como pauta de orientación, como un norte que guía el accionar de los actores y de la Justicia, al que uno puede aproximarse más o menos, pero nunca se alcanza la reparación plena o integral.

El régimen de daños en general y su reparación tiene su núcleo central en el derecho civil. Por supuesto que las ramas del derecho no son compartimentos estancos y que hay zonas de intersección, donde se entrecruzan y tocan cuestiones comunes. Pero el régimen de la responsabilidad, del daño y de la reparación proviene del principio básico del deber genérico de no dañar a otro. Entonces, el derecho laboral, que regula las condiciones de trabajo, las relaciones trabajador empleador —y básicamente el salario—, no ha desarrollado una rama intensa a nivel de la responsabilidad y de la reparación en materia de daños. Por eso es necesaria esta articulación con el derecho civil, que se sustenta sobre estos otros principios; no hay ninguna incompatibilidad y se pueden complementar perfectamente.

Si la reparación que ofrece el sistema de la ley de riesgos de trabajo es insuficiente o es muy distante de lo que se aspira como reparación plena, tenemos la opción de rechazar esa cobertura y valernos de los principios de la jurisprudencia y de la doctrina en esta materia central de la responsabilidad civil y de la reparación de los daños, ejerciendo la opción de la acción civil

y la reparación integral. Tampoco es mucho el tiempo que hay que esperar para ejercer esa opción porque, en principio, la ley prevé que la oferta indemnizatoria dentro del sistema tiene que concretarse dentro de los quince días de producido el siniestro.

También hay que tener en cuenta que, junto con el envío de este proyecto de ley, se emitió el decreto 1.720/12, que reglamenta una posibilidad legal que no se aplicaba –ya existía pero no estaba reglamentada– y que tiene que ver con los seguros mutuos sin fines de lucro o ART mutuas. Existe la posibilidad de que tanto los establecimientos empresariales como las entidades sindicales con personería gremial desarrollen su propia ART sin fines de lucro y en base a un sistema solidario.

De alguna manera, hay un sistema que se va creando con distintas normativas, porque este decreto, más la iniciativa que estamos tratando, más la ley original de riesgos de trabajo y todas las normas complementarias y reglamentarias que tiene, pretenden integrar un sistema. En ese sistema va a existir la posibilidad, en el campo del trabajo y de los trabajadores, de asumir una suerte de “autoseguro” a través del desarrollo de la propia ART mutua –hablo, como decía al principio, en primera persona– y de demostrar que podemos implementar un sistema mejor, sin fines de lucro –porque ésa es una de las críticas a las ART– y de hacernos cargo de nuestra propia cobertura, de nuestro propio seguro, demostrando que somos mejores.

Después de un tiempo de andar por la práctica de esta norma, si se logra su sanción, con seguridad podremos recoger la experiencia y ver qué nuevo paso corresponde dar. Sabemos que se trata de procesos con multiplicidad de miradas, con múltiples intereses; algunos más compatibles y otros más incompatibles. Y en esos procesos siempre tenemos que dar pasos de reparación, de recuperación, de desactivación de ingenierías que fueron montadas con finalidades antipopulares. Entonces, no tenemos que pensar que éste es el último paso ni que es el fin de la historia y que nada más va a poder mejorarse. Inclusive, por ahí se pone también como ejemplo el hecho de por qué no hacemos algo parecido a lo que se efectuó con las AFJP, es decir, propiciar la desaparición de las ART y nacionalizar el sistema.

Considero que esa apreciación no es incompatible con cuanto vengo diciendo en relación a que hoy damos un paso y eso no nos impide mañana, eventualmente, de acuerdo con la experiencia que recojamos, dar otro paso, porque la supresión de las AFJP no fue hecha de plano de un día para el otro, sino que previamente se habilitó la opción por la vuelta al sistema de reparto, opción que en la original ley 24.241 no existía. Siempre teníamos la opción de pasarnos del sistema de reparto al sistema de capitalización, pero una vez dentro del sistema de capitalización, como una trampa, opción para salir y volver al sistema de reparto no teníamos.

Entonces, primero se habilitó la opción por el retorno al sistema de reparto; seguían subsistiendo los dos sistemas y de las evaluaciones y experiencias que se fueron recogiendo, a poco de andar se tomó la feliz decisión de deshacernos, definitivamente, del sistema de capitalización y de nacionalizar todo el sistema de seguridad social.

Como la cuestión de la ley de riesgos de trabajo es un subsistema dentro del sistema de la seguridad social, no es impensable que lleguemos a un lugar parecido en base a una experiencia similar a este antecedente que menciono.

Queda abierta la posibilidad. Me parece que ése es un avance y que va a tener que ser puesto en práctica y recoger las evaluaciones; y a partir de ahí dar los pasos que seguramente nuestro gobierno va a estar dispuesto a realizar, de lo cual ha dado suficientes demostraciones en los últimos años. Entonces, en la medida en que sea necesario y que las correlaciones de fuerza lo vayan permitiendo, se van a ir dando esos pasos. Nunca es todo o nada.

Por estas razones, vamos a votar afirmativamente el proyecto.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora Bongiorno.

Sra. Bongiorno. – Señora presidenta: en primer lugar, quiero hacer una consideración política. Nosotros, en el Senado, hemos tratado leyes de trascendencia social y de muchísimo peso dentro de lo que es el compromiso con los sectores más débiles de la sociedad. Éste ha sido siempre el compromiso del Poder Ejecutivo nacional en las leyes que ha enviado a este Se-

nado. Así, hemos tratado el nuevo estatuto del peón rural, hemos hablado con referencia a la violencia de género, la nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la nacionalización de Aerolíneas Argentinas y la nacionalización de los fondos jubilatorios y previsionales. Y de una manera que, en verdad, me llenó de orgullo, también tratamos la modificación al régimen de concursos y quiebras, en donde se permitía la participación de los trabajadores en forma de cooperativas, a fin de no perder su fuente de trabajo ni su dignidad laboral.

Considero que ahora estamos tratando una de las normas que constituye dar un paso adelante en todo lo que es indemnización de riesgos de trabajo. Primero, esto viene a rescatar varios fallos de la Corte Suprema de Justicia en los cuales se consideraban como inconstitucionales varios párrafos de la ley 24.557. Así, tenemos los fallos “Aquino”, “Castillo” y “Milone”. En el fallo “Aquino” se veda la vía judicial civil. En el fallo “Milone” se descalifica el artículo 14, apartado 2 de la ley, en cuanto a la percepción de una indemnización en forma periódica o en forma de renta periódica. Y, por el otro lado, en el fallo “Castillo” tenemos también tachado de inconstitucional el párrafo de la ley donde la vía revisora de los tribunales federales iba en desmedro de las jurisdicciones provinciales.

Por ende, creo que éste es un proyecto de ley que también tiene en cuenta la parte más débil de la relación contractual o laboral. Así es como nace el derecho del trabajo, tratando de proteger y de reparar aquellos infortunios y desventajas que poseía el trabajador en la constitución de esa relación laboral. Realmente creo que esta norma recepta lo que es el trabajador en sí, su esencia.

Recepta su preferente tutela, al que constituye como eje y centro de todo sistema jurídico, y al trabajador como un fin en sí mismo. Esto está receptado en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de Vizzoti y Madorrán, en los cuales también podemos ver que toma al trabajador como fuente principal de la relación.

Quiero ahora irme en forma directa a lo que es el proyecto de ley que estamos tratando.

Primero, creo que hay una revalorización en cuanto a sufrir un daño o una lesión o una enfermedad laboral, porque no solamente toma el reparo del daño, que se hace en forma justa y en forma inmediata. Y en forma justa quiere

decir que a los quince días el trabajador podrá optar por percibir una indemnización o ir por la otra vía.

Entonces, ese optar le da la libertad al trabajador de poder ir a una reparación plena o tomar la reparación de la ley. Pero además de eso, termina con ese círculo vicioso que alimentaba y retroalimentaba lo que era la “industria pleitera”, que todos los abogados conocemos muy bien. ¿Qué hacía esto? Favorecer a las grandes corporaciones de abogados, donde realmente el que sacaba ventaja siempre era el litigante y nunca era el verdadero damnificado.

Pero hay otra cuestión que es sumamente esencial en esta norma y que realmente me parece que toma al trabajador en su faz humana. Esto tiene que ver con que no solamente se va a reparar el daño sino también con que se toman otros visos de la enfermedad laboral o del accidente de trabajo, y tiene que ver con el pago de la atención médica, el traslado, los medicamentos, la internación en institutos especializados, etcétera. Pero acá es donde realmente toma sentido humano, ya que brinda capacitación y promueve la reinserción laboral de todos aquellos trabajadores que, habiendo sufrido el daño o un accidente, no puedan retornar a sus tareas habituales. Por ende, esta reinserción laboral significa la dignificación del trabajador y de su familia.

Creo que esta iniciativa cuenta con gran consenso, porque no solamente desde la parte laboral se pedían reglas claras, concretas y una aplicación de una ley que no diera cabida a inconstitucionalidades ni a dobles interpretaciones, sino que desde la parte empleadora se pedía certeza en cuanto a saber cuál es su responsabilidad, la prevención que tiene que dar y, además, en cuánto va a tener que asegurar a su trabajador y abonar en el momento de un daño.

¿Qué significa esto? Esto significa más capacidad para empleadores, más capacidad de blanquear a los trabajadores y más capacidad para que aquellas empresas puedan mantener cada vez más puestos de trabajo dentro del sistema de blanqueo.

Entonces, creo que esta iniciativa ha venido a zanjar un déficit constitucional; y no lo digo yo sino que esto ha sido expresado en 2004 por los jueces de la Corte Suprema de Justicia y ratificado en 2006 en la causa “Díaz c/Vaspia”.

Este fallo, en el cual la tesis de la mayoría –que estaba compuesto nada más y nada menos que por el doctor Petracchi, Zaffaroni y la doctora Highton de Nolasco– hace una reparación del riesgo de trabajo y del apartado 39 de la ley que nosotros estaríamos supliendo, interpretándolo como un daño en general. ¿Qué quería decir eso? Que era un daño para todos los casos.

De modo que creo que esta norma viene a cumplir con todos los preceptos: desde lo técnico y desde lo político. Porque creo que esto ha sido, desde el gobierno nacional, una preocupación constante; la de tener siempre presente la función de mejorar el camino de los más débiles; de aquellos que tienen vedado el acceso a la Justicia o de aquellos que en una relación como la laboral siempre tienen que ser tutelados y protegidos por el Estado.

Desde ya, por supuesto, adelanto mi voto positivo. Y voy a acompañar al bloque en esto. Pero además quería decir que esta norma no constituye un *status quo* sino que cada seis meses tendrá una actualización de los mínimos que en ella se establecen, que consiste en un 20 por ciento sobre los pagos únicos e inmediatos. ¿Qué significa esto? Que va a privilegiar a aquellos que tengan los sueldos más bajos y va a ir en beneficio de las indemnizaciones de esas personas.

Pero además, en cuanto a la prevención, también el Estado nacional ha hecho una incursión. Y en esto hablo desde mi provincia, porque sabemos que la cabeza de la prevención está en los estados provinciales. Y se ha hecho un trabajo conjunto entre el Estado nacional y el estado provincial, a fin de minimizar los riesgos y las siniestralidades.

Por eso, creo que en la confluencia de este proyecto de ley y con el trabajo conjunto del Estado nacional y los estados provinciales, vamos a tener un muy buen resultado.

Para cerrar mi alocución, por razones de economía procesal –como se suele decir– voy a leer un párrafo que tiene que ver con los fallos “Vizzoti” y “Madorrán”, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Allí se dijo que el trabajador es el señor de todos los mercados. Y se ha sostenido que es el mercado el que debe adaptarse a los mandatos fundamentales que representan la Constitución

y el derecho internacional de los derechos humanos.

Por lo tanto, este proyecto de ley cumplimenta como preferente tutela, eje y centro de todo sistema jurídico y fin al trabajador. Así que desde ya que voy a acompañar con mi voto positivo esta iniciativa.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Señora presidenta: quiero decir que comparto absolutamente la posición que, como miembro informante, expresó la señora senadora Negre de Alonso.

La ley de riesgos del trabajo creó un sistema que –como se ha visto– perjudicó enormemente a los trabajadores. Ésa es la razón por la cual, a partir de 2004, la Corte Suprema de Justicia de la Nación empezó a construir una doctrina y a declarar la inconstitucionalidad de dicha norma.

Este proyecto no soluciona las cuestiones de inconstitucionalidad que claramente ha planteado la Corte Suprema. En el caso Castillo, nuestro alto tribunal sostuvo que el juez natural es el del trabajo.

En el artículo 4° del proyecto se establece que si el trabajador opta por la vía judicial tiene que escoger la vía civil en cuanto a legislación, proceso y principios, con lo cual excluye de esta materia el principio del derecho laboral *in dubio pro operario*. Esto es inconstitucional, porque en el caso “Yosco” la Corte consagró la legitimidad de la doble vía. Por lo tanto, el artículo 4° de este proyecto, en cuanto establece la opción excluyente, contradice justamente la doctrina de la Corte en el caso “Yosco”.

Por ejemplo, si el perro de un empleador muerde a un empleado y le saca un dedo, pero resulta que ese empleado es un eximio pianista, ¿le van a pagar igual que a cualquiera? Porque ese dedo, para un pianista, tiene un costo diferente, que debe fijar la Justicia. Por lo tanto, creemos que este artículo 4° es inconstitucional.

En los casos “Venialdo” y “Marchetti” la Corte dijo que las comisiones médicas, al constituir organismos de carácter federal, son inconstitucionales, y que los trabajadores y sus derechohabientes tienen derecho a recurrir a la justicia laboral.

Este proyecto, al no derogar los artículos 8°, 20, 21, 22, ni el 46, inciso 1 –que fue expre-

samente considerado inconstitucional—, sigue manteniendo este régimen; y establece que las resoluciones de las comisiones médicas tienen que ser recurribles ante el juez federal. Por lo tanto, se insiste en la inconstitucionalidad.

El artículo 9° es también inconstitucional, porque obliga a los organismos administrativos y a los tribunales competentes a ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos al listado de enfermedades profesionales. O sea que obliga a los jueces a ajustarse al listado de enfermedades profesionales y a la tabla de evaluación de incapacidades.

La Corte Suprema, en el caso Silva, estableció claramente que la Ley de Riesgos del Trabajo, al excluir del marco reparador a los daños irrogados por enfermedades no listadas, pasó por alto el principio de progresividad. Y ese principio de progresividad, consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene rango constitucional en nuestro país, establece que es obligación de los Estados parte avanzar de la manera más expedita y efectiva posible hacia la plena realización del derecho del trabajo y que no deben adoptar medidas regresivas de ese derecho. Entonces, al obligar a los jueces a no cubrir las enfermedades no listadas se está dando un paso hacia atrás en aquello donde la ley y la Corte habían ampliado derechos, y se está violando la Constitución.

El proyecto no resuelve el problema de los trabajadores informales. Hay ocho millones de trabajadores que no tienen ningún tipo de cobertura; y tampoco avanza en el tema de la prevención.

El proyecto que presentó el diputado Recalde establece que el sistema de las ART —que, en realidad, son primas hermanas de las AFJP— ha perjudicado no sólo a los trabajadores sino también a las empresas. Entonces, ¿a quién ha beneficiado? Ha beneficiado el negocio financiero de las ART, claro que sí. La recaudación de las ART en 2011 ha sido de 12.708 millones, con indemnizaciones tarifadas, pequeñas y sin actualización para los trabajadores. ¿Dónde están esos montos?

Pues bien, durante los primeros seis meses de 2012 la recaudación ha sido de 9 mil millones; o sea que la estimación de recaudación de las

ART sólo para este año es de 20 mil millones de pesos.

Además, a lo largo de estos años se produjo una gran concentración de las empresas: de cuarenta ART que empezaron hoy quedan veinticuatro. Pero el 75 por ciento de la facturación está concentrado en ocho empresas. Como dijo el señor senador Artaza, estamos beneficiando, justamente, a los bancos. Y es curioso también el bajo nivel de utilidades que declaran las ART, que está en un promedio del 5 por ciento, máxime cuando estamos hablando de semejante recaudación y pagos de indemnizaciones tan paupérrimos.

También es curiosa la diferencia que existe entre la ART más grande, la que más factura, que declara solamente un 4 por ciento de utilidades, y la que menos factura, que declara un 21,7 por ciento de utilidades. O sea que hemos perdido la oportunidad de avanzar más profundamente en conocer cómo está el sistema y adónde fue esa enorme recaudación de las ART durante estos años.

Como dijimos antes, este proyecto no habla sobre la prevención, y por eso quiero referirme a las estadísticas de accidentes en nuestro país. En una comparación internacional, la Argentina tiene índices que superan los de países desarrollados. Si tomamos el índice que da el Ministerio de Trabajo de la Nación la tasa de fatalidad sería el doble de la de países desarrollados: 6,2 muertes cada mil trabajadores, cuando los países desarrollados tienen una tasa de 2,7. Pero otros estudios internacionales, con otras estadísticas —no las del Ministerio de Trabajo de la Nación—, dicen que la Argentina tiene una tasa de fatalidad de 14,5 muertes cada mil trabajadores, porque se toman en cuenta no sólo los accidentes sino también las enfermedades profesionales, que son las que no estamos registrando.

Creo que el “tripartismo”, este acuerdo entre empresarios, algunos sectores del sindicalismo —porque obviamente no están todos de acuerdo— y el Estado, puede ser una buena idea en cierto tipo de negociaciones, pero jamás puede ser el principio rector de la legislación. ¡Por favor! Los principios rectores de la legislación son la Constitución Nacional, los derechos de los trabajadores y la justicia social.

Finalmente, quiero hacer una referencia al sistema democrático: el Congreso es la ins-

titución nodal de la democracia; aquí están representados los distintos pensamientos de la sociedad y por eso el debate es tan importante, porque de la confrontación de ideas surgen los consensos y las mejores decisiones. Cuanto mayor consenso tenga una ley, más estable va a ser en el tiempo, pero últimamente estamos viendo que no se busca el consenso sino la imposición de la mayoría.

Hay un estudio de un profesor de la Universidad Di Tella sobre cuánto tiempo de debate tienen en el Congreso los proyectos que manda el Poder Ejecutivo. En la época del doctor Menem se debatían seis meses y medio, en la época de Néstor Kirchner cuatro meses y en la época de Cristina Fernández dos meses, con el récord extraordinario de la ley de expropiación de Ciccone, que se debatió quince días.

Entonces, me parece que lo que tenemos que recuperar es justamente el debate y tomarnos el tiempo. Ésta es una ley importante, y si nos hubiésemos tomado el tiempo estoy segura de que hubiésemos encontrado consensos importantes y estaríamos dando a la luz una ley destinada a proteger a trabajadores, a empresas y justamente a tener algún tipo de permanencia en el tiempo.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Cano.

Sr. Cano. – Señora presidenta: seré sintético, porque no voy a redundar en las cosas que acá se han dicho.

En primer lugar, quiero señalar que creo que tenemos la obligación de reflexionar sobre la génesis y sobre la forma en la que este proyecto llega a este pleno del Senado.

La verdad es que uno aspira a vivir en un país que debata políticas públicas, políticas de Estado que trasciendan a una gestión de gobierno, y sobre todo en temas como éste, que desde el famoso acuerdo de 1994, y con la sanción de la ley en 1995, vemos que los pilares fundamentales de esas normas han sido declarados inconstitucionales por la propia Corte.

En 2005 el propio Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, convocó a expertos a debatir sobre la legislación laboral y, casualmente, la conclusión de ese trabajo con respecto al tema que hoy estamos tratando acá planteaba que había que seguir la doctrina de la Corte Suprema de Justicia. En esa conclusión se citó

el caso Yosco, según el cual la percepción de las prestaciones que derivan de la ley de riesgo para resarcir la incapacidad permanente por parte del trabajador no impide que ejerza su derecho a obtener indemnizaciones por la vía de la acción civil, esto sobre la base de que ambos regímenes legales –el especial y el del derecho civil– resultan independientes. Y la verdad es que esta iniciativa transita un camino absolutamente contrario a las propias conclusiones de ese equipo de especialistas convocados por el Ministerio de Trabajo.

También nos llama la atención la foto, porque uno entiende que en política puede haber alianzas y coincidencias circunstanciales, pero lo que no comprende es que en razón de esas coincidencias algunos no sean convocados a debatir cuestiones en las cuales uno de los aspectos y de las patas fundamentales en el debate son los trabajadores.

Realmente es incomprensible que no hayan sido convocadas la CTA, la CGT, la FACA, o que no se haya citado a los estamentos académicos, como es costumbre en muchos temas que se abordan en el ámbito del Senado de la Nación.

Es incomprensible, también, que, tras la invitación que hicieron el vicepresidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y los bloques que no son oficialistas, no haya asistido ningún senador del oficialismo, como si acá hubiese una verdad revelada o absoluta que impone el Poder Ejecutivo y a la cual nadie puede oponerse ni tener la osadía de votar en contra. Habría sido bueno que quienes defienden este proyecto desde el convencimiento, desde la convicción y con argumentos sólidos, se hubieran hecho presentes ayer en la audiencia pública para debatir con quienes tienen una mirada distinta de la génesis y de la sanción de esta norma.

Nosotros nos oponemos a esta lógica permanente que tiene el oficialismo de alabar a aquellos que son aplaudidores de la gestión oficial; y que quienes plantean que no es real la inflación que el INDEC intervenido nos quiere hacer creer a los argentinos, o critican el tema del impuesto a las ganancias, inmediatamente pasen a ser enemigos, a pesar de que colaboraron en la construcción del poder que hoy tiene el oficialismo.

Realmente, me parece que hay que terminar con esta lógica de convocar sólo a quienes aplauden. En lo personal, estoy absolutamente convencido de que los aplausos del titular de la UIA tienen su pago con la sanción de esta norma; absolutamente; de eso no tengo ninguna duda. Esta nueva alianza que tiene el gobierno con De Mendiguren y con la CGT de Cristina hace que se excluya a todo el que piensa distinto.

Acá se dijo que esto no tiene ninguna conexión con las normas de seguridad que deben tener las empresas y las industrias. En verdad, la precarización laboral, el empleo en negro y las condiciones inhumanas a las que se somete a los trabajadores, en muchos casos, han tomado estado público a través de la prensa porque hay un rol totalmente ausente de los estados provinciales desde sus ministerios de Trabajo, y desde el de la Nación, para que se cumplan las normas vinculadas con la seguridad laboral.

Ahora bien, cuando se sostiene que este tipo de leyes propicia el quiebre de las empresas, sería bueno que se presentara documentación que acredite cuáles son, efectivamente, las empresas que han quebrado en la Argentina como consecuencia de los juicios laborales. Por lo menos, nosotros no hemos encontrado alguna que acredite tal aseveración. De hecho, ayer se mencionó esto en labor parlamentaria. Me imagino que algunos referentes del oficialismo también lo dijeron. Entonces, sería bueno saber cuáles son los nombres o la razón societaria de estas empresas.

Por otro lado, también se habló de la cultura del juicio. Quiero citar al doctor Julio Simón, quien plantea que sin estos juicios, nunca se habría hecho realidad la garantía consagrada en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que sienta el principio de que nadie debe hacer daño a otro y, si lo hace, debe repararlo. Ésta es una cuestión básica de derecho.

Por último, evidentemente, a la presidenta de la Nación no le ha ido mal con la cultura del juicio porque declaró que, gracias al trabajo de su estudio y al ejercicio de la profesión —a pesar de que no hemos encontrado registros de que esté matriculada en algún colegio—, tiene un patrimonio cercano a los 79 millones de pesos. Entonces, habría que preguntar a la presidenta qué opina de la cultura del juicio dado que ella manifestó que le fue muy bien.

Desde ya, no puede haber ninguna cuestión económica que justifique que se conculquen derechos claramente consagrados en nuestra Constitución Nacional. Como bien dijo la senadora Liliana Negre de Alonso, el espíritu de esta norma se aleja absolutamente de la lucha histórica y de los principios de Perón con respecto a los derechos de los trabajadores. Creo que tiene mucho más que ver con la Fundación Mediterránea, con Cavallo y con la década neoliberal que con los principios que históricamente defendió el peronismo.

Por esas razones, votaremos en contra de esta norma.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). — Tiene la palabra el señor senador Castillo.

Sr. Castillo. — Me sorprendió, pero está bien.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). — En realidad, usted tenía que hablar antes que el senador Cano, pero no estaba presente.

Sr. Castillo. — No; en verdad, yo soy presidente de bloque y debería hablar en los momentos de cierre...

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). — Como usted quiera.

Sr. Castillo. — Ya que estamos, siendo esta hora de la tarde, me parece muy bien hacerlo. Pero ésa es la verdad: formo parte de un bloque que, a pesar de ser chiquito, está acá desde 1995. Salvo la Unión Cívica Radical, que no cambió su nomenclatura, el Frente Cívico y Social es el más viejo, más que el Frente para la Victoria. Así que ya que estoy hablando, voy a hablar y lo haré al solo efecto de plantear el sentido de nuestro voto, señora presidenta.

Yo no formo parte de la comisión y no estuve presente. De manera que me solidarizo con todas las cuestiones formales que aquí se han planteado y acerca del modo en que esto se llevó adelante. El conocimiento de esta cuestión me viene a través del trabajo de los asesores, de lo que he escuchado de ustedes y de lo que pude ver de los dos proyectos que están aquí. En efecto, una de las iniciativas es del oficialismo —que modifica la ley que entró en vigencia en 1996— y la otra entiendo que estaba en la Cámara de Diputados. Ahora bien, como este proyecto ingresó por acá, el Partido Socialista lo trae a consideración.

Si uno leyera los dos proyectos sin mirar quiénes son los autores, diría que el proyecto que se va a plantear por minoría debería ser el proyecto oficial. ¿Por qué? Porque realmente hace un cambio de sistema: lleva esto que es semiprivado a lo estatal; crea una serie de organismos, etcétera. Pero también sé que ese proyecto no será aprobado. A su vez —digo algo desde el corazón—, preferiría que ese proyecto no se aplicara con este gobierno. Entonces, creo que estamos frente a dos iniciativas: una que realmente cambia el concepto, que es el proyecto de la minoría, y otra que solamente modifica lo actual. Repito: me encantaría este proyecto con otro concepto, con otro gobierno.

El sentido común nos está indicando que este proyecto, cuya materia lleva unos 16 años de aplicación, recoge lo que viene del Poder Ejecutivo y suma los 3 artículos que se modifican. En síntesis, se trata de lo que se ha venido obteniendo a partir de la excesiva litigiosidad del tema: de los fallos de la Corte y, también, de las expresiones que se han vertido desde el Ministerio de Trabajo a lo largo de estos años. Estamos frente a un proyecto que sólo cambia algunas cuestiones —no modifica el sistema en el fondo— y que, en alguna medida, recoge los temas que se han venido viendo.

Observar un proyecto que viene del Ejecutivo y no trae nada detrás para mí es importante y me anima a plantear, entonces, el sentido del voto. Veo cuatro puntos del proyecto que quiero mencionar: el primero, la actualización de los mínimos; el segundo, el acortamiento de los plazos de cobro; el tercero, esto de los ajustes semestrales, y el cuarto, el establecimiento del pago inmediato en vez de los pagos escalonados.

En cuanto a alguna crítica que he escuchado por ahí referida a que el proyecto está alejado de la humanización y abarca cuestiones meramente contables, digo: cuando se trata de un tema de trabajo, tanto para el que va a iniciarlo como para el que va a hacer la inversión, ver los números es muy importante. Será materia de los jueces humanizar la ley en los casos en que corresponda.

Me alegra también esta discusión porque hemos venido sosteniendo desde hace tres o cuatro años, cada vez que tratamos la ley de presupuesto, que uno de los principales problemas que tenemos en este país es algo que el

gobierno no ha querido reconocer casi nunca: la inflación. Entonces, en estos temas de actualizar los mínimos, de acortar los plazos de cobro, de determinar los ajustes semestrales y de establecer una cuestión de inmediatez y de no escalonamiento, en verdad, el gobierno nacional empieza a reconocer algo que lleva a que estos temas sean totalmente judiciables.

Por estas razones, no voy a acompañar en esta oportunidad al bloque radical y sí lo haré respecto del proyecto que viene del oficialismo.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). — Tiene la palabra el senador Basualdo.

Sr. Basualdo. — Señora presidenta: hoy estamos acá entre este nuevo proyecto y la ley vieja que teníamos. Me gustaría un proyecto mejor, más avanzado; pero debemos ser previsibles.

Con la ley que tenemos actualmente, hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda. ¿Por qué los llamo así? Si alguien que trabaja en una pequeña o mediana empresa mañana tiene un accidente, indudablemente nadie le va a pagar absolutamente nada porque la pyme no tiene capital, por más que sea judiciable. Cerrará la pyme o el trabajador deberá transar de otra manera. En cambio, una gran compañía hasta puede tener un seguro propio para casos eventuales. Entonces, sí puede llegar a pagar.

Todos fomentamos las pymes. A las pymes hay que darles previsibilidad. Acá no tenemos que ser enemigos de los trabajadores. He tenido empresa y, gracias a Dios, creció por el buen desempeño y relación con los trabajadores. Teníamos muy buen diálogo. No debemos enfrentarnos. Ningún empleador quiere que ningún empleado tenga un accidente. Se imagina que por más que se lo pague el seguro, por más que no le cobre nada, usted pierde un trabajador. Entonces, todos queremos evitar el accidente de trabajo. De hecho, en este momento las mismas ART están pidiendo un descuento para aquellas empresas que tienen un ingeniero en seguridad e higiene. Eso es muy bueno porque, de esa forma, prevenimos los accidentes de trabajo. Nadie quiere que el trabajador tenga un accidente.

Debemos decir también que si queremos crear fuentes de trabajo, tenemos que ser previsibles. Es decir, tenemos que decir a las pymes —y a las grandes también— cuál va a ser el costo. Mediante la ley vigente, es im-

posible hacerlo. Reitero: hay trabajadores de primera y de segunda. Algunos pueden cobrar y otros no pueden cobrar. Por más que tenga un accidente, sea pianista y se corte un dedo, no puede cobrar porque no le va a sacar nada a una pyme. Algunos privilegiados que trabajan en una empresa que tiene fondos pueden llegar a cobrar. Entonces, no hay un sistema porque no estamos protegiendo a todos los trabajadores sino a algunos.

Esta forma de actualizar, de poder tener un límite y decir que la ART debe pagar, nos hace previsible y eso es bueno para crear trabajo. Los que no tienen trabajo no lo pueden tener porque nadie quiere contratar a un trabajador si no sabe los costos que va a tener. Entonces, tenemos que fomentar que puedan ser accesibles para que puedan seguir construyendo trabajo.

Voy a disentir con mi bloque, que va a votar en contra, porque, ante la ley vigente, prefiero esta nueva. Me gustaría hacerle una reforma. Dios quiera que después vayamos por más. Por eso, adelanto mi voto positivo.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). — ¿Usted pide una interrupción, senadora?

Sra. Di Perna. — Señora presidenta: de mi parte, quiero decir que coincido plenamente con todo lo expuesto por las senadoras Negre de Alonso y Escudero.

Mi voto va a ser negativo y solicito autorización para insertar fundamentos más extensos. Nada más.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). — Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. — Señora presidenta: lamentablemente, ayer tuvimos una reunión parcial de la Comisión de Trabajo. Habría sido bueno en este tema tan importante lograr una reunión de comisión con todos los miembros, junto con la representación de todas las voces. Es decir, no sólo de quienes vinieron la semana pasada sino también la del titular de la CGT, Hugo Moyano, la del titular de la CTA, que invitamos ayer, y también las de algunos juristas de nota que son expertos en materia laboral.

Ayer se ha dicho que la ley de accidentes y riesgo del trabajo vigente, después de su aplicación y antes de los fallos de la Corte Suprema de Justicia que pusieron el punto donde debían ponerlo respecto de los derechos establecidos

para los trabajadores en la Constitución Nacional, constituye claramente un atentado a los derechos humanos. Lamentablemente, el proyecto del gobierno nos remite a la década neoliberal de los 90, ya que restablece conceptos vertidos en la ley 24.028 de 1991 y formula un planteo en el marco de la visión económica del derecho.

Escuchaba ayer al senador Pichetto, que seguramente después va a cerrar por el bloque del Frente para la Victoria, reiterar los mismos argumentos de la década del 90, es decir, que si no resolvemos la cuestión de la inconstitucionalidad del artículo 29 de la actual ley de accidentes y riesgos de trabajo, van a quebrar las empresas; también, que resolver este tema va a generar una propensión a más puestos de trabajo. En verdad, ese argumento es contradictorio con la realidad así como con el discurso y con el relato del propio gobierno. Así lo ha dicho González Gaviola cuando estuvo aquí al manifestar que en 2003 había tres millones y medio de trabajadores y que ahora hay muchos miles más producto de otras cuestiones que tienen que ver con el desarrollo económico —con la manera en que ha crecido el país en los últimos años— más que con la legislación sobre riesgos de trabajo.

La verdad es que el oficialismo queda atrapado en esta gran contradicción: un gobierno que se dice progresista pero que en el fondo genera este proyecto que es de neoliberalismo explícito. Eso es un claro retroceso. Por lo tanto, este proyecto no mejora sino que empeora la situación. Además, no aborda el problema central de la prevención que toda la doctrina, toda la jurisprudencia y los pactos internacionales recogen como la materia primaria. Tampoco aborda los derechos establecidos en la Constitución.

Esta iniciativa legitima a las ART pero en el marco del funcionamiento de las AFJP que el propio gobierno derogó. En ese sentido, para ser más breve, hago míos los fundamentos y algunos planteos realizados por la senadora Escudero en cuanto a los números —no ya difusos— relacionados con las ganancias que tienen las administradoras de riesgos de trabajo.

Este proyecto no ofrece cambios en relación con el abordaje de las enfermedades no listadas. Ayer, durante la audiencia realizada en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, hubo coincidencias no sólo en los juristas sino

también en los representantes de los trabajadores –CGT y CTA– acerca de que entre el 70 y el 80 por ciento de los juicios tienen que ver con las enfermedades no listadas, es decir, las que no reconocen las ART. En ese sentido, cuando los trabajadores van a las ART y piden el reconocimiento de algún acontecimiento para comenzar el trámite de indemnización, son rechazadas enfermedades respecto de las cuales los organismos internacionales están planteando su incorporación en el conglomerado de afecciones profesionales, tales como discopatías, problemas lumbares, estrés, problemas cardíacos, várices y cervicobraquialgias. Algunas de estas dolencias están planteadas por los organismos internacionales y otras no, pero todas ellas, entre otras, son enfermedades que no están listadas y que son causantes de los miles de juicios que están colapsando los juzgados laborales y civiles. Sin embargo, a partir de la sanción de esta iniciativa, serán sólo los civiles.

En el proyecto no se establece la responsabilidad civil de la administradora de riesgos de trabajo, lo cual es un aspecto expreso de neoliberalismo. Jurisprudencialmente, el fallo “Tonillo” ha planteado cuál es la responsabilidad civil que les cabe sobre determinadas contingencias o situaciones a las administradoras de riesgos de trabajo, lo cual no es planteado por este proyecto, que es impulsado por un gobierno progresista. Ése no es el mejor camino para resolver la judicialización. En todo caso, se resolvería el tema de la judicialización incluyendo las enfermedades no listadas actualmente por las ART o, tal vez, mejorando la actualización que plantea el proyecto de ley en cuanto a la escala, eliminando el promedio del año anterior y tomando, por ejemplo, el último sueldo anterior a la manifestación invalidante, aplicando el RIPTe en todos los casos o estableciendo, en lugar del 20 por ciento adicional –que no sabemos tampoco cómo se calcula–, un porcentaje.

Esta iniciativa tampoco incentivará el empleo y una mayor registración, tal como expresó ayer el senador Pichetto durante el breve debate que tuvimos en la reunión de labor parlamentaria. Realmente, escuchar estos conceptos y escuchar a Cavallo en la década de los 90 defender la flexibilización laboral y de la Ley de Riesgos del Trabajo es más o menos lo mismo.

Considero que el proyecto incurre en algunas contradicciones, no ya desde el punto de vista de la interpretación política sino desde su propio texto, que no resuelve ni mejora la situación de los trabajadores, pues vuelve a la doctrina anterior a los fallos de la Corte. Es decir que va y vuelve a ratificar la letra, especialmente, del artículo 39, que ha sido objetado por la Corte y que es la doctrina que se aplica y que realmente tutela el concepto de la protección integral del trabajador. En consecuencia, pienso que este proyecto es retrógrado. No sé cómo el Poder Ejecutivo puede avanzar tan rápido y hacerle creer al conjunto de los trabajadores que resolverá el problema.

El senador Martínez ya ha leído el fallo en el caso Aquino que plantea, justamente, que en la legislación hay que evitar la fijación de limitaciones que impliquen alterar los derechos reconocidos por la Constitución Nacional. El principio de opción excluyente que propone el artículo 4º, presidenta, es claramente una limitación. No es el camino para resolver la judicialización. Va a haber más judicialización. Va a haber planteos de inconstitucionalidad. Y por lo que tiene dicho la Corte en términos de lo que establece la Constitución Nacional, obviamente, va a declarar inconstitucional esta opción excluyente que plantea el artículo 4º. No es el mejor camino. No resuelve el problema de la judicialización que, por otra parte, no es un obstáculo para el crecimiento y para que haya más empleo. Se trata de un problema que hay que resolver, pero son otros los factores y otras las vías que deberían abordarse. No garantiza el freno a la judicialización.

Algunos temas se reiteran con respecto al código vigente. La reforma del Código Civil que tenemos a estudio, en el artículo 332, restablece los términos del artículo 954 del código actual. Indica que el afectado tiene opción de demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio; pero la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si éste es ofrecido por el demandado al contestar la demanda. Sólo el lesionado y sus herederos pueden ejercer la acción. Es decir que se puede demandar la nulidad o modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad o debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviere por medio de ellos una ventaja

patrimonial evidentemente desproporcionada sin justificación. Éste es el nuevo artículo 332, si se aprueba el Código Civil. Por supuesto, se hará el planteo del caso a efectos de hacer valer los principios constitucionales.

Con respecto al tema de la opción excluyente, algunos se plantean que podría actuar como una suerte de principio extorsivo. ¿Qué trabajador tendrá libertad de opción si, además de incapacitado, se queda sin trabajo? ¿Optará un trabajador que quedó con el 50 por ciento de incapacidad cuando termina la etapa provisoria y se queda sin ingresos? ¿Qué sucederá con la familia del fallecido que no tiene medios de subsistencia para alimentar a sus hijos? ¿Va a esperar un juicio de cinco o diez años? Van a cobrar la indemnización que está tarifada, presidenta; pero después, si la consideran injusta, que no alcanza o que no hay un resarcimiento integral, van a ir a la Justicia...

Sr. Pichetto. – ¿Por qué van a ir a la Justicia?

Sr. Morales. – Y la Corte, nuevamente, va a fallar la inconstitucionalidad. Es decir que es un retroceso respecto del avance que ha significado para la Corte, en materia de derecho, de 2004 a esta parte.

El senador Naidenoff me pide una interrupción. Se la concedo.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Esta interrupción es al solo efecto de una aclaración para el titular de la bancada del oficialismo.

Van a acudir a la vía judicial para reclamar la acción civil porque el criterio de la Corte Suprema de Justicia, que se sentó desde 2004 hasta el presente, es justamente el concepto de la reparación integral. Es decir, en la medida en que se refuerce este tipo de maniobras para optar, y una vez que se opte por la indemnización de la aseguradora de riesgos del trabajo, resulta lógico que si hay criterios injustos se acuda a la vía civil. Y, con esos precedentes jurisprudenciales, automáticamente vamos a volver al concepto ya sentado de la reparación integral. Por lo tanto, éste es un paso más de retroceso que embarra la cancha y perjudica a los trabajadores.

Sr. Pichetto. – Si me permiten una interrupción...

El concepto de una reparación justa –el pago rápido, la actualización de la indemnización– determina indudablemente el bloqueo de la acción civil.

Además, éste es un instrumento imprescindible para que la Argentina pueda tener una política laboral de crecimiento de empleo; para que las pymes, en nuestro país, contraten gente; para que el proceso que yo denomino “de la industria del juicio” se limite y se bloquee. Porque lo que hay en la Argentina es una proliferación de acciones judiciales por la vía del derecho común en el marco laboral que desincentivan e impiden que muchos empleadores, pudiendo tomar un trabajador, no lo hagan por el temor y el miedo a estas indemnizaciones.

No hay un sistema de previsión de seguro. Es imposible prever un resultado en la Argentina, porque la aplicación del 1.113 –el riesgo o el vicio de la cosa que abarca; además, toda la faceta de la acción laboral; una teoría abierta, una avenida amplia por donde todo el mundo circula en el mundo del derecho del trabajo– coloca a nuestro país en una situación de limitación a la generación de empleos, que es uno de los factores más graves que tenemos. Me refiero al empleo en negro y a la no posibilidad de que las empresas, cuando crece la demanda, puedan llegar a tomar empleo, especialmente las pequeñas y medianas.

Entonces, estamos debatiendo sobre un instrumento que sea justo. De ninguna manera estamos hablando del instrumento de la década pasada, que establecía reparaciones totalmente empobrecidas, que eran injustas y que, lógicamente, planteaban una ínfima reparación. Eso abría el camino a que la Corte no reconociera que se había abonado con justicia. Por lo tanto, se abría el camino del derecho civil en materia laboral.

Me parece que hay que volver a un camino de cordura y de responsabilidad, que no significa retornar a la década del 90. Esto significa que este país puede tener una legislación moderna; una indemnización justa; un camino rápido para que la viuda de un trabajador muerto pueda cobrar inmediatamente; para que el “valor vida” sea un valor responsable y razonable, lo pueda cobrar rápidamente en quince días y no que

tenga que ir a un juicio de cinco años. Mientras tanto, ¿qué pasa? ¿De qué vive esa familia?

Considero que están equivocados. Les digo lo siguiente y voy a avanzar un poco más en este tema porque quiero dar mi pensamiento real sobre la legislación laboral en la Argentina. Es una legislación que ha tenido un avance extraordinario desde 2003 en el campo de la reparación y de la protección; pero creo que en las pymes, en las pequeñas empresas, hay que buscar con creatividad. Hay que buscar nuevas normas que permitan el trabajo en blanco en la Argentina, que permitan la contratación de empleo en el país para que la gente pueda tener trabajo en blanco. Porque el sistema rígido —es uno de los más rígidos de Latinoamérica— impide la generación de empleo.

Éste es un debate que en algún momento también habrá que dar en la Argentina.

Y esto no significa volver para atrás. Significa mirar para adelante: cómo crecemos, cómo generamos empleo en blanco, cómo salimos del trabajo en negro y cómo salimos de un montón de situaciones que estamos viviendo y que, indudablemente, son verdaderas trabas para el desarrollo y el crecimiento del país.

Muchas gracias por la interrupción. Sé que fue larga. (*Risas.*)

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sr. Presidente. — Sigue en el uso de la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. — Larga, pero está bien, porque desnuda totalmente el pensamiento...

Sr. Pichetto. — Absolutamente.

Sr. Morales. — Claro, justamente: si éstos son los fundamentos de la flexibilización laboral. ¡No se puede creer! ¡Son los fundamentos de la flexibilización laboral! Se lo digo a la presidenta o al presidente: no sé quién está ahí al comando.

Sr. Presidente. — Yo, senador Morales.

Sr. Morales. — No tiene nada que ver que las pymes, por esta vía de la modificación retrógrada que se está planteando en la ley de accidentes y riesgos del trabajo, tengan más empleo.

Recordemos que las pymes y las mipymes son el tamaño de empresa que más emplea. Obviamente, tienen que resolver el problema del trabajo en negro producto del hecho de que no

pueden pagar el sueldo que abonan las grandes empresas dadas las formalidades que tienen que cumplir, incluidos aportes y contribuciones.

El propio Roberto Lavagna dijo que hasta un determinado nivel de planta no hay que ir por el camino de la modificación retrógrada de la ley de accidentes y riesgos del trabajo. Es por el camino de que tengan un sistema distinto de aportes y contribuciones; por eximir en algún nivel los aportes y contribuciones; por establecer regímenes simplificados en materia laboral para lograr el blanqueo, la mayor registración y fortalecer las pymes; con un apoyo concreto a las pymes, con crecimiento.

El propio González Gaviola habló de que teníamos 3 millones y medio de trabajadores en 2003; ahora tenemos 8 millones 700 mil trabajadores. Ahora abordamos este proyecto de ley, ¿y resulta que por modificar la ley de riesgos del trabajo vamos a generar más empleo? Este es el criterio economicista de la interpretación economicista del derecho que tantos problemas nos generó en la década del 90. Yo no quiero chicanear, pero la verdad me deja la pelota botando. Es lo mismo que ha dicho Cavallo.

Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Me sorprende el pensamiento del senador Morales. Los dos grandes ejes de dos gobiernos democráticos desde el 83 en adelante fueron dos procesos de reforma laboral que sostuvo el radicalismo: la primera, denominada “Ley Mucci”, que tenía como finalidad debilitar el rol de la estructura...

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Sanz. — ¡No, no! ¡Era democratizar, Miguel!

Sr. Pichetto. — ¡Déjenme decir lo que yo pienso!

Apuntaban fuertemente a la estructura corporativa de los sindicatos y le pusieron el rótulo también de la democratización. Después no lo hicieron porque tuvieron la oportunidad de reconocerle a ATE un rol dentro de las organizaciones sindicales. Tuvieron la conducción durante el período de De la Rúa; no lo hicieron. Y, también, después fracasaron con la famosa reforma laboral.

Lo que yo digo es: en la Argentina, ¿de qué se trata? De tener una legislación moderna, razonable, con indemnizaciones justas, con cobro rápido, que nos saque del perjuicio que significa para muchas empresas tener que soportar indemnizaciones millonarias que terminan llevándolas a la quiebra y dejando a la gente en la calle.

En las pymes y medianas, cuando tienen un juicio laboral por incapacidad o por muerte, las indemnizaciones y la aplicación de la fórmula polinómica liquidan prácticamente a la empresa. No tiene previsibilidad y el costo del seguro es muy alto. Entonces, éste es un instrumento que era necesario no ahora sino hace cinco años. Porque creo que hubiera acompañado un proceso de expansión y de crecimiento interesante. No estamos debatiendo con la lógica de los 90. Estamos debatiendo con una lógica del presente y del futuro del país.

Siga usted, senador Morales.

Sr. Morales. – Gracias, ya que me lo permite.
(Risas.)

Sr. Presidente. – Junto con el rol de senador...

Sr. Morales. – Hace de presidente.

Sr. Presidente. – Exacto.

Sr. Morales. – ¡Ojo, guarda, cuidado!
(Risas.)

Sr. Presidente. – Por lo menos del bloque, senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: lo diga como lo pinte, aunque quiera disfrazar lo que dice el senador Pichetto, es lo mismo que decía Cavallo en la década del 90. Pero no sigamos dándole vueltas a ese tema. Nosotros creemos que no es el camino y que, en verdad, este proyecto de ley no resuelve los problemas que pretende decir que resuelve.

Además, la verdad es que cuando abordamos la reforma en la década del 80, planteamos la democratización. Es peor lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo ahora. Me refiero a que se hagan esto entre peronistas: primero, dividir la CGT y dividir el movimiento obrero. Hay dos CTA y hay dos CGT. Pero, aparte, este Ministerio de Trabajo lo que ha hecho fue aplicar una multa a la CGT y al gremio de camioneros de 4 millones de pesos. ¡Los persiguen! Esto no puede ser: un gobierno peronista no puede hacer esto de perseguir a las organizaciones. Eso

es peor, en todo caso. Lo digo, ya que se habló de esta intención aviesa que habría tenido el ex presidente Raúl Alfonsín con la “Ley Mucci”. Es peor esto que está pasando ahora, que parte en dos al movimiento obrero entre “oficialista y opositor”. Digo esto, capítulo aparte...

Además, presidente, el tema de la actualización lo podría haber hecho el propio Poder Ejecutivo, que ha dictado decretos como, por ejemplo, el 1.720, que amplía el tema de la prestación. Les da la posibilidad y la obligación a las ART de que el trabajador sea atendido en los hospitales y en las obras sociales. Es decir, son todas decisiones de este gobierno que han servido para mejorar la rentabilidad de las ART. Se mantiene el perverso sistema de la década del 90. Del mismo modo, podrían haber ajustado las indemnizaciones. En lugar de traer este proyecto con el Ministerio de Trabajo podrían haber realizado un ajuste en las tarifas, en las indemnizaciones que corresponden a los trabajadores.

Pero no sólo eso, señor presidente: hay muchas contradicciones en el texto del proyecto. Es malo porque no corrige todo. Por ejemplo, se omite utilizar el salario vigente al momento de la primera manifestación invalidante. Se insiste en la utilización del promedio de los últimos doce meses que establece el artículo 12 de la ley. O sea, se deja incólume el artículo 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo. El ingreso base considera las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones para determinar la cuantía de las prestaciones dinerarias pero para establecer el régimen de alícuota; esto es en beneficio de las ART. Esa determinación y la base imponible se toman sobre el salario, entre el básico y los conceptos remunerativos y también los no remunerativos. Esto está en el artículo 10, último párrafo, del proyecto.

A su vez, se elimina el artículo 19, que establece la renta periódica. Pero se mantiene el 9, que fija el carácter provisorio y definitivo de la incapacidad laboral permanente. El inciso 1) habla del pago mensual y el 2) del pago único. Es decir, podrían haber hecho una corrección, al menos, y derogar o eliminar el inciso 1) del artículo 9°. Es tan malo el texto por hacer tan rápido las cosas que tampoco tocaron el artículo 11, inciso 4), que remite al artículo 14, inciso 2), apartado d), y al artículo 15, inciso 2). Todos hablan de la renta periódica, tanto el artículo

14, inciso 2), apartado *d*), como el artículo 15, inciso 2). Tendrían que haber sido derogados.

Es decir, la eliminación o nulidad del artículo 19 tendría que haber llevado consecuentemente a la modificación de estos artículos: el 9º, el 11, el 14, el 15 y el 25, inciso 3), que plantea la exención de impuestos nacionales a los contratos de renta periódica. Todas estas contradicciones van a quedar en el texto del proyecto de una norma que ha venido rápido. No sólo desde el punto de vista conceptual se tendría que haber debatido más sino también desde el punto de vista de la propia letra. Lo que se está por aprobar terminará siendo un engendro, con grandes contradicciones entre normas que se derogan y otras que quedan vigentes. En definitiva, no se corrige el texto. Por otra parte, se mantiene el problema de los salarios desactualizados en los casos de juicios por resarcimiento. No se aplica el ajuste pertinente a las prestaciones dinerarias que se determinan para casos en particular, por ejemplo.

También hay que recalcar algo que aquí se ha dicho, que es el tema de los fueros, porque se saca al trabajador del fuero del trabajo. ¡Esta es otra normativa antiperonista! Ya hay fallos que dan cuenta de que al trabajador no se lo puede apartar de su fuero natural. Sin embargo, aquí lo apartan de dicho fuero y lo ponen en la esfera de la justicia civil, sacándolo de los juzgados laborales que indemnizan mejor que las acciones que están radicadas en sede civil. Se indemniza entre tres y cuatro veces por encima de la tarificación indemnizatoria que establecen las ART; y todo esto, pasando por encima de las resoluciones de escalas de tarifas que establecen los juzgados civiles. Esto es lo que termina siendo funcional a los empresarios. Por eso, nosotros hablamos del pacto firmado entre el gobierno nacional, el sector obsecuente de la UIA y el sector obsecuente de la dirigencia sindical. Lo único que faltaba en la reunión del otro día –yo no pude ir porque se suspendió el vuelo que debía tomar– era que aparecieran los aplaudidores de la Casa Rosada para cerrar el marco de la escena que se había generado con estos señores de la UIA y los dirigentes sindicales. Esto es lo que pasa.

Por eso, ayer en la reunión de labor parlamentaria...

Sr. Pichetto. – ¿Me permite?

Sr. Morales. – No voy a dar interrupciones, porque después él va a hablar y va a tener diez horas. (*Risas.*)

Sr. Pichetto. – Voy a ser breve.

Sr. Morales. – No.

Sr. Pichetto. – Es para esclarecer.

Sr. Morales. – Bueno, okey, esclarezca.

Sr. Sanz. – Voy a presentar una queja por la facilidad con que el senador Morales otorga interrupciones. (*Risas.*)

Sr. Pichetto. – El fuero y la competencia tienen que ver con la naturaleza de la acción. Si usted hace una demanda laboral por diferencia de haberes litiga en un tribunal del trabajo. Pero si la acción es civil, por los artículos 1.113 o 1.109 –que tienen que ver con las acciones de responsabilidad en materia de daños–, la naturaleza de la acción determina que la competencia sea el juzgado civil.

Sra. Negre de Alonso. – No.

Sr. Pichetto. – Bueno, éste es el debate que está abierto en la Argentina. Es una cuestión de naturaleza de la acción, senador Morales.

Sr. Presidente. – ¿Le va a conceder una interrupción a la senadora Negre de Alonso?

Sr. Morales. – Después del consejo jurisprudencial del señor senador Pichetto, le concedo una interrupción a la senadora Negre de Alonso.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente, senador Pichetto: el principio protectorio del derecho laboral es para todas las acciones y el derecho laboral es de orden público. El principio protectorio de los trabajadores se aplica aunque litiguen en sede civil; es el *in dubio pro operario*. Es la protección que la República Argentina le ha dado al trabajador desde el advenimiento del peronismo al poder, con el general Perón, porque es la parte más débil de la relación económica y laboral. Y llevarlo a la justicia civil, bajo las reglas civiles, es mercantilizar el derecho del trabajo.

Sr. Pichetto. – Pero si la acción es civil.

Sr. Presidente. – Por favor, senador Pichetto, ya tuvo la palabra.

Sr. Morales. – Bueno, ya está, terminado, listo, tranquilo.

Sr. Presidente. – Estamos todos tranquilos.

Sr. Morales. – Señor presidente: en primer lugar, hago míos los conceptos vertidos por la senadora Negre de Alonso. Realmente, este principio de exclusión de la justicia del fuero laboral para llevarlo al fuero civil es la medida más antiperonista que pueda tener este proyecto de ley, porque termina borrando el principio *in dubio pro operario*. Por lo tanto, hago míos –repito– los conceptos de la senadora Negre de Alonso.

Para terminar, no quiero entrar en las otras contradicciones: por ejemplo, el artículo 17, inciso 3), que remite al artículo 277 de la ley, que plantea la posibilidad de acuerdo de cuota litis y que después la excluye. Es decir, una serie de cuestiones que tienen que ver con lo que se está aprobando, todas contradicciones que van a quedar entre la ley que se pretende sancionar y el texto de la ley de accidentes de trabajo.

Pero dejando de lado eso y para ir terminado, quiero decir que la primera cuestión a tener en cuenta sobre este tema debería ser la prevención, porque hay una alta siniestralidad en el país. Ayer se habló de cuatro muertes por accidentes de trabajo por día. Hay 670 mil accidentes entre los trabajadores formales. Si tomamos en cuenta que el 35 por ciento de los trabajadores son informales, la “accidentología” llega a casi un millón de accidentes laborales por año. Entonces, tenemos un alto nivel de “accidentología”. Por consiguiente, ese debió haber sido el primer debate que se tendría que haber planteado acerca de este tema.

También debería hablarse de las comisiones mixtas de trabajadores, como se ha implementado en la provincia de Santa Fe. Esto fue ponderado por la CGT y la CTA. Es decir, una serie de mecanismos de prevención que han mejorado a partir de 2004, cuando la Corte comenzó a declarar la inconstitucionalidad del artículo 39 por el encarecimiento de los juicios. Como iba en contra de los intereses de las propias ART, estas empezaron a hacer esfuerzos para mejorar la cuestión de la prevención, pero no porque haya una política planificada de mejoramiento de la prevención de accidentes de trabajo.

Todo esto daba para la sanción de una ley consensuada. Ha habido una ausencia de debate. Deberíamos haber llegado aquí con un acuerdo marco que involucre a todos los sectores. La reunión con el ministro de Trabajo, la UIA y un

sector de los trabajadores fue, como dije recién, un montaje oficialista en el que sólo faltaban los aplaudidores de la Casa Rosada y que lejos de garantizar el debate y la construcción de consensos en un tema tan importante suena más bien a la expresión de un mero pacto entre el gobierno, estos dirigentes y la burguesía oficialista.

¿Qué hacer? Hay una propuesta que ha presentado la CTA que nosotros parcialmente compartimos, pero que importa un cambio conceptual de incluir el tema de los riesgos de trabajo en la seguridad social, en donde el Estado participe y donde se le dé cobertura no ya solamente al trabajador formal, porque esta modificación y la Ley de Riesgos del Trabajo tienen que ver con los trabajadores que son formales y obvian el tratamiento, la protección y la prevención de los trabajadores informales.

Tal vez ese puede ser un camino, pero siempre la solución se va a encontrar siguiendo el criterio de la Corte, que es el criterio de la Constitución; y si no, hay que modificar la Constitución, obviamente no ahora, porque si no se van a enganchar en la reelección. Pero el problema para el gobierno y para los neoliberales de la década del 90 es que, gracias a Dios, está el artículo 14 bis de la Constitución; está la Constitución Nacional, que tutela y que protege los derechos de los trabajadores.

Por eso, señor presidente, nosotros no estamos de acuerdo y no vamos a votar a favor de esta ley, que es retrógrada, que es recontraneoliberal y que realmente es un gran retroceso para los derechos de los trabajadores.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – Después del “comandante Morales”... (*Risas.*)

Uno ha apreciado en el debate algunas cosas que sobresalen. A mí siempre me gusta escuchar a la senadora Negre de Alonso porque tiene por costumbre hablar con conceptos, con carnadura, y esas cosas uno se las lleva para uno; siempre se lleva un pedacito de la sesión, y le agradezco esa oportunidad. También me gustó la exposición del senador Martínez, porque en definitiva algunas cosas que él utiliza para demostrar que la ley que nosotros estamos proponiendo en nombre del Poder Ejecutivo yo las puedo utilizar a mi

favor, porque en definitiva estamos trabajando sobre un punto parecido.

Todo lo otro es más o menos el mismo follore: hubo un senador que antes de proponer su idea, con mucha estatura o con ninguna estatura, primero agravia a la presidenta; otros presentaron propuestas que tienen que ver con su color político pero no mucho que ver con lo que está sucediendo, y hubo manifestaciones —como la que acabamos de escuchar— en cuanto a que nosotros somos los grandes equivocados al respecto y que Juan Perón debe estar llorando con lágrimas de sangre porque nosotros estamos dejando de pensar lo que él nos enseñara con su magisterio conceptual.

La realidad es que este proyecto tiene por objeto ordenar el régimen de reparación de daños por accidentes de trabajo y por enfermedades profesionales. Ese es el objetivo que estamos persiguiendo nosotros. Este es el objetivo. En algún momento, bajo una pseudopretensión de mejorar la competitividad, se actuó en menoscabo de los derechos de los trabajadores. Esto fue lo que pasó.

Ahora venimos a descubrir que hace cinco años tendríamos que haber hecho esto, y nosotros, que somos unos salames, no nos dimos cuenta y lo venimos a hacer recién ahora, apurados. La realidad no es esa; la realidad es que durante estos cinco años los empleadores y los trabajadores nunca se pusieron de acuerdo. Entonces, ¿cómo se saca eso? ¿Se saca contra la voluntad de los empleadores? ¿Se saca contra la voluntad de los trabajadores? Porque acá estuvieron presentes Caló y Romero, uno secretario general de la CGT y de la UOM, y otro de SMATA, quizás uno de los gremios con mayor nivel de este tipo de conflictividades, y sin embargo han sostenido que era una forma de llegar más o menos a la misma posición.

Moyano, cuando era peronista y hablaba conmigo, decía más o menos estas mismas cosas, no estaba tan lejos de este pensamiento; es más, el tema de las mutuas es un viejo pensamiento de él cuando era peronista; con lo cual, en estos niveles de discusión lo que nosotros tenemos que tratar de plantearnos es todos y cada uno de los puntos que expuso la senadora Corradi, y que éstos nos vayan llevando hacia una limitación, hacia un marco más o menos ordenado respecto de cómo se puede llegar a puntos que

no perjudiquen al trabajador. Para eso están los sindicalistas, el secretario general de la CGT, de la verdadera CGT, porque la otra convocó a un congreso con diez de los veinticinco miembros del Consejo Ejecutivo. Si lo quieren traer acá al señor que la representa me parece estupendo, yo no voy a descalificar a nadie, ni a Micheli ni a Moyano ni a nadie, que cada uno haga lo que se le antoja, pero la CGT se convoca como dicen sus propios estatutos, o por lo menos las organizaciones. Yo no tengo por qué meterme porque, si bien soy ultralaborante, no estoy afiliado directamente a ninguno de esos gremios.

La Ley de Riesgos del Trabajo se sancionó allá por 1995, con aquellas panaceas que nos prometía Domingo Cavallo, que nos lo hizo a nosotros y se lo hizo al gobierno de la Alianza de la misma manera.

¿Y cuál era el objetivo? Discriminar al trabajador, presidente. Fijarle indemnizaciones bajas, mucho menor de la mitad de lo que realmente le hubiese correspondido; y se las ordenaba de tal manera de que no pudiera recurrir a la justicia civil o no pudiera haber discutido o pensado una forma alternativa de ser defendido. ¡No había forma de que se defendiera al trabajador que no fuera de esa manera! Así se lo concibió. No digo que eso sea lo que esté bien, sino que eso es lo que se concibió.

Esto fue ordenado para sí, para un mercado que generara las AFJP, para un mercado que generara las ART, para un mercado que generara las obras sociales, con uno más o menos normado, el otro quedó a la mitad y el tercero no pudieron tocarlo definitivamente. Pero ese era el objetivo: financiarse con un esquema de estas características.

En ese marco de las pequeñas rentas ordenadas y calificadas como rentas vitalicias —dándose con el tiempo—, lo que significaba es que la cuota hacía una curva absolutamente pronunciada y se licuaba lo que estaba persiguiendo el trabajador que, en definitiva, era el gran pavote en esta película, que no tenía ninguna forma de hacerse de un mango porque era mucho el tiempo, porque discutir llevaba tiempo, porque no encontraba alternativas de cómo resolver el tema en un marco elegido y pensado desde el neoliberalismo en serio —no el que pregonaba el senador preopinante— y al que realmente le importa muy poco lo que le pasa al trabajador.

“Si mañana se muere, es uno menos; pongan otro y reemplazamos al tipo rápidamente”. Un concepto que todos hemos apreciado y que creo que ninguno de los que estamos acá está en condiciones de exigir o de pretender defender semejante cosa.

¿Qué sentido tiene, entonces, un régimen, un sistema administrativo de las características que tuvimos con la ley 24.557 donde todo termina en litigio? ¡Ninguno! ¡No tiene ningún sentido! ¿Qué somos? ¿Todos pavotes que nunca nos dimos cuenta para acordarlo? ¡No! No se podía acordar con las dos puntas. Esta es la realidad.

Entonces, les guste o no les guste quiénes la representan —yo no los elijo, los eligen los miembros de cada una de esas organizaciones— define una propuesta que a nosotros nos puede ser útil. Y si es una propuesta útil, que cuaja para los dos sectores, entonces estamos en presencia de la oportunidad de presentarnos dentro de este recinto, de dar el debate que estamos dando en este momento y de arribar definitivamente a una propuesta que le sirva a los dos; porque si les hubiese servido a los dos, no estaríamos sentados debatiendo. Y lo digo con autoridad. He sido jefe de Gabinete de Ministros y me he pelado las orejas durante dos años y medio tratando de ir de un lado al otro para ver si podíamos conciliar este punto y no lo pude conciliar nunca. Es una de mis grandes frustraciones en términos de la búsqueda de soluciones para los trabajadores y que calzara entre los dos sectores, como debía ser de alguna manera.

Este proyecto elimina ese blindaje que puso la ley 24.557, que pretendía imponerle al trabajador la obligación de que no concurriera a la vía judicial de ninguna manera. Esto terminó, entonces, en la industria del juicio —lo que decía recién el jefe de mi bloque— y en la doble vía en materia de indemnizaciones: la genera, la multiplica, porque donde se abrió la primera puertita, esa puertita dejó de ser puertita para ser “puertaza” y todos empezaron a salir por ese lugar; y está bien que así sea.

Perdón por la deformación profesional, pero habiendo sido ministro de Trabajo a uno no se le va nunca más esa vocación de defensa por el laburante y uno sabe que cuando se abre esa puertita tenemos una forma de defendernos de estos tipos a los que les importan poco nuestros hijos, nuestros padres, nuestras mujeres,

nuestros discapacitados, nuestros lastimados y lo que quieren es ganar plata todos los días, a costa de lo que sea. Lo decía el otro día por televisión: es el mismo esquema de Shylock en *El mercader de Venecia*, “aunque sea una onza de nuestra propia carne”.

De esta manera, entonces, lo que se está proponiendo como eje central de esta discusión es que el trabajador pueda tener una indemnización en forma inmediata con este régimen especial o, en caso alternativo, ir por la vía judicial.

¿Se incentiva la autorización del régimen especial? ¡Claro que se incentiva! ¿Por qué? Porque se le da la oportunidad de que estando en funciones o dependiendo de aquel que lo está contratando, el comitente, tiene la posibilidad de tener un 20 por ciento más. Y de forma inmediata: son quince días. En quince días tiene que estar notificado y pagado. Una vez que estuviera notificado, a partir del momento de su notificación en adelante está en condiciones de poder abrir la vía judicial. “No me gusta esto”. “Voy a la vía judicial”. Perfecto. Y una vez que comienza la vía judicial también comienzan a correr los plazos para la prescripción del reclamo. Con lo cual, estamos en un punto que todos pretendimos buscar. Era el objetivo que pretendíamos buscar entre todos.

Entre los artículos 2° y 8° de este proyecto de ley lo que se fija es la indemnización del pago único, que es el eje central. El pago único. Será ajustado semestralmente; no existía esto. Todos sabemos que lo que se le pagaba era menos de la mitad, menos de un tercio de lo que realmente el trabajador tenía que buscar en este caso.

Ya les he contado lo que significa la incentivación por parte de garantizarse que esté en el lugar de trabajo o, dependiendo del comitente, cuando esté haciendo el trabajo de esta característica y motivara su enfermedad o su accidente. Y también mencionamos la garantía que no fuera nunca menos de 70.000 pesos.

Se suprime la doble vía, porque este artículo 4° establece que el trabajador damnificado, o sus familiares, o los derechohabientes podrán cobrar la indemnización de la ART o el reclamo judicial. Deja abierta la vía. No es que no existe. Lo que no deja es la posibilidad de que se vaya por las dos vías en el mismo tiempo. Y además grafica de la mejor manera la inmediatez. ¿Usted pretende cobrar por esta vía cantidades que son

claras, bien determinadas, ajustables cada seis meses, que definen más o menos un número en el que los sindicatos están de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo? Bueno, tiene quince días, se notifica, cobra y se lo lleva. Y ahí cortamos el tema. Y si no, busca por la otra vía.

Ahora, ¿cuáles son las consecuencias o las complicaciones que se lleva aquel que se va por la vía judicial? Un montón, porque tiene que ser el que se haga cargo de la demostración de la prueba y debe demostrar que no ha habido culpa en la generación del hecho que motivara el reclamo de la indemnización. Y además, el tiempo. Por ahí lo que está sucediendo es que aquel que lo está necesitando lo precisa de verdad en el momento oportuno. No después. ¿Qué nos preguntamos? ¿Cobra y después de qué trabaja? Pasa siempre lo mismo. Si cobra y lo despiden, no va a trabajar. Si cobra y no puede trabajar, no va a trabajar. El elemento está garantizado por el Estado desde otro lugar, no desde la Ley de Riesgos del Trabajo. Esta no es la discusión. Ese tema está garantizado. No teníamos forma de resolver por una vía o por otra algo que realmente tuviera que ver con la realidad de lo que debiera cobrar el trabajador por un hecho de estas características, por enfermedad, o por accidente, o por muerte —en este caso, los derechohabientes—, garantizado en un número más o menos ordenado y criterioso, ni la alternativa de que no fuera de su satisfacción lo que sucediera y reclamara por la otra vía.

Puede haber otros casos. Justo había salido pero llegué al despacho para poner la televisión y seguir el debate. Creo que escuché a alguna de las senadoras preguntar: ¿qué sucede cuando es alguien especializado? Hay casos que salen del marco. Y para esos en particular, que son un reclamo adicional, existe la posibilidad del seguro. El proyecto da la posibilidad del seguro. Entonces, usted tiene un seguro por accidentes de trabajo, más uno adicional para casos determinados que le permitiría cubrirse eventualmente ante hechos absolutamente aleatorios, que no están pensados, pero que pueden significar un impacto durísimo en la empresa, porque estamos hablando de artesanos importantes o cosas por el estilo. O sea, permite un seguro adicional.

En este caso se deroga el artículo 19, incisos 1, 2 y 3. No sucede lo mismo con el 4 y el 5, porque si lo hiciéramos, no estaríamos permi-

tiendo a aquellos que tuvieran el cobro *in itinere* la posibilidad de reclamar contra el que produjo el daño. Se derogan el artículo 24, régimen de alícuotas, y el artículo 19.

Hablamos del pago único y de la competencia.

En la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en las declaraciones de inconstitucionalidad que motivaron la 24.557, la inmensa mayoría de la doctrina la criticaba. Era a gritos que esto iba a explotar de alguna manera. Entonces, lo que se hizo en este caso fue empezar a ver cuándo la Corte tomaba el caso o los casos que lo fueran motivando y generando como testigos, y que se fuera probando a través de ello que a la Constitución no se la puede pasar por arriba y que es la Corte la que va a garantizar, en todo caso, elementos suficientes para demostrar que hay hechos contundentes para defender al trabajador.

Están los fallos “Castillo”, “Aquino” y “Miglione”. Se mejoró la posición de los damnificados y se abrió la puerta a los juicios. En esto era lo que correspondía. Todos nosotros, los que creemos que la vida de la política está enancada y apareada a la defensa de los derechos de los trabajadores, gritábamos y aplaudíamos porque la Corte abría esa puerta. ¿Y en qué se graficó la Corte? En el artículo 14, porque hablaba de retribución justa; del salario mínimo vital y móvil; de jubilaciones móviles; en el 41, porque mencionaba el desarrollo humano; en el 75, inciso 2, porque se refería a los objetivos de reparto; en el 75, inciso 18, porque hacía alusión a la prosperidad del país y en el 75, inciso 19, porque hablaba del progreso económico. Eran todos los elementos que motivaban la claridad de esa Corte seria, de gente inteligente y respetada.

Néstor Sagüés, que es un constitucionalista santafesino no peronista, suele decir que los tres poderes de la república tienen poder político. ¿Y cómo tiene poder político la Corte Suprema de Justicia? De dos formas: cuando el pueblo la respeta y cuando sus pares —nosotros, el Poder Ejecutivo— la respetan. En este caso, una Corte con ese nivel de respeto, como diría Sagüés, definía en el marco de la propia Constitución Nacional dónde estaban los errores de la ley 24.557.

El más plantado en términos de la inconstitucionalidad fue el artículo 39 de la ley de

accidentes y riesgos del trabajo. ¿Por qué razón? Porque el que la ideó, a mi juicio con una cabeza perversa –reitero, es lo más parecido a Shylock que he visto–, pensaba en un régimen autosuficiente y hermético respecto de la normativa civil. Es decir, no se gasta un centavo más y de esto no podemos hablar de otra manera.

Entonces, no podían los trabajadores ante accidentes, enfermedades o muerte, en este último caso sus derechohabientes, recurrir al resarcimiento integral que hoy planteaba el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, porque el otorgamiento que daba el Código Civil, del que gozaban todos los habitantes de la Argentina, no le era dado a los trabajadores, porque esta ley se los había quitado en su artículo 39, con excepción del artículo 1.072 que se lo dejaba cuando había dolo específico por parte del trabajador.

En ese sentido, nunca previó la posibilidad de la renuncia a una de las opciones, siempre quedó en claro: “Vos tenés que hacer esto: trabajá, acá tenés un régimen que paga dos mangos y en un montón de cuotas como si fuera una renta vitalicia y se licua con el tiempo. Si te gusta, bien, de lo contrario no trabajés”. Más o menos así termina siendo la cosa. Entonces, se buscó un sistema previsible con costos acotados a las contribuciones que se pagaban y costos previsibles para los asegurados: poca plata en mucho tiempo. Más o menos ese fue el tema que se utilizó en todos los casos.

Este concepto confronta –y lo escuché a algunos de los senadores de la oposición– con el principio de igualdad que fija la propia Constitución en el artículo 16 y el derecho a la protección integral del trabajador del artículo 14. Así como los tratados internacionales de derechos humanos que no solamente amparan al hombre, sino que amparan al bien jurídico a tutelar más importante que tenemos, que es la vida del trabajador, en el marco del artículo 75, inciso 22.

Por consiguiente, estos principios sustentaron lo que después fue el fallo “Aquino”, uno de los más renombrados en cuanto al ataque con absoluta dureza del apartado primero del artículo 39. ¡Pero: cuidado! Porque nunca se criticó lo que significa el régimen tarifario. Porque aquí nadie lo dijo: todo el mundo critica el régimen tarifario pero ha habido casos específicos res-

pecto de regímenes tarifarios para determinados niveles de indemnizaciones que han resultado suficientes y han funcionado.

En ese sentido, el proyecto del Poder Ejecutivo prevé la opción de un régimen de esta característica. Y el trabajador o sus derechohabientes tienen derecho a esa situación, y materializarla como pago único en las condiciones que establecen en sus artículos 2º, 8º y 17, o recurrir por la vía judicial. Insistí con el artículo 4º, que además no solamente hablaba del artículo 16, lo dicen varios fallos de la Corte Suprema, sino la Declaración Universal de Derechos Humanos en los artículos 1º, 2º y 7º y el Pacto San José de Costa Rica en los artículos 1º y 24.

El proyecto convierte a la indemnización en una reparación justa y satisfactoria y es el eje de este nivel de discusión. Justa y satisfactoria. La reparación por vía judicial no da certidumbre de que el reclamo llegue al tiempo que lo necesita el trabajador que está reclamando por ella, ni que resulte procedente, ni que sea un importe mayor al que aporta la Ley de Riesgos del Trabajo. Por esa razón, lo que se buscaba siempre en esta discusión, durante todos los años que se dice que no se consiguió porque no se ponían de acuerdo trabajadores y empleadores, era un punto más o menos equidistante, responsable y ecuánime para cada una de las partes que cupiera y sirviera exactamente para este tipo de situaciones.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostenía en los fallos “Aquino” y “Yosco”, de 2007, que el trabajador que haya sufrido daños no resarcidos por la ART podía demandar al empleador. Esa era la doble vía. El proyecto en tratamiento le da la opción al trabajador y a sus causahabientes de reclamar por alguno de los dos lugares.

Por otra parte, tomaba hoy de lo que decía la senadora Negre de Alonso respecto de cómo se miran a los trabajadores cuando a veces se los considera números, como pasó durante tantos años en la Argentina durante esa década.

Arturo Jauretche decía que nuestros economistas cuentan el tema de población en sus estudios como un instrumento y no como una finalidad, y que esa es la peor de las situaciones, la más injusta. Para los que creemos o tenemos un respeto por algo superior, es quizás el más dañino de todos los casos. ¿Por qué? Les contaré una anécdota. Perdón si ya la he contado,

pero la vuelvo a contar. Un día me dijo Felipe González que él tenía una relación personal con Agostino Casaroli, secretario de Estado del Vaticano. Hablando los dos mano a mano, Felipe le contó que tenía una charla en el partido y que debía preparar su discurso. Entonces, Casaroli le dijo: “Mirá, Felipe, te voy a dar un dato de la experiencia: nunca lleves más de tres temas, porque no se los llevan; más de tres no se los lleva nadie”. Entonces Felipe, que era un hermoso agnóstico, le dice: “¿Y cómo hago si son diez los mandamientos?”, a lo que Casaroli le responde: “Mirá, ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si no creés en Dios, no creas en él; pero si no vivís en la vida para creer que tenés un tipo al lado al que podés tenderle la mano, estás hecho pedazos, no servís para nada, no le importás a nadie, no tenés razón de ser”. Entonces, quizás ese sea el tema más importante a la hora de valorar esto de ver a los hombres y a las mujeres como la finalidad y no como un instrumento, un número más, “Ah, yo tengo un número. ¿Cuántos son? 300 tipos, pero se murieron 40. Listo: son 260. Ya está”. No, son hombres.

Como ministro de Trabajo, en el momento cuando echaban gente a lo pavote, nos sentábamos con quien era mi secretario de Trabajo y le preguntaba qué le decían. Por ejemplo, me informaba que iba a cerrar la fábrica de cajas de velocidades ZF y que echarían a 125 trabajadores. Entonces, proponía que fueran 99, para bajar la cantidad a dos cifras y que sean 26 trabajadores menos. Existía una desesperación por achicar los números. Entonces, la finalidad en sí misma no se puede tener como una referencia. Por eso, nosotros entendemos que el proyecto cumple con la finalidad que perseguimos nosotros.

En este país, los regímenes tarifados han servido en varios casos, como en el del Código Aeronáutico, del transporte de personas, del transporte de mercaderías por agua y de los daños nucleares. En consecuencia, funciona y es respetado. Y para que sea justo debe ser proporcional al daño sufrido. Brindaré un dato muy concreto: la Corte Suprema de Justicia sostiene en varios fallos que un sistema tarifario no es contrario a la Constitución. Por ende, no es verdad lo que se dijo aquí. Hay que ir a buscar los fallos, porque no es contrario.

¿Qué es lo que dice la Corte para que no sea contrario? Que el resarcimiento tiene que ser adecuado y proporcional. Entonces, si se cuenta con un sistema pensado y consensuado —como sucede con el que estamos considerando— que establece un régimen tarifario que se actualizará semestralmente y que permitirá evaluar los casos nuevos que puedan aparecer —porque acá también se preguntó acerca de ese aspecto— e incorporarlos —precisamente, se tomará el ejemplo de todos los casos que tenga el Ministerio de Trabajo, no va a quedar ninguno afuera—, eso garantizará que cuando desgraciadamente se produzca un accidente que le ocasione una discapacidad o una enfermedad o le cuesta la vida al trabajador, se pueda cumplir con el resarcimiento adecuado y proporcional a lo sucedido. Eso es lo más importante en relación con este tema. En consecuencia, no estamos utilizando el número, no estamos utilizando a la persona como referencia, sino que la estamos pensando como finalidad.

En el caso “Milone”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que el pago por renta periódica afectaba las garantías constitucionales del damnificado, y reprochó la imposición sin alternativas. Por eso nosotros lo estamos viendo como lo estamos viendo. Porque valiéndonos de los fallos de la propia Corte, si nosotros damos la garantía de que se cumplan las condiciones de adecuado y proporcional, estaremos sorteando un severo problema que tenía la presentación, que es lo que acaba de decir el senador Pichetto. ¿Habría acción civil? No. Si es adecuado y proporcional no habrá acción civil, porque se dará por resuelto el tema en quince días y se recibirá el dinero todo junto —“tomá el tarro, dame la leche”—; no se originará la vieja discusión de Cavallo de bien largo el plazo, renta vitalicia y licuación de la indemnización, que valía mucho menos de la mitad de lo que realmente le correspondía.

En el fallo “Castillo”, la Corte reafirma que el conflicto de accidentes de trabajo es de derecho común y de actores de derecho privado. Reitero: la Corte dice de derecho común y actores de derecho privado.

No existe carácter federal, se deja bien en claro, e histórica y jurídicamente fue considerado siempre de derecho común. ¿Por qué estamos discutiendo, entonces, en este momento, que la

jurisdicción sea civil y no sea laboral? Porque estamos hablando del daño, puntualmente, en este caso. Por eso no coincido con la senadora Negre de Alonso. Porque, en todo el planteo que hace respecto del derecho laboral, aplaudo y me sumo. Atrás de ella vamos, lleve que yo me voy con usted. Ninguna duda tengo. Pero en este caso, hablando del daño, es concreto y definido hacia dónde estamos discutiendo el tema, específicamente en términos de jurisdicción. Y lo propio le pide a las provincias, que definan ellas quiénes van a ser o cómo va a ser específicamente la jurisdicción que absorberá este tipo de litigio, cuando elijan la vía judicial en cualquiera de sus casos.

Respecto de los honorarios profesionales, es una vieja discusión cómo se determinan y cómo se firman. Es cierto que el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo establece la posibilidad de la cuota litis, poniendo un límite de 20 por ciento y obligando a que tenga la aceptación por parte del particular y la homologación. Pero también la Ley de Conciliación Laboral Obligatoria permite poner un límite de 10 por ciento, con las mismas condiciones: la aceptación por parte del trabajador y la homologación por parte del juez. No estamos negando la ley 24.635, en ninguno de los dos casos. Lo que se plantea es que hay una parte determinada, la que ya está fijada por la definición específica de la Ley de Contrato de Trabajo, que fija cuál es la indemnización: si hay una determinación, lo que va a fijar es por lo condenado menos lo que ya se resarcó, y la diferencia es la que va a tomar en cuenta. Entonces, no pone la cuota litis, no acepta la cuota litis en la indemnización, para que precisamente se le permita al trabajador garantizarse el ciento por ciento de la indemnización, y que discuta por otra vía el formato de la cuota litis, pero no lo está quitando porque, además, está cumpliendo con lo que dice el artículo 208 del Código Penal en todas las formas. No hay nada que haya quedado afuera.

Sigo insistiendo, el proyecto es muy bueno, a mí me hace sentir muy cómodo, vuelvo a repetir, con los defectos propios de haber sido ministro de Trabajo y comprender lo que está sucediendo en ese tema. Además, suscribo lo que dijo González Gaviola acerca de que prevengamos en primer lugar, reparemos cuando no tengamos más remedio: hay accidentes, re-

parémoslos, y evitemos que el trabajador quede con incapacidades permanentes. Es un deber nuestro. Volvemos a lo mismo, que no sea de referencia, que sea la finalidad el trabajador. Es lo que nos importa.

El decreto 1.720 que se mencionó, que permite las mutuas –vuelvo a insistir–, a mí, como jefe de Gabinete de Ministros, el que era secretario general de la CGT me lo pidió veinte veces. Entonces, acá no hay nadie que pueda decir que no está de acuerdo con ese tema.

Sr. Presidente. – ¿Puede ir redondeando, senador?

Sr. Fernández. – Estoy terminando. Treinta minutos más.

–Murmillos en el recinto.

Sr. Fernández. – Ya termino. Fue un chiste.

El cálculo de incapacidad ya ha sido explicado. Todos lo han escuchado. Se han multiplicado las cantidades más del ciento por ciento en algunos casos y se fija como tope el 5 por ciento en el costo, una definición que ya explicó la senadora Corradi de Beltrán. Control rígido de las ART, la alícuota conforme al tamaño de la empresa, se dijo que más del 80 por ciento son pequeñas y medianas empresas con pocos trabajadores, de los 8.700.000 trabajadores. Se va a actualizar el baremo, que es el que va a tener todo el nivel de enfermedades y de lesiones que puedan ser contempladas en este tema. Los números son los que planteó González Gaviola. Tenemos 538.000 empleadores de 318.000 con los que empezamos, y tenemos 8.700.000 de los 3.500.000 con los que empezamos. Los números de accidentes fueron aumentando de 2003 en adelante porque comenzó la actividad; era inevitable que sucediera, hasta 2008, porque entonces comienzan a caer en forma abrupta. Y la realidad es que ese es el objetivo que se tiene que perseguir, que tengamos el crecimiento que estamos teniendo y, paralelo a ello, que tengamos todos los días menos accidentes y menos muertes. Ese es el objetivo final que está persiguiendo este gobierno. Ese es el objetivo “jaurechiano” de tomar al hombre, a la mujer, por finalidad. Y nosotros entendemos que el éxito de esa caída es, quizás, uno de los temas más importantes.

Creemos que tenemos un proyecto muy bueno para resolver el tema con cierta celeridad,

con seriedad, en el marco de lo que necesitan los trabajadores, aprobado por trabajadores y empleadores, y definido por un gobierno que no quiso hacerlo nunca de otra manera que no sea aprobado por los dos sectores. Viene a este Congreso, para su análisis, una vez que los dos sectores dijeron que estaban de acuerdo con la situación.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: estamos abordando un proyecto de ley muy importante para los trabajadores y para el país; y tenemos que decir de entrada y rápidamente que es un grave retroceso lo que se va a sancionar. La verdad es que hay que hacer muchas piruetas verbales para fundamentar esta iniciativa, para tratar de decir que ella encaja con este tiempo, cuando lo que vamos a aprobar en sustancia, es la misma ley de 1995. Tiene muy pocos cambios, actualiza algunos valores, un 20 por ciento para que el trabajador cobre su indemnización, acelera los plazos pero, en esencia, mantiene la filosofía por la cual nació. Y me parece que el país, América Latina, el mundo, están atravesando momentos interesantes y la respuesta a lo que está pasando se ha dado de distintas maneras en distintos países con diferentes ópticas, pero nunca atrasando como atrasa una iniciativa de esta naturaleza, que es para los trabajadores y que se sanciona con la filosofía del neoliberalismo.

Se llama Régimen de Ordenamiento de la Reparación de los Daños Derivados de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Es un título difícil que no explica la síntesis de lo que estamos hablando. Acá nos estamos refiriendo a la vida de los trabajadores, de la pérdida de la salud por la explotación laboral, por condiciones insalubres de trabajo que generan enfermedad, muerte. No entendemos este grave retroceso que significa para los derechos de los trabajadores la sanción de esta ley. Y cuando se denuesta desde el discurso del neoliberalismo, hoy se sanciona esta ley que lo consagra, que consolida y profundiza lo peor de los 90.

No se entiende ni filosófica, ni política, ni jurídica, ni económica, ni socialmente cómo entre gallos y medianoche llega este proyecto de ley al Congreso de la Nación. No se entiende filosóficamente porque hablamos de los dere-

chos y la salud de los trabajadores. Es el pibe de veinte años, obrero de la construcción, que se cae del andamio de un décimo piso y deja una esposa y un hijo sin sustento. O es el trabajador que pierde un brazo porque la máquina se los secciona.

A pesar de la falta de estadísticas, sabemos que en el trabajo registrado hay alrededor de cuatro muertes por día por accidentes de trabajo. Se registran alrededor de seiscientos mil enfermedades laborales al año. Y si consideramos el trabajo en negro, que es más precario, en donde no hay estadísticas, todas las enfermedades y los accidentes van a aumentar mucho más que lo que estoy diciendo.

La primera ley de accidentes de trabajo en la Argentina fue iniciativa de Alfredo Palacios en 1915, ley 9.688. Se llamó Ley de Accidente de Trabajo. Cuando Alfredo Palacios la presentó decía: las consecuencias de los peligros ocasionados por el funcionamiento de la máquina debe estar a cargo de la industria. El accidente surge de la industria, ella es quien lo crea. Es con este criterio –decía Palacios– que mi proyecto cubre los riesgos del accidente, de la enfermedad y la maternidad.

Con este proyecto de ley, presidente, volvemos a 1915. Volvemos a Biale Massé, porque el daño no necesita culpa; el daño debe ser reparado integralmente. Esto es un derecho constitucional que esta iniciativa vuelve a poner en discusión.

Por eso, este proyecto nos transporta –y lo digo con tristeza, no es chicana– a tiempos que creíamos superados. Porque hasta aquí habíamos recuperado en el Congreso de la Nación, con leyes y en todo este tiempo, los derechos de los trabajadores.

Una y otra ley que llegó al Congreso de la Nación en los últimos años fue para reconstruir el derecho de los trabajadores. Acá estamos pegando la vuelta con esta iniciativa. Este proyecto de ley nos tira para atrás en nombre de la eficiencia, en nombre de la generación de empleo. Esto ha quedado demostrado en los 90, y no generó ni una cosa ni la otra sino la pérdida de los derechos de los trabajadores.

Todo se puso en las ganancias de los bancos y del capital financiero. Lo escuchamos en la presentación de este proyecto de ley, que es

“para terminar con la industria del juicio”. Ya escuchamos esto hace muchos años.

Esto es pegarle al mensajero para que no llegue el mensaje. Hay juicios porque hay accidentes de trabajo en condiciones laborales absolutamente degradantes para el trabajador. Porque no hay prevención, por eso hay accidentes. Y se pierde la oportunidad de abordar la prevención desde la integralidad, con una ley de estas características. ¿Y sabe, presidente, por qué no hay prevención? Porque es más barato no cumplir; total, cuando se paga, se paga poco. Esto pasa en muchos aspectos y en distintas actividades. “No cumplo, pago la multa y produzco el terrible accidente de trabajo”.

Este proyecto de ley no hace centro en la prevención sino todo lo contrario, y por ello no encontramos esa palabra ni ninguna medida concreta. Este proyecto de ley no se entiende políticamente. ¿Por qué llega al Parlamento en este momento? El senador Sanz suele usar una metáfora: la del elefante. ¿Cómo se esconde un elefante? Y, un elefante se esconde poniéndolo en el medio de una manada de elefantes.

Entonces, este proyecto de ley llega cuando estamos discutiendo el voto a los dieciséis años, cuando estamos discutiendo el voto de los extranjeros, cuando estamos discutiendo el Código Civil, cuando estamos discutiendo el presupuesto. Y llega de una manera acelerada, donde no tuvimos la posibilidad ni siquiera de debate. Es casi insólito lo que ha pasado. Se presenta la ley un día y en el mismo día se firma el dictamen. No hubo tratamiento en la comisión, cuando la senadora Negre de Alonso planteó la posibilidad de que se invitara a todas las organizaciones sindicales, porque en realidad había dos sindicatos y la Unión Industrial Argentina. Ésta fue la realidad.

Pero, además, los legisladores tenemos el derecho de dar un debate en el seno de la comisión, que no lo hubo. Tuvimos que presentar los dictámenes de minoría a las apuradas, y mi dictamen de minoría recién está en las bancas ahora, llegó a las bancas en este momento. O sea que la celeridad que ha tenido este tratamiento, ante semejante ley, de la trascendencia de semejante ley, no tiene explicación política.

Tampoco tiene explicación política, y esto es lo que nos hubiera gustado en el debate en la comisión, porque se estaba presentando el

proyecto de ley acá, en el salón Arturo Illia, y cruzando la calle, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, durante tres horas y media, se la pasó denostando al neoliberalismo en la presentación del proyecto de presupuesto, mientras que aquí se presentó un proyecto de ley que consolida esa filosofía. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con las palabras de Kicillof o en los hechos, con una ley que nos retrotrae a esos tiempos?

El Consenso de Washington impuso en su momento un conjunto de reformas para la seguridad social, las cuales fueron promocionadas por la denominada nueva ortodoxia previsional que usted, señor presidente, debe conocer detalladamente. Esa filosofía transformó la economía de mercado en una sociedad de mercado, donde el trabajo, la salud y la educación se transformaron en una mercancía y en la cual la seguridad social es una cosa y el lucro, otra.

Entonces, yo pregunto, ¿por qué se estatizaron las AFJP y ahora se consolidan las ART, a pesar de que sabemos que se generaron como primas hermanas de un mismo negocio financiero? Su creador, a través de la ley 24.557, fue Domingo Cavallo, en 1995, junto con un grupo de banqueros. Los socialistas votamos en contra de dicha implementación. En aquella ocasión, Guillermo Estévez Boero y Alfredo Bravo defendieron nuestra postura en el Parlamento. Por eso acompañamos la estatización de las AFJP, o sea, a favor de un cambio de paradigma. Porque habíamos votado en los 90 en contra de la privatización del sistema, que importaba generar ese negocio financiero.

Uno de los miembros informantes en aquel tratamiento dijo, durante la sesión que trató el tema, que la litigiosidad había generado en muchos ámbitos tribunales un sobre costo que generaba una verdadera industria del juicio. ¿Sabe quién dijo eso? El diputado Kammerath, quien expresaba la posición de la UCeDe. La ley Cavallo partía del diagnóstico de que el costo de los accidentes insumía a las empresas alrededor del 8 al 10 por ciento del salario y que para bajar ese costo era necesario armar un sistema obligatorio, de seguro cerrado, gerenciado por entidades privadas, o sea, las llamadas ART.

Entonces, pregunto una vez más: ¿cuál es la lógica filosófica, política, jurídica, económica y social de consolidar este sistema que se intenta

ratificar con este proyecto de ley? Este proyecto no tiene lógica económica en estos tiempos, porque claramente es la respuesta al negocio de las ART. Como dijo la senadora Escudero, las mismas han recaudado 12.700 millones al año y en el primer trimestre de este año llevan recaudados 9.000 millones. Es decir, que este año llegarían a los 18.000 millones.

Quiero pedir que se incorpore en la versión taquigráfica un reportaje que le hicieron a la jefa de Liberty Seguros el domingo 26 de diciembre de 2010, en el diario *La Nación*. Allí decía que la doble vía en los accidentes laborales es una locura. Claro, para las ART es una locura. Pero vamos a ver a continuación cuánto ganan, porque cuánto recaudan recién lo dije, a pesar de lo cual quieren parar –lo que ellos llaman– la locura o el cuco de los accidentes laborales, “la industria del juicio”.

En ese reportaje, el periodista le preguntó luego qué es lo que más le molestaba de la falta de una nueva ley de ART, y ella contestó la doble vía, porque –afirmó– creaba incertidumbre en el empleador y alimentaba la industria del juicio, que mueve cuantiosos honorarios. Luego, el periodista le preguntó dónde invirtieron y cuál fue la rentabilidad que lograron las ART, y ella respondió que la mayoría, en bonos de empresas del sector energético y en el agro, agregando que el retorno sobre el capital había sido del 12 por ciento en el último año. O sea que la ganancia que obtenían estaba muy por encima del promedio de cualquier actividad en la República Argentina.

Señor presidente: no entendemos jurídicamente este proyecto de ley. No se entiende cómo se quiere reinstalar la llamada opción indemnizatoria excluyente. El trabajador debe elegir entre las indemnizaciones tarifadas con tope y no transables de la Ley de Riesgos del Trabajo y las indemnizaciones del Código Civil. Esta solución, planteada por el Ejecutivo en relación al conflicto de la doble vía, no es otra que la propuesta por la Unión Argentina de Riesgos del Trabajo, que plantea pasar a un sistema tarifado “generoso”, el 20 por ciento más, actualizable periódicamente y que resulte más conveniente que la iniciación de acciones judiciales por vía civil.

Ahora bien, si el sistema fracasó estrepitosamente, ¿por qué se lo reconvierte sobre los

mismos principios? Claramente, va a volver a fracasar. La actual Ley de Riesgos del Trabajo condenó a los trabajadores accidentados, lesionados o afectados en su salud en razón de enfermedades laborales a no tener otra posibilidad que recurrir ante la Justicia, lo que derivó finalmente en el dictado de los fallos ejemplares.

Aquí, distintos senadores preopinantes han señalado que la Corte Suprema de Justicia cuestionó los mismos pilares fundamentales sobre los que se pretendió erigir la ley 24.557; son esos mismos pilares los que hoy se vuelven a sancionar. Me estoy refiriendo a los fallos “Castillo”, “Aquino” y “Milone”, de 2004. En ellos, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 14, inciso 2), de los topes de las prestaciones; 21, de las comisiones médicas; 39, de la exención de la responsabilidad civil; y 46, de las acciones judiciales.

En la causa “Aquino”, la Corte entendió que el sistema de riesgos del trabajo vigente se aparta de la concepción reparadora integral. A través de dicha sentencia, el máximo tribunal reparó la discriminación contra el trabajador accidentado y sus causahabientes, a los que la ley 24.557 no les reconocía el derecho a reparación integral, impidiéndoles el acceso a los derechos y acciones previstos en el Código Civil. Es decir que esta ley que hoy se está consolidando, la ley anterior, había dejado habilitada la acción civil para un único supuesto: el infortunio provocado por dolo del empleador, artículo 39. Y en la causa “Aquino”, la Corte habilitó la acción civil amplia sobre la base de la Constitución, artículo 16, y determinó que el piso indemnizatorio sea el del Código Civil.

También, nuevamente, se vuelve a intentar alejar al trabajador de su juez natural, que es el fuero del trabajo. Y todos conocemos este cuco que se levanta, el de la industria del juicio, donde parecería que el trabajador se enriquece con lo que va a cobrar con la indemnización, cuando en realidad, le lleva más de diez años al trabajador y a su familia poder cobrar algo.

No entendemos esta ley desde el punto de vista social, porque no hay en la iniciativa una protección del trabajador y porque no se hace centro en la prevención. Cada enfermedad laboral o accidente del trabajo es lo que destruye una familia. Y las enfermedades, que son las menos reconocidas, son las que producen ma-

yores daños, más aún que los accidentes. Porque por cada 80 enfermedades, hay 20 accidentes.

En cuanto a las prestaciones, la cosa es absolutamente a la inversa: hay un 2 por ciento de prestaciones para enfermedades y el 98 por ciento son por accidentes; y esto ocurre porque las enfermedades no están en el listado. El año pasado, por decreto de la Presidencia de la Nación, fue el Año de la Prevención en el Trabajo, y también se firmó el Convenio Interamericano de la OIT 155 y 187. Es paradójico porque, como dijimos antes, la prevención no existe. En Santa Fe —y acá lo han mencionado algunos senadores— sancionamos una ley enviada por el gobierno provincial que creó los comités mixtos de prevención de accidentes, que están funcionando y que verdaderamente han sido una respuesta muy positiva para la prevención. Nos parece que estos temas debieron haber formado parte de todo el debate en este recinto.

Por los 650.000 accidentes que se producen por año aproximadamente, se llevan adelante 53.000 juicios. Éste es el cuco que muchos alegan. Es decir que el porcentaje de juicios respecto de los accidentes de trabajo es verdaderamente ínfimo.

Finalmente, señor presidente, nosotros no venimos a decir que no sólo a una ley que pensamos que es absolutamente negativa sino que hemos elevado una propuesta, una propuesta que fue elaborada durante un trabajo de muchos años y de mucha participación por la Central de Trabajadores Argentinos, que fue presentada como proyecto de ley por el diputado De Genaro y que plantea la necesidad de un nuevo paradigma en el abordaje de esta temática. Nuestra propuesta parte de una visión integral de la seguridad y de la salud de los trabajadores y el medio ambiente de trabajo, y constituye un cambio con relación al régimen vigente, ya que reemplaza y deroga a la aseguradora de riesgos de trabajo como gestora del sistema por una entidad sin fines de lucro en cuya administración, de carácter tripartito, participen los trabajadores, los empresarios y el Estado.

También, plantea nuestro proyecto la ejecución de las políticas y gestión del sistema que abonan el cumplimiento de los fines de cuatro instituciones que planteamos: primero, la Oficina Nacional de Seguridad y Salud Laboral —en el artículo 8°—; segundo, la Comisión

Nacional de Seguridad y Salud Laboral —en el artículo 12—; tercero, el Banco de Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales —en el artículo 6°—; y, cuarto, las comisiones médicas —en el artículo 82—. Por eso, después de tantos años, nosotros creíamos necesario restablecer la vigencia plena de los derechos de los trabajadores, particularmente en la tutela de la salud, bajo los principios de prevención y de reparación integral y en cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Es claro que la Corte, al demoler la ley de ART con sus once fallos desde 2005, necesitaba otra ley. Pero está muy claro que esta ley, de nacional y popular tiene muy poco, que de progresista no tiene nada y que nos vuelve a otras épocas, porque con ella se dan las mismas respuestas que se daban en aquellos tiempos. Por eso, señor presidente, vamos a votar en contra de esta propuesta tan negativa.

Nos parece que este debate recién empieza. Recién se ha puesto a luz. Lamentablemente, no se ha hecho con la metodología que debiera haberse dado y que hubiera permitido la máxima participación de los trabajadores, de los empresarios, de los representantes del Estado. Por estos motivos, vamos a adelantar nuestro voto negativo y a insistir con nuestra propuesta superadora a la presentada por el Poder Ejecutivo nacional.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: de 1954 a 1957, Giuseppe Tomasi di Lampedusa escribió una novela que se llama *Il gatopardo*. En realidad, la traducción correcta sería “El leopardo jaspeado”, pero se llamó *Il gatopardo*.

Il gatopardo se desarrolló en un reino en Sicilia; y ante la pérdida del poder de la aristocracia y por los nuevos tiempos que corrían, se trataban de cambiar las cosas para que no cambiara nada. De *Il gatopardo*, novela de la que también hubo una película muy famosa, quedaron algunas frases: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. “¿Y ahora qué sucederá? Tratativas respunteadas de tiroteos inocuos, y, después, todo será igual pese a que todo habrá cambiado”; “...una de esas batallas que se libran para que todo siga como está”.

De acuerdo con lo que habíamos discutido ayer en la reunión de labor parlamentaria, pensé que hoy íbamos a hacer una crítica y una defensa de la década del 90. Me parece que es peor lo que ha ocurrido. El debate verdadero que tenemos que dar es el de la Década Infame. Hemos retrocedido más atrás de la década del 90. La Década Infame culmina con la irrupción de Perón. Perón, entre otras cosas, incorporó los derechos sociales, el derecho de los trabajadores.

Tengo acá una obra sobre Perón que cuenta la anécdota de una reunión que celebró con los convencionales constituyentes, que tenían la tarea de reformar la Constitución en el 49. Y los reunió a todos en el Partido Peronista. Explicó que el peronismo era un movimiento nacional, que defendía a todos, defendía lo nacional y defendía a los trabajadores. Entonces, cuando estaba enumerando los derechos de los trabajadores, les enseñó y les pidió que pusieran un régimen de trabajo que reuniera los requisitos adecuados de higiene y de seguridad. Lo que estamos reclamando ahora: de higiene y seguridad. ¡Pero lo estamos reclamando sesenta años después! ¡En el siglo siguiente!

Debemos retroceder a las fuentes y decir que esto que ya en 1949 era una conquista, tenemos que reconquistarlo: "...adecuar la higiene y seguridad...", "...no exceda las posibilidades normales del esfuerzo y haga posible la debida oportunidad de recuperación por el reposo; el derecho de disponer de vivienda, indumentaria y alimentación adecuada". "El derecho de ser amparado en los casos de disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo".

¿Qué es lo que estamos defendiendo hoy? ¿Qué es lo que tenemos que defender? Nosotros, como peronistas, ¿qué es lo que vamos a defender? Estamos defendiendo al trabajador que, fruto del esfuerzo que realiza, ha tenido un accidente y padece una disminución en su capacidad, está disminuido. Tal vez, está en la cama postrado, con sus hijos y su mujer sufriendo. Posiblemente, pierda el trabajo o su capacidad laboral. Y en ese estado de necesidad, parece que es de una izquierda transformadora decirle: opte y pierda sus derechos. Reciba esto, sea mucho o poco, esté bien o mal. Nosotros tenemos que defender, fundamentalmente cuando tratamos esta ley, el derecho de los trabajadores.

Con el respeto que tengo al senador Fernández, le quiero aclarar que no comparto que se hizo con el acuerdo de los trabajadores y de los empresarios. Se hizo con el acuerdo de los empresarios y la sonrisa de un pillo, como bien definió la senadora Negre de Alonso a quien estaba en la reunión. Y han dividido a los trabajadores, a la CGT. La mitad, o más, o menos —no lo sé— estaba de un lado, aprobando. Y del otro lado estaban los que fueron a la audiencia que convocó el presidente de la comisión, Martínez, a la que asistieron Moyano, en representación de la CGT; Piumato y otros dirigentes gremiales; Micheli, de la Central de Trabajadores Argentinos; abogados laboristas, etcétera. Ellos no estaban de acuerdo. Criticaron duramente la ley. Entonces, no es con el acuerdo de los trabajadores. Es con el acuerdo de una parte de ellos. Lo respeto. Es cierto, es con una parte de los trabajadores, que justo están decidiendo la conducción de la CGT y que quieren darse una mutua mano, pero casi en estado de necesidad las partes.

Nosotros no compartimos el argumento de que esto sirve para eliminar la industria del juicio, porque es el mismo con el que sancionó Cavallo esta ley. No compartimos que esto va a generar más fuentes de trabajo; eso también se dijo y no es así. Para que haya más fuentes de trabajo, debemos crear condiciones favorables a la producción y al trabajo, todo lo contrario de lo que hace el señor secretario de Comercio de la Nación, que genera caos y anarquía con prepotencia, intolerancia, cepo cambiario, inflación fraudulenta, etcétera.

No hay forma de que los inversores confíen en la Argentina si las cifras que da el INDEC, si la posibilidad de operar, de traer productos importados y de exportar está controlada, por lo menos —creo—, incorrectamente.

Si las políticas de control de cambio y de las importaciones y exportaciones no son muy bien hechas, con mucha prudencia y moderadas, fracasan. Así que nosotros nos oponemos a esta ley. Consideramos que se debe cambiar el sistema, el régimen. Tenemos que dictar una nueva ley en la orientación, probablemente, de lo que ha planteado el senador Giustiniani, de Santa Fe, que creo que es un proyecto que tiene el aval de la CTA. ¿Es así, senador?

Sr. Giustiniani. — Sí.

Sr. Rodríguez Saá. – Probablemente, en esa orientación o parecida, que es cambiar el sentido. Es una ley para proteger al trabajador.

Con respecto a la doble vía y al fallo “Aquino”, me parece que están equivocados, porque va a haber juicios, va a haber litigiosidad y van a buscar la reparación integral. Probablemente, hasta la próxima elección logren parar los juicios. Tal vez por un tiempito, por una transitoriedad, pero a la larga, después de una larga lucha, volverán a conquistar los derechos los trabajadores y tendrán derecho a la reparación integral y al fuero laboral. ¡Fueron unas conquistas de Perón! No puede ser una nueva conquista que les quitemos el fuero laboral, que les quitemos el derecho laboral a los trabajadores.

Disculpenme, están equivocados con el rumbo ideológico. Tal vez creerán en el relato, que es bonito. Recuerden que Perón decía que podrán decirse mil mentiras, pero no lograrán que una sola de ellas se transforme en verdad. Esto era cuando la oligarquía y el antiperonismo relataban cosas del peronismo que no eran ciertas. No consiguieron que ninguna se hiciera verdad. Todas fueron mentiras y cayeron como intentos, y Eva Perón es un monumento a la mujer argentina. No es lo que nos querían contar: es un monumento espectacular; la más grande mujer que ha tenido la historia argentina. Y Juan Domingo Perón era un líder de una potencia y de una capacidad e inteligencia extraordinarias, por más que se hayan escrito miles y miles de frases en su contra.

No voy a profundizar en el tema jurídico, porque ya lo han hecho con sobrada certeza no solamente los integrantes de nuestro bloque sino también otros senadores, pero voy a dar algunos datos. Se han analizado con toda claridad los fallos, y tendremos un debate si la doble vía la habilita o no la Corte Suprema. Es decir, si dice la Corte Suprema de nuevo que la reparación tiene que ser integral. Y, si dice eso, después tendrá que decir si la competencia es civil o laboral. Yo creo que va a terminar siendo laboral. Y la confusión de lo federal no tiene nada que ver en este debate.

Algunos datos del actual sistema resultan alarmantes: según la OIT, el 38 por ciento de los siniestros laborales se refieren a enfermedades profesionales. Sin embargo, en la República Argentina, dicha cifra no supera el 2 por ciento

y se reduce al uno por ciento si se eliminan las hipoacusias. Por lo tanto, de acuerdo con estudios realizados en la Argentina, quedaron sin cobertura 2.200.000 patologías en el período 1996/2008. ¡Esto es alarmante! Hombres y mujeres trabajadores que se quedaron sin protección laboral.

Quiero aclarar que la ART es una sociedad anónima que tiene espíritu de lucro. Y en el sistema capitalista, está bien que tenga espíritu de lucro, pero aquí lo logra no pagando el siniestro o pagando menos de lo que tiene que pagar. Lo grave es el lucro con la enfermedad, con el accidente o la incapacidad o menor capacidad de un ser humano, al que se refirió muy bien el senador Fernández. Comparto plenamente esa parte de su alocución. Es decir, tenemos que mirar a ese hombre, a ese trabajador, a ese chico al que en la fábrica una máquina le cortó el dedo o tuvo una herida en la pierna, o a ese minero que trabajando duramente tiene una enfermedad laboral terminal. ¡Se va a morir inexorablemente! Lo tenemos que cubrir. No puede ser que ante eso seamos insensibles y que estemos mirando la alegría de Mendiguren. La alegría de Mendiguren aquí no tiene nada que ver, porque estamos tratando una ley laboral y no una ley pro empresaria. Parecería que estamos en la Década Infame, y no lo podemos admitir.

Brindaré otro dato: en el período 1996-2004, en Italia, donde se escribió esa novela a la que hice referencia, se diagnosticaron 2.407 casos de cáncer laboral. ¿Saben cuántos se diagnosticaron en la Argentina? Ninguno, gracias al fantástico sistema de ART. Entonces, esto es gravísimo, porque tal vez, algún día, un juez, en alguna causa, reconozca que una persona que ya murió adquirió el cáncer en su trabajo y que, al ser una enfermedad laboral, habría que repararlo en ese momento. Pero ya los hijos no estudiaron y la familia se descarrió; ya es tarde la reparación. Por lo tanto, eso es lo que tiene que buscar el derecho laboral, con humanidad y tratando de hacerlo con justicia social.

Por último, efectuaré una reflexión en cuanto al apuro por tratar este proyecto. No comparto lo que se hizo en la comisión, no comparto el apuro por tratar este proyecto. Hoy, la Argentina tiene para tratar temas mucho más importantes que éste. Sin embargo, había que tratarlo ya. No sé cuál era el apuro, pero cada vez que se tra-

taron iniciativas neoliberales de flexibilización laboral o de este tipo, siempre hubo apresuramientos. Siempre hubo apuro para salvar de los juicios a los empresarios y no para pensar en la otra cara de la moneda, o sea, para solucionar los problemas de los trabajadores que sufren un accidente de trabajo, que debe ser una de las cosas más tristes de la vida.

Por los motivos expuestos, votaremos en contra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: estamos concluyendo un largo debate que, seguramente, finalizará con la modificación de la ley 24.557, a través de esta norma que está dirigida, supuestamente, a construir un nuevo ordenamiento para la reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Hemos escuchado, en el contexto del debate, algunas cuestiones que tienen que ver con tendencias economicistas, fundamentalmente, para tratar de poner un freno a la litigiosidad en la Argentina, generar un proceso de reactivación de las pymes y hasta para evitar la industria de los juicios, que frena la captación de mano de obra por parte de las propias empresas. Sin embargo, creo que ese no es el debate. El debate, cuando se trata de garantizar derechos en el marco de los riesgos de trabajo, pasa por tener presente el bien jurídico que se tiende a proteger. Y con relación a los riesgos de trabajo, el bien jurídico a proteger es la tutela de la integridad psicofísica del propio trabajador.

Considero que en esta historia de tutelas en materia de riesgos de trabajo, de marchas y contramarchas desde la ley 9.688 –sancionada en 1915– hasta la ley 24.557, se ha dado una instancia de avances y retrocesos. Avances que beneficiaron al trabajador y retrocesos que lo perjudicaron. Basta recordar que a través de la ley 9.688, que rigió desde 1915 hasta 1991, se estableció una doble vía indemnizatoria y que rigió la teoría de la concausa. En 1991, se sanciona la ley 24.028, cuya premisa fundamental era la reducción de los costos laborales y, en ese contexto, se estableció un listado de accidentes o enfermedades sujetas a indemnización, eliminándose la teoría de la concausa. Así, llegamos a la ley 24.557, que estableció este criterio de

responsabilidad individual de los empleadores, la obligatoriedad de contratar una aseguradora de riesgos de trabajo y la exclusión de la responsabilidad civil de los propios empleadores. Esta ley quizás implosionó el carácter protectorio. Y esto termina en 2004, con los fallos de la Corte Suprema de Justicia, que establecen el sano criterio de la reparación integral en los fallos “Aquino”, “Yosco” y “Milone”, que muy bien se han comentado a lo largo de este debate, que lleva muchísimas horas.

Sólo quiero decir que creo que este criterio jurisprudencial ha puesto las cosas en su lugar. Es decir, una cosa es percibir la indemnización con un criterio de tabulación que se fija en el marco de un listado contemplado en los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, en el marco de la prima que se paga desde el empleador para cobrar la cobertura a través de la aseguradora de riesgo de trabajo, y otra es el criterio de garantizar el resarcimiento integral de los derechos. Porque el derecho se resarce justamente cuando tiene una visión integral. Y la visión integral que nos da la Corte con este criterio es la de acudir a la vía civil, en el marco de un tribunal laboral, o en el marco de la propia acción civil, en el marco del fuero civil, para lograr el resarcimiento integral. Ya se ha dicho en más de una oportunidad que, cuando se trata de muerte, lo que se intenta resarcir no es el valor de la pérdida humana en sí, sino que esta pérdida, por ejemplo, conlleva otro tipo de indemnizaciones atendibles, como el daño moral.

–Murmulllos en el recinto.

Sr. Presidente. – Por favor, senadores.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Si se trata de un accidente de características definitivas, también se contemplan otro tipo de factores, como el daño estético, la pérdida de chances. Ése es el logro del criterio jurisprudencial que nos rige desde 2004 hasta el presente.

Ahora bien, ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo un proyecto con fuertes contradicciones, que surgen de la propia fundamentación, que nos dicen: “Señores, vamos a tratar criterios correctivos de la ley 24.557, que tiene como parámetro central fundamental los criterios sentados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia”. A medida que analizamos este proyecto, este nuevo ordena-

miento que se pretende para lograr criterios de justicia para los trabajadores, nos encontramos con profundos retrocesos.

El artículo 4° –acá se ha dicho con mucha vehemencia– en realidad es una falsa opción, ya que no hay opción, es un callejón sin salida. Porque si un trabajador ha perdido su capacidad laboral, tiene a cargo hijos menores, su cónyuge no tiene capacidad laboral y la empresa no puede continuar efectivizando su remuneración mensual de manera habitual, yo me pregunto cuál es la opción de ese trabajador. ¿Qué opción tiene ese trabajador para decir que opta por la indemnización de la aseguradora de riesgos del trabajo, o acude a la vía civil? ¿Cómo sobrevive ese trabajador?

Digo esto, porque parece que estamos discutiendo sólo acerca de trabajadores calificados y no todos los trabajadores lo son, ni todos tienen la capacidad de aguantar como para decir: “No hago uso de esta opción y recurro directamente a la vía civil”. Por lo menos, hablo de algunas pequeñas y medianas empresas de las regiones NEA y NOA de la Argentina. No todos tienen una mirada como la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ésta no es una opción o, mejor dicho, es una opción con un carácter fuertemente extorsivo. Y si hay una opción con carácter extorsivo que quita el criterio igualitario, lógicamente estamos hablando de una ley o de una opción que perjudica a los propios trabajadores.

Pero no solamente atenta contra los trabajadores en el contexto de la opción, sino que echa por tierra el principio de la progresividad, sobre el que se explayó con mucha vehemencia la senadora Sonia Escudero, cuando hizo referencia al Pacto de San José de Costa Rica, y lo que significa la progresividad en materia de derecho laboral. La progresividad es el fallo “Aquino”. Es decir, cuando uno demanda concretamente la ampliación de un derecho, porque éste es cercenado por un criterio estricto de la norma, como el fijado por la ley 24.557 que impide una reparación integral, y la Corte establece justamente el criterio de la reparación integral. Ese es el criterio de la progresividad; éste implica, de alguna manera, como algunos lo denominan, un principio de no regresividad, que significa la exigencia irrestricta de que los derechos laborales mantengan una secuencia invariablemente

creciente. Digo esto, porque el oficialismo se ha jactado de que en los últimos años este país ha crecido a una tasa promedio del 8 o 9 por ciento anual. No estoy hablando de situaciones de crisis; me refiero a un derecho progresivo en un contexto de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Lógicamente que hay un acuerdo que le cerrará a un sector de la industria y a algún sector de los trabajadores también le cerrará la opción, pero en desmedro de una vía judicial que en definitiva fue un gran logro, una gran conquista de los propios trabajadores a través de la interpretación de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Escuché decir al presidente del bloque del oficialismo, cuando le solicitó una interrupción al senador Morales, que hay que llamar a las cosas por su nombre y terminar con la “industria del juicio” en la Argentina, y que esta es una iniciativa que beneficia a las pymes y que va a generar trabajo en la Argentina.

Señor presidente: este proyecto no va a generar trabajo en la Argentina. Establece sí una opción y puede ser que, de alguna manera, la litigiosidad en indemnizaciones o en accidentes en una escala inferior al 50 por ciento de incapacidad disminuya por el uso de la opción. Pero si hablamos de una incapacidad del 50 por ciento para arriba, las cosas son diferentes. ¿Y saben por qué tampoco va a haber una merma de la litigiosidad? Porque el 70 u 80 por ciento de las enfermedades profesionales que hoy se demandan no están contempladas en los listados. Entonces, si no están contempladas en los listados, ésta es una falsa opción, porque lamentablemente el peso va a recaer justamente sobre las pymes, porque las pequeñas y medianas empresas van a pagar una prima, pero cuando se las demande por la vía judicial –porque los trabajadores van a acudir a la vía judicial–, van a terminar afrontando esa indemnización, ya que no la cubre la aseguradora de riesgos de trabajo.

Entonces, no es un avance; es un retroceso, un estancamiento. Si se hubiera discutido seriamente en comisión, así como está tarifado en la aseguradora de riesgos de trabajo el listado de enfermedades que hoy se contempla, se podría haber avanzado con un seguro civil obligatorio para el 70 u 80 por ciento de aquellas enfermedades profesionales que hoy no están contempladas.

¿Por qué no lo hemos hecho? Si eso se podría haber contemplado y discutido. ¿O usted, señor presidente, cree que las pymes quieren apostar a una falsa opción o en definitiva quieren pagar una buena prima que les otorgue la posibilidad de deslindar responsabilidades? Eso es lo que se busca desde el sector de las pequeñas y medianas empresas de la Argentina. Afronto el pago de un seguro, contrato un seguro, pero deslindo responsabilidad y tengo tranquilidad para contratar a los trabajadores.

Sin embargo, con esta iniciativa no se gana en tranquilidad, es decir, se da una opción que puede establecer un criterio cuasi extorsivo para no acudir a la vía civil –aunque algunos sí lo harán en la búsqueda de la reparación integral–, pero se pierde de vista lo central, que es que se podría haber contemplado un seguro civil obligatorio para el 70 u 80 por ciento de las inmensa cantidad de enfermedades profesionales que desde 1994 a la fecha, prácticamente, son las que se demandan no solamente en el fuero laboral, sino también en el fuero civil, que reitero que esta iniciativa no contempla. Y esto no se discutió; si se hubiese hecho, tranquilamente las podríamos haber contemplado.

Otra de las objeciones, y me parece sí también muy grave, está vinculada con el artículo 9º del proyecto del gobierno, que hace referencia a que para garantizar el trato igual a los damnificados cubiertos por el presente régimen, los organismos administrativos y los tribunales competentes deberán ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos al listado de enfermedades profesionales previsto como anexo 1 del decreto 658 y 659 del 96.

En verdad, me parece que acá se vulnera la independencia de criterios del propio juzgador. Esto vulnera un principio central de un sistema republicano y del Estado de derecho, porque está avanzando sobre la libre decisión del propio juez. No se le permite al magistrado evaluar armónicamente y de manera conjunta las pruebas, así como tampoco tener en cuenta otros hechos que le permitan, en el contexto de la sana crítica, la propia lógica y el razonamiento en el momento del dictado de la sentencia.

Esto es una barbaridad. ¿Y por qué lo han hecho? Porque pretenden tratar de cercenar el criterio de la reparación integral en el marco de la justicia civil, pero tampoco logran una solu-

ción. Lo que están logrando es vedar la propia posibilidad del criterio de independencia que debe tener el juzgador.

Si les ordenamos a los jueces cómo deben fallar, sin tener en cuenta otros hechos que se valoran en el contexto de los elementos probatorios, lo que de alguna manera estamos haciendo es materializar un acto de tremenda injusticia, como es que una enfermedad profesional que no está contemplada en los listados de los decretos termine logrando un resultado adverso y perjudicial para el propio trabajador, que llevará consigo, por el resto de su vida, la secuela de esa enfermedad profesional. Creo que, cuanto menos, es una redacción muy poco grata de ese artículo.

Otra objeción tiene que ver con cómo se habla de una mejora en cuanto al nuevo mecanismo de la tarificación que prevé la aseguradora de riesgo de trabajo y el 20 por ciento de plus. Ese famoso 20 por ciento es una especie de atajo en la búsqueda de compensar el criterio de reparación integral y evitar que el propio trabajador acuda a la vía civil o accione, en el marco del derecho laboral, la reparación integral. Pero no se cambia la fórmula del cálculo de las prestaciones dinerarias. Y esto sí que es importante, porque está vigente el artículo 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, que establece que se toma como base para el cálculo el salario promedio del año anterior.

La ley 24.557 fue sancionada en el contexto de la ley de convertibilidad, en un proceso que no contemplaba la inflación. Sin embargo, con esta iniciativa, nosotros vamos a tener presente para la indemnización el salario promedio del año anterior, aun estando en un contexto inflacionario con aumentos salariales del orden del 20 o 25 por ciento. Es decir que en lugar de tomar como parámetro el salario promedio al momento del acaecimiento del hecho dañoso, se adopta el salario promedio del año anterior.

Entonces, con el proceso inflacionario y con un aumento salarial del 25 por ciento, hasta la base que se toma para la actualización es absolutamente injusta y regresiva. Ni siquiera contemplaron esto.

Al mismo tiempo, este artículo dispone que solamente se tomen en consideración las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado de Jubilacio-

nes y Pensiones. Sin embargo, en la inmensa mayoría de los convenios colectivos florecen los adicionales no remunerativos; y esos adicionales no remunerativos no se toman en cuenta para fijar el salario promedio del trabajador del año anterior.

Y hablando de estos adicionales no remunerativos, a los que hoy se ha hecho referencia, me parece que al respecto hay un conflicto en la calle, en el sentido de que integran el salario, pero al mismo tiempo no lo integran; y que quienes están en situación de retiro en el marco de la Gendarmería o de la Prefectura los están solicitando. Digo esto como para tenerlo presente.

La omisión es mucho más injusta todavía, porque para calcular la base imponible para pagar las alícuotas que recaudan las ART se la efectúa sobre el monto total de las remuneraciones y conceptos no remunerativos. Mucho más injusto todavía. No contemplamos la inflación y tampoco contemplamos esto.

Hay algo que me parece que al oficialismo se le pasó por alto, que tiene que ver con el artículo 5°, que es importante e interesante. Señalo esto, porque el artículo 5° establece que la percepción de las prestaciones en dinero, sea imputable a la sustitución de salarios en etapa de curación o sea complementaria por gran invalidez, así como la recepción de prestaciones en especie, no implicarán en ningún caso el ejercicio de la opción excluyente prevista en el artículo precedente. Nos parece muy bien. Es decir, se percibe una prestación por los salarios y, hasta tanto no se determine la incapacidad, esto no significa un uso de la opción.

Ahora bien, este artículo no hace referencia a la incapacidad permanente provisoria. ¿Qué significa esto? ¿Que si no hace referencia a la incapacidad permanente provisoria el trabajador que está incapacitado provisoriamente y de manera permanente ya ha hecho uso de la opción del artículo 15? Esto no se contempla. Pero debería contemplarse, porque es una situación mucho más gravosa para los propios trabajadores.

Para terminar, señor presidente, quiero decir que me consta que algunas objeciones son reiterativas, pero me parecen importantes, porque dejan en claro que estamos ante un notable retroceso en materia de riesgos del trabajo. En

este sentido, no se entiende la necesidad del oficialismo de avanzar de manera prepotente y a las apuradas en este proyecto, porque los números lo acompañan.

Este proyecto, que hoy seguramente se aprobará, se podría haber mejorado. Y se podrían haber contemplado algunas observaciones, porque a pesar de las enormes diferencias que nosotros tenemos, si no se receptan los criterios jurisprudenciales establecidos por la Corte a partir de 1994, de alguna manera con el tiempo se van a poner las cosas en su lugar, dado que los trabajadores demandarán y el criterio de la Corte se va materializar.

Por ejemplo, ¿por qué no se avanzó ni se discutió seriamente un seguro obligatorio de naturaleza civil para contemplar las enfermedades profesionales? Ésta es la principal preocupación de las pymes hoy, es decir, el 70 u 80 por ciento que se demanda, cuando se paga una prima pero no cubre la ART y hay que hacerse cargo. ¿Y por qué?

No hubo debate; no hubo debate serio y responsable. Ocurre lo mismo que con todos los dictámenes que últimamente se ponen en consideración. Es algo parecido a lo que sucedió con el voto joven. Allí debimos solicitar un cuarto intermedio, porque ya estaba preparado el dictamen. Y bienvenido ha sido ese cuarto intermedio, porque posibilitó que continuaran declarando los expositores que estaban en el orden de la lista, a pesar de que ya se había definido prácticamente el dictamen, sin que todos esos expositores hicieran su presentación.

Entonces, ¿cuál es el apuro, si tienen los números? ¿Cuál es el apuro para discutir una norma que pone en riesgo el derecho de los trabajadores –que ya no tienen capacidad de lograr una reinserción laboral– a percibir una indemnización justa? Nadie puede acompañar un pacto espurio. Ni el propio oficialismo. Aun si los números no dieran, sería el camino equivocado. Y un camino equivocado fue también no contemplar y avanzar de manera prepotente y de apuro sobre los propios trabajadores del Banco Ciudad, quienes pedían que se contemplaran determinados criterios porque podían perder sus fuentes de trabajo. Todo esto, sin importar si la Justicia el día de mañana determinaba que la Ciudad se debía hacer cargo o no, pero mientras tanto el tendal pasaba a un segundo plano.

Creo que esta lógica que hoy impone el oficialismo es errada. Deberían tomarse su tiempo y modificar ciertos criterios, porque nosotros estamos dispuestos a acompañar algunas cosas que nos parecen acertadas y con sentido común, como lo hemos hecho fundamentalmente con este historial de marchas y contramarchas en materia de infortunios laborales desde 1915. Pero bajen un cambio. Porque tienen los números y, por no tomarse un tiempo, redoblan la apuesta y, perjudican a los trabajadores.

Si hubiéramos discutido esto seriamente, en materia del seguro civil obligatorio quizás podríamos haber acercado posiciones. Esto hubiera redundado en tranquilidad para los trabajadores, que cobrarían las indemnizaciones en caso de riesgo o siniestros fatales, y en tranquilidad también para las pequeñas y medianas empresas, porque en realidad lo que se pretende es buscar mayor inserción laboral y terminar con el trabajo en negro en la Argentina.

Por eso, a modo de reflexión señalo que por todo lo que hemos dicho no vamos a acompañar esta iniciativa, pero siempre es bueno bajar un cambio, fundamentalmente en momentos de tensión. Porque yo no quiero hablar de triunfalismo, pero a mí me parece que hay un excesivo rigor autoritario porque los números acompañan, y eso no es bueno. Hay que aprender de nuestra propia historia, particularmente en una materia tan sensible como ésta.

Yo no hablo del modelo neoliberal. Desde 1915 y con la ley 9.688 me referí a los avances y retrocesos para los trabajadores, porque el bien jurídico a tutelar es la integridad psicofísica de los propios trabajadores. Entonces, bajar un cambio nunca está de más.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Es interesante asumir también los procesos políticos con alguna cuota de autocrítica. Cuando uno repasa la votación de flexibilización laboral de De la Rúa observa que fue hecha en un contexto salvaje, porque no hay que olvidarse de que esa norma se sancionó con posterioridad a la reducción de los salarios previsionales y de los trabajadores públicos. Digamos que Machinea fue el artífice de un proceso de decadencia en tirabuzón de un gobierno que después terminó fracturándose a través de una

ruptura entre el presidente y su vicepresidente y la conocida salida en helicóptero.

Ahí tenemos, en esa ley, sancionada en el marco de un contexto de ajuste salvaje, a los principales dirigentes del radicalismo votándola a dos manos. No quiero ser irrespetuoso, pero también debo recordar que esa ley determinó la fractura del socialismo, donde hubo hombres importantes de esa fracción política, como Jorge Rivas, que votaron con nosotros, y otros que lo hicieron por la afirmativa.

A su vez, quiero decir que estamos en un contexto distinto. Porque el contexto de 2000 o 2001, cuando asume De la Rúa y se avanza con esto, era distinto. Se trataba de una legislación basada en el ajuste y en la flexibilización laboral. A mí, a veces, me reprochan mi pasado con Menem: sí, soy un hombre del partido y llegué a la Cámara de Diputados en 1994, cuando ya había pasado todo el proceso de privatización, o sea cuando ya se habían votado las principales leyes. Pero yo no reniego de ese pasado, porque, lógicamente, al tener un sentido de pertenencia hemos acertado y errado en el proceso político histórico seguramente; esa etapa quedará a juicio de valor de los historiadores.

También debo decir –y ya lo dije cuando debatimos la recuperación de YPF para el Estado– que el contexto internacional para la Argentina era todo negativo; me refiero a las condiciones internacionales, lo que también afectó al gobierno de De la Rúa. Tengo que ser justo y decir eso.

En ese momento teníamos un diagnóstico equivocado. En realidad, el único que quiso salir de la convertibilidad fue el que perdió las elecciones. Me refiero al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires Duhalde, que fue nuestro candidato y que en su discurso electoral sostenía que había que salir de la convertibilidad, porque ésta estaba agotada, por lo que resultaba imprescindible pasar a un tipo de cambio flotante para salir del uno a uno rígido, que nos mataba y que, indudablemente, iba en contra de toda la actividad económica e industrial y producía desempleo.

¿Qué es lo que planteo? Una mirada un poco más benévola de lo que nos tocó vivir y de aquello de lo que hemos sido protagonistas. No voy a hacer nombres por una cuestión de delicadeza, porque tengo un trato respetuoso con muchos de

ellos. Ésta es una iniciativa que hoy está siendo revisada en el proceso judicial y que, además, cuando asumimos con el presidente Kirchner anulamos, la dejamos sin efecto y sancionamos una nueva ley para regular todas las relaciones laborales, con el principio de beneficiar a los trabajadores; y toda la legislación que se ha votado ha sido en esa línea.

En general, toda la legislación que hemos votado aquí, en el Congreso, ha sido en una línea de avance en las condiciones, en mejoras, pero además ha sido enmarcada en un proceso de crecimiento económico, de superación de las condiciones de vida. No fue en la línea de una ley de flexibilización laboral vergonzosa que se votaba en el marco de un ajuste terrible que estábamos viviendo los argentinos y que determinó el fracaso del sistema democrático, la derrota del sistema político, y dio origen a esa consigna nefasta, nihilista, de parte de muchos sectores de la sociedad que, también alentados por los medios, decían “Que se vayan todos”.

Eso es un poco lo que pasa en los países de Europa, en donde la política pierde absoluta credibilidad frente a los procesos de ajuste. Esto lo dice muchas veces la presidenta cuando va a los escenarios internacionales; sin embargo, la subestiman cuando lo hace, porque dicen que queremos vender una receta y en realidad lo que está describiendo es que en algunos países europeos los procesos de ajustes salvajes provocan conmoción social, la salida de la gente a la calle y la deslegitimación de los partidos políticos y de los dirigentes políticos.

Indudablemente, en este contexto la legitimidad y el proceso de confiabilidad de Mariano Rajoy, un hombre perteneciente al Partido Popular que luchó toda su vida para ser presidente de España, van camino al pozo negro de la historia frente a la sociedad española. El socialismo también salió mal con Zapatero en la última etapa, y ni hablar de otros procesos, como el de Grecia, que es mucho más terminal, porque tiene una moneda hiperfuerte, es decir, una incapacidad monetaria para producir moneda propia; están en la lona, no van a salir y, además, van a producir más fractura social, más pobreza, e indudablemente van a abrir camino a procesos quizá de perfil fascista o autoritario.

Recién el senador Adolfo Rodríguez Saá trajo un aporte interesante cuando habló sobre

la Medusa y sostuvo esa frase de cambiar todo para que nada cambie, pero debo decir que el contexto histórico de esa obra, *Il gattopardo*, está en los prolegómenos del fascismo italiano, 1920, la época de los privilegios, la decadencia de un proceso de concentración económica, de riqueza, los vestigios de las monarquías anteriores, y eso abrió camino al fascismo.

Entonces, el riesgo de algunos países es que empiecen a emerger las corrientes de nacionalismo y de ideas autoritarias en el proceso del ajuste feroz y permanente.

Por eso digo que esta historia ya la hemos vivido y nadie puede imputarle a este gobierno que haya sancionado leyes regresivas o que hayan ido en contra del interés del trabajador; al contrario, hemos ido avanzando, incluso en algunos casos poniéndole límites a la capacidad creativa de la Cámara de Diputados, que ha tenido una intensidad extraordinaria en materia laboral. Ha habido un conjunto de leyes que, por una cuestión de prudencia política y para poner equilibrios, este Senado a lo mejor no ha acompañado. Pero hemos trabajado siempre en el proceso de expansión, de crecimiento y de ampliación de derechos. Ésa fue la línea, y esta iniciativa también viene en esa senda. ¿Por qué? Porque los numerosos fallos mencionados aquí, el de “Aquino” y todos que se señalaron a lo largo de esta tarde y que no vale la pena repetir, plantean la inconstitucionalidad de la ley anterior, la de Cavallo, que es muy parecida a la modificación de la Ley de Quiebras y al *cramdown*, porque forman parte de una política, de una ideología y de un pensamiento de cómo se lesionaba el interés del trabajador o cómo los fondos financieros o acreedores se quedaban con las empresas.

¿Por qué se dan las inconstitucionalidades? Primero, porque los montos que se fijaban en la ley 24.557 eran miserables. La reparación de la pérdida de un brazo, un accidente laboral donde se perdía un dedo o una muerte tenían indemnizaciones totalmente miserables, que lesionaban sin duda todo derecho de la víctima y que, además, se las pagaban en cuotas. ¡Digámoslo claramente! ¡Se las pagaban en cuotas, fragmentadas! ¡Armaron un artilugio de la renta vitalicia! ¡Encima se las pagaban en cuotas!

Por supuesto que con una Corte decente, formada por buenos jueces, indudablemente

a partir de 2004, con la modificatoria, no se sostuvo. En efecto, no se sostuvieron los bajos montos indemnizatorios de la reparación de la Ley de Accidentes del Trabajo. Por eso, en 2004 se abrió la vía del derecho común para reparar la injusticia de los bajos montos bajos y, en otros fallos, también se declaró inconstitucional la renta vitalicia o la fragmentación de pago. ¡Lógicamente que eso no se podía sostener! No tenía racionalidad.

Ahora, en este camino también hay algunas cuestiones que producen distorsiones. En el beneficio también está el demérito. No para el trabajador, que tiene derecho a plantear un reclamo o una indemnización integral, sino también para el conjunto económico de la sociedad.

El senador Petcoff Naidenoff planteó un conjunto de leyes. Hizo historia con la ley 9.688, que fue de avanzada, porque fue la primera ley de indemnizaciones emergentes de las enfermedades profesionales y del trabajo, y hace a la historia de nuestro derecho del trabajo. Pero no mencionó la reforma del Código Civil, la sanción de la ley 17.711 y la modificatoria del artículo 1.113, que incorpora un elemento fundamental en la teoría de la culpa o del daño, que es el riesgo o el vicio de la cosa, con lo cual abre un camino, una avenida extraordinaria.

En la década del ochenta yo también hacía derecho laboral; conozco el tema desde adentro, desde el corazón, y sé cómo se trabajaba en materia laboral.

Hubo un famoso juicio que el senador Linares seguramente recordará, donde la Cámara Federal de Bahía Blanca abrió la puerta a la acción del derecho común por la vía del artículo 1.113, después de la reforma Borda, por el riesgo o vicio de la cosa, que fue el caso de los silos de Bahía Blanca, donde murieron un montón de obreros. En ese fallo ejemplar, la Cámara Federal de Bahía Blanca reconoció el derecho a la indemnización integral y consolidó la acción de derecho común en materia laboral.

Antes había que probar la culpa del empleador en el accidente; la responsabilidad por el daño o vicio de la cosa eran estructuraciones que no estaban en el anterior derecho civil, donde solamente regía el principio de la culpa subjetiva del artículo 1.109. En cambio, con la ampliación de la reforma Borda, a través del artículo 1.113 se entra en un terreno de la

responsabilidad objetiva, en donde indudablemente, si la cosa estaba viciada, si había un problema y provocaba un daño, también había derechos que se abrían.

Ahora bien, eso que fue primero un camino angosto, después en la Argentina se fue abriendo como una avenida amplísima donde se transitaba prácticamente en la reparación de todos los accidentes laborales. Se utilizaba la vía del derecho civil, la vía de la acción de derecho común para la reparación de los accidentes de trabajo.

Con este proyecto de ley quedan solucionadas las distorsiones con una reparación justa, con un principio rápido de pago dentro de los quince días. Así, salimos de las inconstitucionalidades. Y, lógicamente, no se le impide al trabajador la posibilidad de ir por la vía del derecho común. En efecto, el trabajador puede optar.

Ahora bien, si se decide por la reparación que está prevista en la norma que votaremos, que establece una reparación importante desde el punto de vista del valor vida o del valor de pérdida por accidente y que, además, se paga en el término de veinticinco días, con una mecánica de actualización y en una sola cuota, no se puede poner en el recibo pago “En disconformidad” e ir a la vía de la acción del derecho civil o del derecho común. Si se toma el monto indemnizatorio previsto en la ley, se cierra el capítulo de la reparación y no hay acción de derecho común.

¿Cómo se juega hoy en este escenario? Se percibe la indemnización emergente de la Ley de Accidentes del Trabajo, que es poca, miserable y no está adecuada, se consigna que se lo hace en disconformidad y se abre el camino judicial por la vía del derecho común. En síntesis, se utilizan las dos vías.

Lo que estamos proponiendo es un ordenamiento. Estamos poniendo indemnizaciones justas. Decimos que va a cobrar en el plazo de 25 días. Damos una solución rápida a la familia del trabajador que necesita la plata y no puede esperar dos o tres años.

También en esta mecánica muchos se hacen cargo de los juicios. Hay estudios —no todos, no quiero ser injusto con los colegas abogados— que terminan haciéndose parte prácticamente. Y como en el pacto de cuota litis prácticamente adelantan recursos, en muchos casos terminan quedándose después con la parte del león cuan-

do termina el juicio, porque tienen capacidad económica para esperar.

Esto ocurre también.

Sra. Negre de Alonso. – Eso no lo soluciona el proyecto.

Sr. Pichetto. – No; la iniciativa soluciona la elección de una vía rápida de cobro y en un monto que nosotros consideramos que es justo, equitativo y que encierra el concepto de reparación integral. Además, le adiciona el 20 por ciento también como daño moral, que es un elemento nuevo dentro de esta temática. Y hay un piso mínimo de 70 mil pesos.

Creo que esta iniciativa es importante y da previsibilidad. Además incorpora una organización nueva y baja las comisiones, porque las ART son un esquema residual de lo que nos quedó de las AFJP, donde las comisiones son la parte del león, los porcentajes son muy altos y el negocio lo hacen estas empresas. Y al poner tope a las comisiones o empezar a pensar en el armado de nuevas organizaciones de seguro que se llaman mutuas, donde van a participar el empleador y el trabajador, entramos en otro tipo de actividad, que si bien tendrá también un fin de lucro, nunca va a ser el de una empresa privada que solamente busca la ganancia. En las mutuas están el interés del empresario y el del trabajador para bajar los costos al máximo y poder hacer eficaz la reparación y no trabajar tanto sobre el tema de las comisiones.

Por otra parte, también creo que esto da previsibilidad al mercado laboral, a los empleadores. Un mercado laboral que tiene que mirar al trabajador como el fin a proteger, pero también a los empleadores. Porque si no hay empleadores y empresas, no hay trabajo.

Siempre escucho acá grandes fines. Es un mundo de almas sensibles a veces el Senado. Uno escucha los discursos y realmente no tiene más que compartir esa sensibilidad. Pero estamos en un mundo muy complejo.

¿Qué nos pasó a finales de los noventa y a principios de 2001? Hubo empresas que se radicaron en el sur de Brasil, en Santa Catarina, porque era mucho más competitivo ir allá a producir tractores o maquinarias agrícolas, lo cual era nuestra especialidad desde el punto de vista técnico. ¿Por qué sucedió eso? Porque no

teníamos una política impositiva para dejarlos, ni una política de producción para contenerlos.

Ésta no es una historia que ocurrió hace cincuenta años, cuando estudiábamos economía política en la universidad y analizábamos lo que había pasado en el siglo anterior. Esto ocurrió hace diez o doce años.

Entonces, este proyecto de ley también tiende a plantear equilibrios y, fundamentalmente, a prever el costo, porque la vía del derecho común –la acción civil– determina muchas veces indemnizaciones que, a lo mejor, empresas grandes e importantes las pueden soportar. Sin embargo, cuando se trata de pequeñas empresas, de estructuras de 10 o 12 trabajadores o de empresas familiares que toman algún trabajador y ocurre una situación como ésta, no hay cobertura posible. Entonces, esa indemnización provoca el quiebre o el cierre de la empresa y el despido de los trabajadores. Esto sucede, y de manera habitual.

La Argentina tiene un gran potencial en las pymes. Algún día lo definiremos, porque todavía no sabemos qué es una pyme en la Argentina. Hay una legislación confusa sobre cuál es la tarificación que debe hacer durante el año, cuánto debe recaudar y cuántos empleados debe tener. Yo soy de los que creen también que debe haber una legislación especial para el despido en las pymes. No pueden aplicarse las normas rígidas del artículo 245. Es una visión que tengo respecto de este tema. Las pequeñas empresas no pueden tener la misma regulación que las grandes empresas, las que indudablemente disponen de otro tipo de reaseguros, de otro tipo de financiamiento. A veces, trabajan en el marco internacional con financiamiento cero cuando las pymes tienen que ir al mercado argentino a pagar el 20 por ciento de interés. Entonces, algún día este Congreso definirá qué es una pyme, qué legislación necesita una pyme y qué marco laboral tiene una pyme.

Los muchachos de los sindicatos no se tienen que rasgar las vestiduras, porque ellos, además, también trabajan. Hay un esfuerzo permanente de los dirigentes sindicales de trabajar para sus afiliados, para los activos del sindicato. ¡Y está bien que así sea! Es lógico que sea de esa manera. Ahora, el gobierno tiene que pensar en los que están afuera: en los que están en negro, en los que están fuera del mercado laboral. Tiene

que pensar cómo se los incorpora al trabajo en blanco. Es decir, cómo hacemos para tener un modelo razonable, equilibrado, inteligente, rápido y efectivo para que cobren. Cómo eliminamos o bajamos la litigiosidad —no lo vamos a poder hacer del todo—, que tiene un costo muy importante. En definitiva, éstos son los fundamentos que queremos sostener esta tarde.

El proyecto de ley lo discutimos en el ámbito de la comisión. Al respecto, vinieron representantes del Ministerio de Trabajo: vinieron el ministro Tomada y el secretario de Seguridad Social, licenciado González Gaviola. También estuvieron los representantes de los gremios. No es que hicimos algo en la oscuridad, a la medianoche, en banda, organizados, como se dijo aquí. ¿Qué dijo el senador Naidenoff?

Sr. Petcoff Naidenoff. — Nada que ver.

Sr. Pichetto. — ¿Qué dijeron?

Sr. Presidente. — Senador Morales: ¿puede clarificar?

Sr. Morales. — Dije que fue un montaje similar a lo que tienen en la Casa Rosada: que faltaban los aplaudidores de la Casa Rosada porque fue un acto oficial. Y la verdad es que fue así.

Sr. Pichetto. — Senador Morales: es importante acompañar a nuestra presidenta en los grandes temas que ella aborda y estar al lado de ella. No como ustedes que, a veces, cuando De la Rúa tomaba medidas, votaban en contra. Nosotros tenemos otra conciencia y otra disciplina política: somos verticalistas. A veces nos equivocamos, pero somos solidarios con nuestro gobierno.

Sr. Presidente. — Le piden una interrupción los senadores Naidenoff y Morales.

Sr. Pichetto. — Cómo no.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: el senador Pichetto fue muy claro cuando ha dicho que el derecho laboral es dinámico en el marco del riesgo de trabajo, en este contexto de avances y contramarchas. También la política es dinámica. Entonces, así como en el gobierno de De la Rúa algunos radicales no lo hicieron, en mi caso he acompañado. Fui concejal por la ciudad capital de Formosa; nos tocó gobernar la ciudad, y acompañamos todas y cada una de las medidas de De la Rúa. Lo hice, incluso, con

las medidas más duras, porque soy un hombre de partido. No ando para dónde va el viento.

Quiero decirles que, en determinadas circunstancias, también el propio oficialismo ha roto la rigidez de la disciplina de partido. En realidad, puede haber disciplina con un gobierno pero no con un partido. Es decir, el propio oficialismo deberá merituar si el partido funciona como partido. Pero no hace muchos años, hemos aprobado en este recinto, en horas de la madrugada, la resolución número 125, y muchos hombres y mujeres del peronismo, al cual respeto, no acompañaron al gobierno. Entonces, creo que, a veces, se toman decisiones según el contexto histórico y, fundamentalmente, según los niveles de representación y el compromiso que tenemos con las provincias.

Planteé esto, simplemente para dejar en claro cómo son las cosas, porque a veces les toca a ustedes, y nos puede tocar a nosotros en función de las decisiones que se tomen.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. — Señor presidente: lejos de la chicana, cuando nosotros dijimos que prácticamente fue una reunión oficialista, así lo manifestamos porque no estuvieron presentes gremios y sectores que considero representativos del movimiento trabajador. No se le puede negar representación a Hugo Moyano, secretario general del sindicato de camioneros. No se le puede negar...

Sr. Fernández. — ¿El SMATA no es representativo?

Sr. Morales. — Sí, son representativos.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Morales. — Pero ha habido la expresión de una voz parcial del movimiento de los trabajadores. No se escuchó a la representación de lo que hoy sería la totalidad de la expresión del movimiento trabajador, que está dividido en dos CGT y en dos CTA. Por ejemplo, Pablo Micheli es secretario general de la otra CTA y también representa a muchos trabajadores. Por eso decimos que no ha habido debate.

Con relación al tema De la Rúa y demás, comparto que el menemismo vivió momentos difíciles en la primera época después de la hiperinflación. Se tomaron duras decisiones. Creo

que ha sido una década nefasta durante la cual se destruyó la industria nacional y se generaron muchos problemas.

En 1999, nosotros recibimos la bomba de tiempo que era la convertibilidad. Debo aclarar que no acompañé que no compartí esa medida injusta que fue la reducción del 13 por ciento de las jubilaciones de un determinado monto. Pero se implementó, y me hago cargo como hombre del partido. También quiero decir, para conocimiento del senador Pichetto –por si no lo sabe–, que el ex gobernador de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, también instrumentó una medida similar...

Sr. Fernández. – ¡Él lo pagó con intereses!

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Morales. – Fueron decisiones que se tomaron en un momento difícil para el país y las provincias. Con las firmas de Carlos Zannini, Ricardo Jaime, Alicia Kirchner y Néstor Kirchner, se dictó el decreto 309 en 1992 a través del cual se les redujo el 15 por ciento a los trabajadores que cobraban más de 500 pesos; y a los que percibían menos de 500 pesos, el 10 por ciento. Por lo tanto, con relación a medidas injustas, en todo caso, el precursor fue Néstor Kirchner.

Entonces, recordemos y tengamos memoria de las situaciones que ocurrieron después de aquella década infame. Ustedes hace diez años que gobiernan con un país en crecimiento. En consecuencia, es hora de que podamos llevar justicia a los trabajadores, pero no de esta manera. Simplemente, quería hacer esta aclaración.

Volviendo al tema de la reunión, reitero que creo que podrían haber estado otros dirigentes gremiales que también expresan los derechos de los trabajadores.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Pichetto.

Solicito al senador Mayans se sirva respetar al orador en uso de la palabra.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: el pasado sirve para reflexionar y también para analizar en su contexto cada situación.

Senador Morales: creo que es un mal ejemplo el que usted puso. Se encuentra presente el se-

nador González, quien sabe perfectamente cuál fue la situación de la provincia de Santa Cruz después de la intervención y de la salida del gobernador Del Val. Por su proceso económico, Santa Cruz no podía pagar nada –ni siquiera los salarios– y se encontraba en una situación muy compleja. Además, reparó la situación rápidamente –en menos de un año– y devolvió la plata con intereses.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Algunos no devolvieron.

Sr. Pichetto. – Otras hicieron bonos y pagaron con papelitos sucios.

–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Por favor...

Sr. Pichetto. – Lo que digo es que no constituye el mejor ejemplo.

Finalmente, presidente: creemos que esta ley es importante. Le diría que es una de las de mayor trascendencia en el marco de la legislación laboral. Creo que va a ser muy útil para la Argentina, para el crecimiento del empleo, para que más de 3 millones de trabajadores del país que trabajan en negro puedan ser blanqueados; para que haya previsibilidad del sector empresario en términos de los costos y para que, cuando haya aumento de la demanda, también haya aumento del empleo. Entonces, no tengan miedo de nombrar a un trabajador.

Con estos fundamentos, señor presidente, nosotros vamos a votar positivamente.

Sr. Presidente. – Si no hay objeciones, propongo que sea una sola votación en general y en particular para todos los artículos.

Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Vamos a pedir que se aprueben las inserciones.

Asimismo, tenemos prevista una modificación en el artículo 17, donde se dejan sin efecto tres artículos de la ley 24.557.

Con respecto al artículo 39, vamos a derogar solamente los incisos 1, 2 y 3; o sea, vamos a dejar vigente el 39 en los incisos 4 y 5 porque tienen que ver con la reparación del accidente *in itinere* y, también, con el derecho de la empresa que paga la indemnización de ir contra el que generó el accidente.

En el 17 del dictamen de mayoría, vamos a mantener el 4 y el 5 del 39; o sea que el 39

queda vigente. No se deroga, pero queda con dos incisos.

Sr. Presidente. – Solamente 4 y 5.

Tiene la palabra el senador Morales.

Sr. Morales. – Está bien, porque había dicho el senador Aníbal Fernández que se mantenían el 4 y el 5, y no estaba en el texto. Entonces, ahora, se incorporan.

No me quiero meter, porque nosotros vamos a votar en contra. Pero ¿no van a derogar el 14, inciso 2, apartado b), y el 15, inciso 2, por lo menos, para estar en línea con la derogación del 19?

Sr. Pichetto. – No.

Sr. Presidente. – Entonces, propongo nuevamente que se haga una sola votación en general y en particular, dados los argumentos que se han ido exponiendo.

Primero, autorizamos las inserciones.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los pedidos de inserción.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.¹

Si ningún otro senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola votación el proyecto en consideración.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41 votos por la afirmativa y 19 por la negativa.

Sr. Presidente. – Señora senadora Leguizamón: manifieste su voto a viva voz.

Sra. Leguizamón. – Afirmativo.

Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, se registran 42 votos por la afirmativa y 19 por la negativa.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.²

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.³

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

³ Ver el Apéndice.

12

O.D. N° 983/12

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL. INCORPORACIÓN DE LA FIGURA DEL DELITO DE FEMICIDIO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicité la palabra para ver si podemos acordar el tratamiento del delito de femicidio únicamente y, después, pasamos a un cuarto intermedio. Creo que no da para continuar con los otros temas.

Por nuestro bloque, va a hacer uso de la palabra el miembro informante, senador Guastavino y va a cerrar la senadora Riofrío.

También pedimos autorización para insertar y esperamos hacer un debate, en este tema, lo más rápido que se pueda.

Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, ponemos el tema en consideración.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.

Hay una lista de oradores. Voy a pasar a leerla y, si no hay objeción, la cerramos ahí. Los oradores son los siguientes: Guastavino, Escudero, Negre de Alonso, Borello, Gustiniani, Morales y Riofrío.

Damos por cerrada esta lista.

Sr. Secretario (Estrada). – Se trata del dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de la Banca de la Mujer en distintos proyectos de ley de varios señores senadores y en el venido en revisión, por el que se modifica el Código Penal. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley. Se trata de varios expedientes, incluido uno de la Cámara de Diputados –C.D.- 16/12–.

Sr. Presidente. – Para comenzar el debate, tiene la palabra el senador Guastavino.

Sr. Guastavino. – Como bien decía el secretario, el orden del día es el 983, que ha considerado el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados y, además, los proyectos de ley presentados por distintos senadores y senadoras: las senadoras Sonia Escudero, Ana María Corradi de Beltrán, Fellner, Blanca Osuna (m. c.)...

–Murmillos en el recinto.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los tres días del mes de octubre del año dos mil doce.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

62

(Orden del Día N° 996)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.-2.426/12) del señor senador Juan Agustín Pérez Alsina, mediante el cual se declara de interés de esta Honorable Cámara la realización de la XVII Fiesta Nacional del Ave de Raza, a desarrollarse los días 7, 8 y 9 de septiembre del corriente año, en la ciudad de Rauch, provincia de Buenos Aires; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del Reglamento de este Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2012.

*María G. de la Rosa. – Jaime Linares. –
Mario J. Cimadevilla. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Sandra D. Giménez. – Roxana
I. Latorre. – María E. Labado. – Juan C.
Marino. – Laura G. Montero. – Nanci M.
A. Parrilli.*

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XVII Fiesta Nacional del Ave de Raza a desarrollarse el 7, 8 y 9 de septiembre del corriente año, en la ciudad de Rauch, provincia de Buenos Aires.

Juan A. Pérez Alsina.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Como sucede cada bienio, la ciudad bonaerense de Rauch se prepara desde comienzos de año para celebrar una nueva edición de la Fiesta Nacional del Ave de Raza, y recibir aves, criadores y expositores de distintos puntos de nuestro país, que competirán por una reconocida distinción en el ámbito avícola nacional, así como invitados y público en general.

La Fiesta Nacional del Ave de Raza se realizó por primera vez en julio de 1975, y desde entonces constituye una cita obligada en el ámbito avícola, y que exhibe a Rauch, a pesar de la distancia con la Capital Federal, como ciudad distinguida por su cría, cuidado, protección y desarrollo de las distintas especies avícolas.

Dicha fiesta se realiza con el objeto de reconocer la labor en la selección y el mejoramiento de las razas tradicionales de aves, desempeñada por avicultores Rauchenses durante más de cuatro décadas, y al mismo tiempo promover un evento que coloque a Rauch como atracción turística, mediante un programa de interés cultural dentro del ámbito nacional.

Con la realización de este evento se apunta a premiar el esfuerzo de los criadores, lo que constituye un estímulo para continuar trabajando en la superación de razas tradicionales avícolas, manteniendo la pureza de cada una de ellas, como también mostrar la ciudad al resto del país, invitando a participar a todas las personas que hasta allí se acercan.

La fiesta reúne actividades culturales así como también exposiciones de avicultura, agropecuarias, microemprendimientos, industria y comercio, con importantes charlas técnicas orientadas a los sectores antes mencionados.

La fiesta se desarrolla desde el viernes 7 hasta el domingo 9 de septiembre, cuando se pueden recorrer las distintas exposiciones. Por las noches se dan cita espectáculos culturales con la presentación de las postulantes a reinas de la fiesta y reinas visitantes. El domingo, a mediodía, en diversos puntos de la ciudad, se realizan las tradicionales parrillas populares con pollos asados, y luego se realiza el desfile oficial. La edición culmina la noche del domingo con el espectáculo final en que se elige a la nueva reina, quien representará y promocionará la fiesta en diversos lugares del país.

Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.

Juan A. Pérez Alsina.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XVII Fiesta Nacional del Ave de Raza a desarrollarse el 7, 8 y 9 de septiembre del corriente año, en la ciudad de Rauch, provincia de Buenos Aires.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los tres días del mes de octubre del año dos mil doce.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

63

(Orden del Día N° 1.041)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo expediente P.E.-155/12 (men-

saje 1.721/12), sobre Régimen de Ordenamiento de la Reparación de los Daños Derivados de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo nacional.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 25 de septiembre de 2012.

Ana Corradi de Beltrán. – María G. de la Rosa. – María L. Leguizamón. – Fabio D. Biancalani. – Daniel F. Filmus. – Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo. – Pablo G. González. – Beatriz Rojks de Alperovich. – Inés I. Blas. – María de los Ángeles Higonet.

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a consideración el presente proyecto de ley, cuyo objetivo consiste en el ordenamiento del régimen de reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Cabe recordar que, a partir del año 2004, se inició un período de transformaciones normativas en el ámbito de las relaciones laborales, cuyo mejor ejemplo lo constituyó la ley 25.877, donde se establecieron nuevas bases regulatorias en materia de derecho individual y derecho colectivo del trabajo, sistema de inspección, balance social y conflictos en servicios esenciales.

De igual manera, en el campo de la seguridad social se operó un giro trascendental a través de la ley 26.425 del año 2008, cuando se unificó el sistema de jubilaciones y pensiones en un régimen previsional público, solidario y de reparto.

En este sendero de evolución, el Poder Ejecutivo nacional también se abocó a formular un proyecto de ley modificatorio de la ley 24.557, de riesgos del trabajo, teniendo en cuenta los reproches constitucionales que le fueran realizados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos pronunciamientos (“Castillo”, *Fallos*, 327:3610; “Aquino”, *Fallos*, 327:3753 y “Milone”, *Fallos*, 327:4607, entre otros).

Para esta tarea, se tuvieron en cuenta tanto los precedentes judiciales como las opiniones de expertos y las necesidades de los actores sociales, apostándose al diálogo y al consenso, con pleno respeto a los principios del tripartismo.

En el marco de esta actividad, se estimó imprescindible disponer la mejora de las prestaciones dinerarias del sistema a la vez de establecer medidas concretas para perfeccionar sus aristas de gestión. Ello condujo

al dictado del decreto 1.694 de fecha 5 de noviembre de 2009.

En esa oportunidad, se consideró que el sistema de prevención y reparación de la siniestralidad laboral regulado en la ley 24.557 y sus modificatorias, evidenció su imperfección estructural como instrumento de protección social, resultando imperativo alcanzar un estándar equitativo, legal y constitucional, operativamente sostenible.

Con tales antecedentes se arriba al momento actual donde, más allá de continuarse las discusiones sectoriales, el régimen vigente en materia de riesgos del trabajo ha profundizado el impacto en la sociedad de sus aspectos más negativos, llegando a distorsionar y comprometer el funcionamiento de la totalidad del sistema.

En tal contexto, se ha tomado la decisión de elevar a vuestra honorabilidad un proyecto que atienda a la reparación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, configurando un régimen de reparación que integre las normas de la especialidad.

En materia resarcitoria, se han considerado los lineamientos vertidos para esa función en la reforma propuesta recientemente al Código Civil, sin dejar de lado la especificidad que tiene el régimen de cobertura de los infortunios laborales.

En lo particular, se ha establecido que el derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine, desde el acaecimiento del daño o desde la configuración de la relación adecuada de causalidad de la enfermedad profesional.

Por otra parte, cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, el damnificado percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en el régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas del sistema, de modo tal que el régimen ofrezca una reparación plena del daño.

En cuanto al esquema de percepción de la reparación, se propone un mecanismo de opción por parte del damnificado o sus derechohabientes, entre las indemnizaciones previstas en este régimen o las que les pudieran corresponder por igual concepto con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. De esta forma, recobra vigencia una modalidad similar a la contenida en la ley 9.688 (convalidada por la jurisprudencia), pero dejando la posibilidad al interesado para que elija la vía de reparación que transitará dentro de las que le brinda la legislación, ya que queda sin efecto la restricción impuesta en el artículo 39 de la ley 24.557.

Debe ser destacada, por su singular importancia, la gran diferencia existente entre la opción propuesta y la prevista en el antecedente mencionado: mientras que en el pasado régimen se optaba a partir del momento mismo del accidente o toma de conocimiento de la enfermedad y sus consecuencias invalidantes, ahora se plantea realizarla una vez que se hayan brindado todas

las prestaciones médicas y cobrado todos los salarios en período de curación. La asistencia a la víctima sin alteración de su salario será la base sobre la cual se asentará la decisión libre del damnificado.

La clave de bóveda de la iniciativa se resume en facilitar el acceso del trabajador a la reparación, para que la cobertura sea justa, rápida y plena, brindando un ámbito de seguridad jurídica que garantice al damnificado y a su familia un mecanismo eficaz de tutela en el desarrollo de su vida laboral.

Otra de las características del esquema propuesto es la habilitación al empleador para contratar un seguro aplicable a otros sistemas de responsabilidad que puedan ser invocados por los trabajadores damnificados.

Se prescribe, en otro orden, un ajuste general de los importes por incapacidad laboral previstos en las normas de reparación, de acuerdo a la variación del índice RIPTÉ (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Respecto al ordenamiento de la gestión, se contempla la aplicación de nuevos indicadores para conformar el sistema de alcúotas, atendiendo al nivel de riesgo según categorías de cumplimiento de las normas de higiene y seguridad, a la prohibición de esquemas de bonificaciones y/o alcúotas por fuera del nivel de riesgo definido y a la prohibición de discriminación directa o indirecta por tamaño de la empresa.

También se regula lo atinente a la presentación y aprobación del plexo de alcúotas, su incorporación al contrato suscrito por el empleador, su modificación y la opción que puede ejercer el interesado por continuar con su afiliación a la aseguradora de riesgos del trabajo o cambiar por otra entidad gestora.

La iniciativa contiene la posible fijación de indicadores que permitan establecer alcúotas básicas y componentes vinculados a la actividad económica y al mayor riesgo que realice el empleador afiliado, todo vinculado al grado de cumplimiento del mismo, a la normativa sobre salud y seguridad y a sus índices de siniestralidad. A su vez, se contempla la posible fijación de alcúotas uniformes por colectivo cubierto, que sólo reconocerán variaciones según el nivel de riesgo probable y efectivo.

El ordenamiento de la gestión se completa con la regulación de la cobertura de la reparación fundada en otros sistemas de responsabilidad, con el derecho de los empleadores afiliados a recibir de los entes gestores información respecto del sistema de alcúotas y con la limitación en el presupuesto de las aseguradoras de los gastos de administración y otros imputados a conceptos no prestacionales.

Finalmente, en las disposiciones generales se derogán los artículos 19, 24 y 39 de la ley 24.557 y sus modificatorias, y se establece la entrada en vigencia de las distintas normas prestacionales y sus ajustes y actualizaciones.

Asimismo, y en cuanto a la no admisibilidad del pacto de cuotalitis en las indemnizaciones provenientes de accidentes, de trabajo, el proyecto mantiene el criterio limitativo que nuestra legislación en la materia viene sosteniendo desde su inicio (leyes 9.688 y 24.028).

En conclusión, con las reformas que se ponen a consideración de ese Honorable Congreso, el Poder Ejecutivo nacional pretende avanzar en una respuesta legal que supere los factores más controvertidos del sistema presente, con el fin de instalar un régimen reparatorio que brinde prestaciones plenas, accesibles y automáticas, en el marco de especificidad que le es propio.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.

Juan M. Abal Medina. – Carlos A. Tomada.

Mensaje 1.721

El Senado y Cámara de Diputados,...

RÉGIMEN DE ORDENAMIENTO DE LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS DERIVADOS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

CAPÍTULO I

Ordenamiento de la cobertura

Artículo 1º – Las disposiciones sobre reparación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales constituyen un régimen normativo cuyos objetivos son la cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones dinerarias y en especie establecidas para resarcir tales contingencias.

A los fines de la presente, se entiende por régimen de reparación al conjunto integrado por esta ley, por la Ley de Riesgos del Trabajo, 24.557 y sus modificatorias, por el decreto 1.694/09, sus normas complementarias y reglamentarias, y por las que en el futuro las modifiquen o sustituyan.

Art. 2º – La reparación dineraria se destinará a cubrir la disminución parcial o total producida en la aptitud del trabajador damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, así como su necesidad de asistencia continua en caso de Gran Invalidez, o el impacto generado en el entorno familiar a causa de su fallecimiento.

Las prestaciones médico-asistenciales, farmacéuticas y de rehabilitación deberán otorgarse en función de la índole de la lesión o la incapacidad determinada. Dichas prestaciones no podrán ser sustituidas en dinero, con excepción de la obligación del traslado del paciente.

El derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su proceden-

cia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad profesional.

El principio general indemnizatorio es de pago único, sujeto a los ajustes previstos en este régimen.

Art. 3° – Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, el damnificado (trabajador víctima o sus derechohabientes) percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, equivalente al veinte por ciento (20 %) de esa suma.

En caso de muerte o incapacidad total, esta indemnización adicional nunca será inferior a pesos setenta mil (\$ 70.000).

Art. 4° – Los obligados por la ley 24.557 y sus modificatorias al pago de la reparación dineraria deberán, dentro de los quince (15) días de notificados de la muerte del trabajador, o de la homologación o determinación de la incapacidad laboral de la víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, notificar fehacientemente a los damnificados o a sus derechohabientes los importes que les corresponde percibir por aplicación de este régimen, precisando cada concepto en forma separada e indicando que se encuentran a su disposición para el cobro.

Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas en este régimen de reparación o las que les pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. Los distintos sistemas de responsabilidad no serán acumulables.

El principio de cobro de sumas de dinero o la iniciación de una acción judicial en uno u otro sistema implicará que se ha ejercido la opción con plenos efectos sobre el evento dañoso.

Las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad sólo podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente prevista en este artículo.

La prescripción se computará a partir del día siguiente a la fecha de recepción de esa notificación.

En los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil.

Art. 5° – La percepción de las prestaciones en dinero, sea imputable a la sustitución de salarios en etapa de curación (ILT) o sea complementaria por Gran Invalidez, así como la recepción de las prestaciones en especie, no implicarán en ningún caso el ejercicio de la opción excluyente prevista en el artículo precedente.

Art. 6° – Cuando por sentencia judicial, conciliación o transacción se determine la reparación con fundamento en otros sistemas de responsabilidad, la

aseguradora de riesgos del trabajo deberá depositar en el respectivo expediente judicial o administrativo el importe que hubiera correspondido según este régimen, con más los intereses correspondientes, todo lo cual se deducirá, hasta su concurrencia, del capital condenado o transado.

Asimismo, la ART interviniente deberá contribuir en el pago de las costas, en proporción a la parte del monto indemnizatorio que le hubiera correspondido respecto del total del monto declarado en la condena o pactado en la transacción.

Si la sentencia judicial resultare por un importe inferior al que hubiera correspondido abonar por aplicación de este régimen de reparación, el excedente deberá depositarse a la orden del Fondo de Garantía de la ley 24.557 y sus modificatorias.

Art. 7° – El empleador podrá contratar un seguro aplicable a otros sistemas de responsabilidad que puedan ser invocados por los trabajadores damnificados por daños derivados de los riesgos del trabajo, en las condiciones que fije la reglamentación que dicte la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Art. 8° – Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia.

Art. 9° – Para garantizar el trato igual a los damnificados cubiertos por el presente régimen, los organismos administrativos y los tribunales competentes deberán ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos al listado de enfermedades profesionales previsto como anexo I del decreto 658/96 y a la tabla de evaluación de incapacidades prevista como anexo I del decreto 659/96 y sus modificatorios, o los que los sustituyan en el futuro.

CAPÍTULO II

Ordenamiento de la gestión del régimen

Art. 10. – La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) en forma conjunta con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) establecerán los indicadores que las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) habrán de tener en cuenta para establecer su régimen de alcúotas, entre los cuales se considerarán el nivel de riesgo y la siniestralidad presunta y efectiva; con más una suma fija que, por cada trabajador, corresponda integrar al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales.

Entre los citados indicadores se deberá considerar:

- a) El nivel de riesgo se ajustará a categorías que se determinarán de acuerdo al grado de

cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad, y demás parámetros objetivos que la reglamentación establezca;

- b) El rango de alícuotas fijado para cada categoría no podrá superponerse con los rangos de alícuotas establecidos para los restantes niveles;
- c) La prohibición de esquemas de bonificaciones y/o alícuotas por fuera del nivel de riesgo establecido;
- d) La prohibición de discriminación directa o indirecta basada en el tamaño de empresa;

La determinación de la base imponible se efectuará sobre el monto total de las remuneraciones y conceptos no remunerativos que declare mensualmente el empleador.

Art. 11. – El sistema de alícuotas deberá estar sujeto a lo normado por el artículo 26 de la ley 20.091, sus modificatorias, y disposiciones reglamentarias, y será aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Si transcurridos treinta (30) días corridos de la presentación efectuada por la aseguradora de riesgos del trabajo (ART) el organismo de control no hubiera notificado objeción o rechazo alguno, el régimen se considerará aprobado.

Una vez transcurrido un (1) año desde la incorporación de la alícuota al contrato del empleador, la aseguradora de riesgos del trabajo (ART) podrá modificarla dentro del régimen de alícuotas aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y previo aviso de manera fehaciente con sesenta (60) días de anticipación al empleador. En este supuesto, el empleador podrá optar por continuar con el contrato de afiliación y la nueva alícuota o cambiar de aseguradora de riesgos del trabajo (ART). Cuando el empleador tuviera la obligación legal de ajustarse a un sistema de contrataciones por licitaciones públicas, dicho plazo se extenderá a seis (6) meses.

Art. 12. – A los fines de una adecuada relación entre el valor de la cuota y la siniestralidad del empleador, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) pondrá a disposición de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) toda la información sobre siniestralidad registrada en cada uno de los establecimientos de los empleadores incluidos en el ámbito de aplicación del régimen.

Art. 13. – Transcurridos dos (2) años de la vigencia de la presente, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), en forma conjunta con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), podrán establecer nuevos indicadores para la fijación del sistema de alícuotas por parte de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), orientados a reflejar la vinculación entre las cuotas y la siniestralidad efectiva y presunta, así como los niveles de cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad.

Podrán considerar a tales efectos: alícuotas básicas, un componente de proporcionalidad entre la actividad

económica principal y la de mayor riesgo que realice el empleador afiliado, suplementos o reducciones proporcionalmente relacionados tanto con el nivel de incumplimientos del empleador a la normativa vigente en materia de higiene y seguridad, como con los índices de siniestralidad.

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), en forma conjunta con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), podrán fijar un sistema de alícuotas uniformes por colectivo cubierto, que sólo reconocerá variaciones de acuerdo al nivel de riesgo probable y efectivo.

Art. 14. – Para el supuesto de cobertura de la reparación fundada en otros sistemas de responsabilidad, por lo que exceda de lo cubierto en el presente régimen, deberán establecerse separadamente las primas para hacer frente a la misma, conforme a las normas que rigen en la materia, fijadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

Art. 15. – Los empleadores tendrán derecho a recibir de la aseguradora de riesgos del trabajo (ART) a la que se encuentren afiliados, información respecto del sistema de alícuotas, de las prestaciones y demás acciones que este régimen pone a cargo de aquélla.

Art. 16. – Las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) deberán limitar su presupuesto en gastos de administración y otros gastos no prestacionales al porcentaje que establezcan conjuntamente la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), el que no podrá superar el veinte por ciento (20 %) de los ingresos que les correspondan para ese seguro. Dentro de ese importe, podrán asignar a gastos de comercialización o intermediación en la venta del seguro hasta el cinco por ciento (5 %) del total.

CAPÍTULO III

Disposiciones generales

Art. 17. –

1. Deróganse los artículos 19, 24 y 39 de la ley 24.557 y sus modificatorias. Las prestaciones indemnizatorias dinerarias de renta periódica, previstas en la citada norma, quedan transformadas en prestaciones indemnizatorias dinerarias de pago único, con excepción de las prestaciones en ejecución.
2. A los efectos de las acciones judiciales previstas en el artículo 4º, último párrafo, de la presente ley, será competente en la Capital Federal la justicia nacional en lo civil.

Invítase a las provincias para que determinen la competencia de esta materia conforme el criterio establecido precedentemente.

3. En las acciones judiciales previstas en el artículo 4º, último párrafo, de la presente ley, resultará de aplicación lo dispuesto por el artículo 277 de la ley 20.744. Asimismo, se deberá considerar

como monto del proceso a todos los efectos de regulaciones de honorarios e imposición de costas, la diferencia entre el capital de condena y aquel que hubiera percibido el trabajador –tanto en dinero como en especie– como consecuencia del régimen de reparación contenido en esta ley, no siendo admisible el pacto de cuotálitis.

4. A los fines del depósito contemplado en el artículo 6º, primer párrafo, de la presente ley, en sede judicial se aplicarán los intereses a la tasa dispuesta en la sentencia desde la exigibilidad de cada crédito. En sede administrativa, el depósito se hará en un fondo especial administrado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, aplicándose los intereses a la tasa prevista para la actualización de créditos laborales.
5. Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha.
6. Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1.694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1º de enero del año 2010.

La actualización general prevista en el artículo 8º de esta ley se efectuará en los mismos plazos que la dispuesta para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) por el artículo 32 de la ley 24.241, modificado por su similar 26.417.

7. Las disposiciones atinentes al importe y actualización de las prestaciones adicionales por Gran Invalidez entrarán en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente, con independencia de la fecha de determinación de esa condición.

Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.

Juan M. Abal Medina. – Carlos A. Tomada.

Anexo al Orden del Día N° 1.041

Dictamen de comisión

(en minoría)

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha considerado el expediente P.E.-155/12 sobre régimen

de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Por los fundamentos que adjunto y los que brindaré como miembro informante aconsejo la aprobación de otro proyecto de ley.

El Senado y Cámara de Diputados,...

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y REPARACIÓN DE DAÑOS E INCAPACIDADES DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES

Artículo 1º – *Objeto y finalidad de la ley.* La presente ley tiene por objeto garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo y la reparación de los daños e incapacidades ocasionados por accidentes del trabajo y enfermedades laborales, incluyendo la rehabilitación y recalificación laboral de los trabajadores damnificados.

A ese respecto, esta ley establece los siguientes principios generales de prevención de los riesgos laborales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en la prevención en los términos legalmente establecidos, así como también la automaticidad, calidad, eficacia y universalidad de las prestaciones.

Para el cumplimiento de estas finalidades, la presente ley regula las actuaciones a desarrollar por la autoridad administrativa del trabajo, así como por los trabajadores, los empleadores y sus respectivas organizaciones representativas.

Art. 2º – *Carácter de la ley.* Las normas de carácter laboral dispuestas en esta ley y en su reglamentación son de orden público, pudiendo ser complementadas en beneficio del trabajador por otras normas legales o convencionales que, en conjunto, constituyen la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

Todas ellas serán interpretadas en armonía con cualquier otra norma que adopte medidas preventivas en el ámbito laboral o cuya aplicación en dicho ámbito pueda producirlas.

Art. 3º – *Ámbito de aplicación.* Esta ley y sus normas reglamentarias y complementarias se aplicarán a las relaciones reguladas por el derecho laboral, quedando incluidos los trabajadores de las administraciones públicas nacional, provincial o municipal cualquiera que sea su régimen de contratación o revista, los trabajadores rurales, los trabajadores del servicio doméstico y quienes presten cualquier forma de trabajo en establecimientos penitenciarios en régimen de privación de la libertad.

Se aplicará del mismo modo a las relaciones alcanzadas por el Sistema de Pasantías Educativas regidas

por la ley 25.165 y demás normas complementarias, becarios, aprendices, trabajadores autónomos, trabajadores voluntarios, personas obligadas a la prestación de servicios de carga pública y a toda persona que preste un servicio laboral y que como contraprestación reciba retribución monetaria y/o en especie.

Igualmente, se aplicará a las sociedades, asociaciones y cooperativas, constituidas de acuerdo con la legislación que les sea de aplicación, en las que existan socios o asociados cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal, con las particularidades derivadas de su normativa específica.

La presente ley no será de aplicación a los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad. No obstante ello, esta ley inspirará las normas especiales que las autoridades competentes en materia laboral dicten para regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las mencionadas actividades.

Art. 4º – *Definiciones.* A los efectos de la presente ley y de las normas que la complementen:

1. Se entenderá por “prevención”, el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
2. Se entenderá como “riesgo laboral”, la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la severidad del daño sufrido y la probabilidad de que este se produzca.
3. Se entenderán como “daños derivados del trabajo”, las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo o en ocasión del trabajo.
4. Se entenderá como “riesgo laboral grave e inminente”, aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño para la salud de los trabajadores. En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños para la salud, aun cuando estos no se manifiesten de forma inmediata.
5. Se entenderán como “procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente peligrosos”, aquellos que en ausencia de medidas preventivas específicas originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan.
6. Se entenderá como “condición y medio ambiente de trabajo” cualquier característica

material o inmaterial de la actividad laboral, sus procesos y organización y su entorno que pueda tener una influencia significativa en el trabajador o en la trabajadora, en su salud y seguridad, sea esta negativa o positiva. Quedan específicamente incluidas en esta definición:

- 6.1. Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el establecimiento laboral o en la explotación.
- 6.2. La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.
- 6.3. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la generación de los riesgos mencionados.
- 6.4. Todas aquellas otras características del trabajo que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador.
- 6.5. Los factores psicosociales establecidos en el artículo 26 de la presente.
7. Se entenderá por “equipo de protección individual”, cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
8. Se entenderá por “programa nacional de seguridad y salud laboral” el de duración determinada que incluya objetivos, prioridades y medios de acción predeterminados en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo.
9. Se entenderá por “sistema nacional de seguridad y salud laboral”, la infraestructura nacional en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo que constituye el marco principal para la aplicación de los programas nacionales de seguridad y salud laboral.
10. Se entenderá por “sensibilización”, el fomento de una cultura de la seguridad y toda acción formativa e informativa dirigida al público respecto de la seguridad y salud en el trabajo a través de campañas nacionales y el fomento de una cultura de la seguridad que integre los conceptos de peligro, riesgo y prevención en los programas de educación básica y formación profesional.

Art. 5º – *Objetivos de la política preventiva.* La política preventiva tendrá por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud en el

trabajo y la participación de estos en la elaboración de los planes y procesos preventivos.

Dicha política se llevará a cabo por medio de las normas reglamentarias y de las actuaciones administrativas que correspondan y, en particular, las que se regulan en este capítulo, que se orientarán a la coordinación de las distintas autoridades públicas competentes en materia preventiva y a la armonización de las actuaciones que conforme a esta ley correspondan a los empleadores públicos y privados frente a dichas autoridades.

Las autoridades administrativas de los niveles nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales se prestarán cooperación y asistencia para el eficaz ejercicio de sus respectivas competencias con el alcance de lo previsto en este artículo.

La elaboración de la política preventiva se llevará a cabo con la participación de los empresarios y de los trabajadores a través de sus organizaciones empresariales y gremiales.

En relación a potenciales o posibles enfermedades o accidentes, las actividades de prevención se implementarán atendiendo especialmente tres niveles de actuación: a) En un primer nivel, las acciones preventivas deberán estar dirigidas a la evitación del daño y a la protección integral de la salud del trabajador; b) Si se ha producido un accidente de trabajo o enfermedad laboral, deberá procurarse evitar el agravamiento de las afecciones a la salud del trabajador que estos hayan causado; c) En el caso de secuelas en la salud o pérdida de capacidad laborativa del trabajador, las acciones deberán estar orientadas a la evitación del agravamiento del daño a la salud o la disminución de las capacidades residuales y la recalificación laboral.

A los fines previstos en el presente, las autoridades públicas de todos los niveles promoverán la mejora de la educación preventiva en los diferentes niveles, modalidades y especialidades de la enseñanza, y de manera especial en la oferta académica de formación de recursos humanos necesarios para la prevención de los riesgos laborales. Se propenderá a la transversalidad curricular de la cultura preventiva.

El Poder Ejecutivo nacional (PEN) a través de la máxima autoridad con competencia en prevención de los riesgos del trabajo establecerá una colaboración permanente con las restantes jurisdicciones políticas. La autoridad nacional competente deberá coordinar con las autoridades en materia educativa, de salud, de industria, de ciencia y tecnología y de defensa del consumidor con el propósito de establecer la formación y especialización idónea así como la revisión permanente de los objetivos educativos establecidos para adaptarlos a las necesidades existentes en cada momento.

Del mismo modo, las autoridades públicas fomentarán aquellas actividades desarrolladas por los empleadores públicos y privados para mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la reducción de los riesgos laborales, la investigación o el fomento de nuevas formas de protección y la promoción de

estructuras eficaces de prevención. Para ello podrán adoptar programas específicos dirigidos a promover la mejora del ambiente de trabajo y el perfeccionamiento de los niveles de protección. Los programas podrán instrumentarse a través de la concesión de incentivos orientados especialmente a las pequeñas y medianas empresas y a las asociaciones mutuales que desarrollen para las empresas a ellas asociadas las funciones correspondientes a los servicios de prevención previstos en esta ley.

Art. 6º – *Materias sujetas a reglamentación.* El Poder Ejecutivo nacional, previa consulta a las organizaciones gremiales empresariales, regulará las materias que a continuación se detallan:

- 1) Requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.
- 2) Limitaciones o prohibiciones que afectarán a las operaciones, los procesos o las exposiciones laborales a agentes físicos, químicos o biológicos que entrañen riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Específicamente, podrá establecerse el sometimiento de estos procesos u operaciones a procedimiento de control administrativo y prohibirse el empleo de los agentes peligrosos.
- 3) Condiciones o requisitos especiales para cualquiera de los supuestos contemplados en el apartado anterior tales como la existencia de una formación previa o la elaboración de un plan en el que se contengan las medidas preventivas a adoptar.
- 4) Procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores, normalización de metodologías y guías de actuación preventiva.
- 5) Modalidades de organización, funcionamiento y control de los servicios de prevención, considerando las peculiaridades de las pequeñas y medianas empresas con el fin de evitar obstáculos innecesarios para su creación y desarrollo, así como capacidades y aptitudes que deben reunir los mencionados servicios y los trabajadores designados para desarrollar la acción preventiva.
- 6) Condiciones de trabajo o medidas preventivas específicas en trabajos especialmente peligrosos, en particular si para ellos están previstos controles médicos especiales o cuando se presenten riesgos derivados de determinadas características o situaciones especiales de los trabajadores.
- 7) Procedimiento de calificación de las enfermedades profesionales, así como requisitos y procedimientos para la comunicación e información a la autoridad competente de los daños derivados del trabajo.

La reglamentación de las materias comprendidas en la presente se ajustará a los principios de política preventiva establecidos en esta ley, mantendrá la debida coordinación con la normativa sanitaria de higiene y seguridad industrial y de defensa del consumidor y será objeto de evaluación y, en su caso, de revisión periódica, de acuerdo con la experiencia en su aplicación y el progreso de la técnica.

Art. 7º – *Actuaciones administrativas de las autoridades competentes en materia laboral.* En cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, las autoridades competentes en materia laboral de cada jurisdicción desarrollarán funciones de promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento por los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, en el marco previsto por la ley 25.212, Pacto Federal del Trabajo, en los siguientes términos:

- 1) Promover la prevención y el asesoramiento a desarrollar por los órganos técnicos en materia preventiva, incluidas la asistencia y cooperación técnica, la información, divulgación, formación e investigación en materia preventiva, así como el seguimiento de las actuaciones preventivas que se realicen en las empresas para la consecución de los objetivos previstos en esta ley.
- 2) Velar por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales mediante las actuaciones de vigilancia y control. A estos efectos, prestarán el asesoramiento y la asistencia técnica necesarios para el mejor cumplimiento de dicha normativa y desarrollarán programas específicos dirigidos a lograr una mayor eficacia en el control.
- 3) Sancionar el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 y concordantes de la misma.

Art. 8º – *Oficina Nacional de Seguridad y Salud Laboral.* Créase la Oficina Nacional de Seguridad y Salud Laboral (ONSySL), como entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo así como la promoción y apoyo al mejoramiento, la vigilancia y el control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales y sobre higiene y seguridad en el trabajo, pudiendo dictar las disposiciones complementarias que resulten de delegaciones de esta ley o de los decretos reglamentarios.

Es facultad de la ONSySL dictar su reglamento interno, administrar su patrimonio, determinar su estructura organizativa y su régimen interno de gestión de recursos humanos.

En cumplimiento de su misión, tendrá las siguientes funciones:

1) Actividades científico-técnicas:

- a) Elaborará el plan nacional y programas específicos de acuerdo a las directivas que se establecen en el presente.

Administrar por sí el Registro Nacional de Incapacidades Laborales en el cual se registrarán los datos identificatorios del siniestro, la empresa en la que ocurrió, época del infortunio, prestaciones abonadas, incapacidades reclamadas y además, deberá elaborar los índices de siniestralidad por empleador y por actividad. Asimismo llevará el registro de enfermedades laborales y desarrollará los estudios estadísticos sobre epidemiología laboral. Podrá incluirse además en dicho registro todo otro dato que resulte de interés a los efectos de la estadística sin que puedan ser objeto del registro, en ningún caso, los datos identificatorios del trabajador. Esta información estará disponible para todo aquel que la solicite, pudiendo exigirse como único requisito el pago de un arancel que compense a la ONSySL los costos que genere el suministro de los datos solicitados. Quedarán exceptuados del pago de dicho arancel el trabajador y sus derechohabientes;

- b) Fomentar la cultura de la seguridad mediante la sensibilización de la sociedad;
- c) Asesorar en los aspectos técnicos para la elaboración de la normativa legal, el desarrollo de la normalización y el programa nacional de seguridad y salud laboral, tanto en el ámbito nacional como internacional;
- d) Promover y, en su caso, realizar actividades de formación, información, investigación, estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales, con la adecuada coordinación y colaboración, en su caso, con los organismos de las jurisdicciones locales en el ejercicio de sus funciones en esta materia;
- e) Apoyar en los aspectos técnicos y colaborar con las actividades de vigilancia y control llevadas a cabo por las jurisdicciones locales;
- f) Colaborar con organismos internacionales y desarrollar programas de cooperación internacional en este ámbito, facilitando la participación de las jurisdicciones locales;
- g) Velar por la coordinación y apoyar el intercambio de información y las experiencias entre las jurisdicciones locales; fomentar y

prestar apoyo a la realización de actividades de promoción de la seguridad y de la salud en las jurisdicciones locales; prestar apoyo técnico en materia de certificación, ensayo y acreditación;

h) En relación con las organizaciones regionales e internacionales, actuar como centro de referencia nacional, garantizando la coordinación y transmisión de la información que deberá facilitar a escala nacional, en particular conformando redes de trabajo;

i) Cualesquiera otras que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y le sean encomendadas en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral regulada en el artículo 12 de esta ley, con la colaboración, en su caso, de los organismos de las jurisdicciones locales con competencias en la materia.

2) Actividades de vigilancia y control:

a) Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre higiene y seguridad en el trabajo y sobre prevención de riesgos laborales, así como toda norma jurídica y técnica que incida en las condiciones de trabajo en materia de prevención, aunque no tuviera la calificación directa de normativa laboral, proponiendo a la autoridad laboral competente la sanción correspondiente, cuando comprobase una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 y concordantes de la presente ley;

b) Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada;

c) Elaborar los informes solicitados por el fuero competente, en especial, en procesos judiciales por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;

d) Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, muy graves o graves, y sobre aquellos otros en que, por sus características o por los sujetos afectados, se considere necesario dicho informe, así como sobre las enfermedades profesionales en las que concurran dichas calificaciones y, en general, en los supuestos en que aquella lo solicite respecto del cumplimiento de la normativa legal en materia de prevención de riesgos laborales;

e) Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de prevención establecidos en la presente ley;

f) Solicitar la interrupción inmediata de trabajos cuando, a juicio del inspector laboral, se advierta la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores.

3) *Actividades ejecutivas y de apoyo técnico-administrativo.* La Oficina Nacional de Seguridad y Salud Laboral ejercerá la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral prestándole la asistencia científica, técnica y administrativa para el desarrollo de sus competencias.

Las autoridades de las jurisdicciones locales adoptarán, en sus respectivos ámbitos de competencia, las medidas necesarias para garantizar la colaboración pericial y el asesoramiento técnico necesarios a la ONSySL. También elaborarán y coordinarán planes de actuación, en sus respectivos ámbitos competenciales y territoriales, para contribuir al desarrollo de las actuaciones preventivas en las empresas, especialmente, las medianas y pequeñas y las de sectores de actividad con mayor nivel de riesgo o de siniestralidad, a través de acciones de asesoramiento, de información, de formación y de asistencia técnica.

En el ejercicio de tales cometidos, los funcionarios públicos nacionales y de las jurisdicciones locales que ejerzan labores técnicas en materia de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo anterior, podrán desempeñar funciones de asesoramiento, información y comprobatorias de las condiciones de seguridad y salud en las empresas, establecimiento de trabajo o explotaciones, con capacidad de intimar y requerir la subsanación de las deficiencias observadas, en la forma que se determine reglamentariamente.

Las referidas actuaciones comprobatorias se programarán e implementarán cubriendo todo el territorio nacional, con el apoyo de las comisiones regionales de seguridad y salud laboral locales, con las que la ONSySL deberá actuar en forma concertada en sus respectivas jurisdicciones. Esta programación integrará el plan de acción en Seguridad y Salud Laboral de la ONSySL.

Cuando de las actuaciones de comprobación a que se refiere el párrafo anterior se deduzca la existencia de una infracción, se intimará a la subsanación de la falta. Si el infractor persistiere en el incumplimiento, el funcionario actuante remitirá informe a la ONSySL, en el que se recogerán los hechos comprobados, a efectos

de que se levante la correspondiente acta de infracción, si así procediera.

A estos efectos, los hechos relativos a las actuaciones de comprobación de las condiciones materiales o técnicas de seguridad y salud recogidos en tales informes harán fe en sede administrativa o judicial mientras no se pruebe lo contrario de conformidad con el artículo 2º de la ley 18.695.

Art. 9º – *Actuaciones administrativas de las autoridades competentes en materia sanitaria.* En cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, las autoridades competentes en materia sanitaria de cada jurisdicción desarrollarán funciones de promoción de la prevención de la salud laboral, en los siguientes términos:

- 1) Organizar el sistema de atención de la salud del trabajador en niveles ascendentes de complejidad. A tal efecto, se propiciará, en un primer nivel, la incorporación al sistema público de salud y a las obras sociales u otro agente del Sistema Nacional del Seguro de Salud comprendido en las disposiciones de la ley 23.661, de médicos generalistas o clínicos con capacitación básica para sospechar enfermedades o accidentes relacionados a la actividad laboral del paciente; asimismo, se propiciará la conformación de un segundo nivel de atención con médicos especializados en salud del trabajador y con profesionales de higiene y seguridad laboral. Estos actuarán ante la notificación o mera sospecha profesional de posible daño a la salud ocupacional, y deberán evaluar in situ el ambiente laboral, elevando todas las actuaciones realizadas ante la Oficina Nacional de Salud y Seguridad Laboral y las autoridades del trabajo de su jurisdicción. Para ello, se requerirá la presencia de un especialista en evaluación del ambiente psicosocial del trabajador.
- 2) Establecer medios adecuados para la evaluación y control de las actuaciones de carácter sanitario que se realicen en las empresas por los servicios de prevención actuantes. Para ello, establecerán las pautas y protocolos de actuación, previa consulta a las asociaciones científicas o académicas con incumbencia en la materia, a las que deberán someterse los citados servicios.
- 3) Incorporar los daños laborales a la salud dentro del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública Nacional vigente, para estudiar sistemáticamente la magnitud del impacto y su tendencia. Implantar sistemas de información adecuados que permitan la elaboración, junto con las autoridades laborales competentes, de mapas de riesgo laboral, así como la realización de estudios epidemiológicos para la iden-

tificación y prevención de las patologías que puedan afectar a la salud de los trabajadores, así como hacer posible un rápido intercambio de información.

- 4) Supervisar la formación que, en materia de prevención y promoción de la salud laboral, deba recibir el personal sanitario actuante en los servicios de prevención autorizados.
- 5) Elaborar y divulgar estudios, estadísticas e informes sobre salud y accidentes en el trabajo.

Art. 10. – *Coordinación administrativa.* La elaboración de las normas preventivas y el control de su cumplimiento, la promoción de la prevención, la investigación y la vigilancia epidemiológica sobre riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, determinan la necesidad de coordinar las actuaciones de las autoridades competentes de las jurisdicciones locales en materia laboral, sanitaria, de industria y de defensa del consumidor.

Para ello, la Oficina Nacional de Seguridad y Salud Laboral se encargará de poner en conocimiento de las autoridades sanitarias, de industria y de defensa del consumidor la información obtenida en el ejercicio de sus funciones.

Art. 11. – *Participación de trabajadores y empresarios.* La participación de trabajadores y empresarios, a través de las organizaciones gremiales y empresariales, en la planificación, programación, organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y salud laboral, es un principio básico de la política de prevención de riesgos laborales a desarrollar por las autoridades competentes en cada jurisdicción local.

Art. 12. – *Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral.* Créase la Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral, órgano asesor en materia de políticas de prevención de riesgos laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, de las administraciones del trabajo de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral estará integrada por representantes de cada región en que se divida el territorio nacional, quienes serán designados rotativamente por las jurisdicciones locales comprendidas y por igual número de miembros de la jurisdicción nacional y, en composición paritaria y colegiada con todos los anteriores, por representantes de las centrales sindicales y cámaras empresariales.

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral conocerá las actuaciones que desarrolle la ONSySL y podrá informar y formular propuestas en relación con dichas actuaciones, específicamente en lo referente a:

- 1) Criterios y programas generales de actuación.
- 2) Proyectos de normas reglamentarias o complementarias.

- 3) Coordinación de las actuaciones desarrolladas por las autoridades competentes en materia laboral, y entre estas y las autoridades competentes en materia sanitaria, de industria y de defensa del consumidor.
- 4) Toda acción conducente al establecimiento y desarrollo de un sistema nacional de seguridad y salud laboral.

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral adoptará los acuerdos por mayoría. A tal fin, corresponderá un (1) voto a cada uno de los representantes de las autoridades y, por su parte, tendrá dos (2) cada uno de los respectivos representantes de las organizaciones sindicales o empresariales.

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral contará con un (1) presidente y cuatro (4) vicepresidentes, uno por cada grupo que la integre. La presidencia de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral y la vicepresidencia que corresponde al estamento de autoridades nacionales, corresponderán a los funcionarios que el PEN designe del organismo con máxima competencia en materia laboral y sanitaria, ambos cargos de rango no inferior al de subsecretario.

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral funcionará en pleno, en comisión permanente o en grupos de trabajo, conforme al reglamento interno que elaborará ese cuerpo paritario. En lo no previsto en la presente ley y en el reglamento interno, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral aplicará supletoriamente el Estatuto del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Art. 13. – *Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.* Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud laboral, lo que presupone la existencia de un correlativo deber del empresario o empleador de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Ese deber de protección constituye, igualmente, un deber de las autoridades públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, interrupción de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud laboral.

En cumplimiento del deber de protección, el empleador deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A tales efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empleador realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa o explotación y la adopción de las siguientes medidas:

- 1) Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva.
- 2) Adecuación y adaptación de los equipos de trabajo y medios de protección.
- 3) Información, consulta, participación y formación de los trabajadores.
- 4) Actuación en casos de emergencia o de riesgo grave e inminente.
- 5) Vigilancia de la salud.
- 6) Constitución de un servicio de prevención procurando su organización y los medios necesarios para su correcto funcionamiento, en alguna de las modalidades previstas en esta ley.
- 7) Todas aquellas que sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.

El empleador desarrollará una actividad permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y de los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior, relativas a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.

El empleador deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales y reparación de daños derivados del trabajo.

Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta ley, la atribución de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa, la asociación a una mutual o la contratación de una entidad sin fines de lucro especializada para el desarrollo de actividades de prevención, complementarán las acciones del empleador sin que por ello lo eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que puedan ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.

El costo de las medidas relativas a la seguridad y la salud laboral no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.

Art. 14. – *Principios de la acción preventiva.* El empleador aplicará las medidas que integran el deber de prevención previsto en el artículo anterior observando los siguientes principios generales:

- 1) Evitar los riesgos laborales.
- 2) Evaluar los riesgos laborales que no se puedan evitar.
- 3) Combatir los riesgos laborales en su origen.
- 4) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción con miras, en particular, a atenuar el trabajo

monótono y repetitivo y a reducir los efectos perjudiciales sobre la salud.

- 5) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
- 6) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
- 7) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
- 8) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
- 9) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

El empleador tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

El empleador adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave o específico.

La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudieran cometer los trabajadores. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.

Art. 15. – Plan de prevención y evaluación de riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en el de todos sus niveles jerárquicos, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente.

Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases y de forma programada, son los siguientes:

- a) La evaluación de riesgos laborales: el empleador deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad y las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban ocuparlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión

de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empleador realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios para detectar situaciones potencialmente peligrosas;

- b) La planificación de la actividad preventiva: si los resultados de la evaluación prevista en el inciso a) pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empleador realizará aquellas actividades preventivas necesarias, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. El empleador deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo. Las actividades preventivas deberán ser modificadas cuando el empleador aprecie, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el inciso a), su inadecuación a los fines de protección requeridos.

Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores y cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empleador llevará a cabo una investigación al respecto para detectar las causas de estos hechos.

Art. 16. – Principio de tendencia al riesgo laboral cero. En la elaboración del plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva, deberá observarse el principio de tendencia al riesgo laboral cero, el que debe observar las siguientes pautas relacionadas a la organización del proceso productivo.

- a) Tanto el plan de prevención de riesgos laborales, así como también la evaluación de los riesgos y la planificación de la actividad preventiva, no partirán en ningún caso de considerar un proceso productivo establecido, sino que los mismos deberán partir de una revisión crítica de dicho proceso;

- b) Cuando se haya identificado una acción inversora, de mejora o modificación del proceso productivo de la empresa u organismo de que se trate y que contribuya a disminuir el riesgo laboral, esta acción debe ser realizada por el empleador, y con prioridad con relación a otras inversiones;
- c) Si ante la consulta del empleador, o por su propia iniciativa, los trabajadores formulan una propuesta de adecuación del proceso productivo que contribuya a disminuir el riesgo laboral, ésta deberá ser puesta en consideración inmediatamente por el empleador, salvo que éste demuestre fehacientemente que el riesgo no disminuye con su implementación.

Art. 17. – *Adecuación y adaptación de los equipos de trabajo y medios de protección.* El empleador adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos.

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empleador adoptará las medidas necesarias para que:

- a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización;
- b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.

El empleador deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de ellos cuando por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

Art. 18. – *Información, consulta y participación de los trabajadores.* A fin de dar cumplimiento al deber de prevención establecido por la presente ley, el empleador adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con lo siguiente:

- a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;
- b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el inciso anterior;

- c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la presente ley.

En las empresas que cuenten con “delegados de prevención”, la información a que se refiere el presente artículo será facilitada por el empleador a los trabajadores a través de dichos representantes; sin perjuicio de lo cual, el empleador deberá asegurar el acceso de todo trabajador a la información relativa a los riesgos específicos que afecten a su respectivo puesto de trabajo o función y de las medidas de prevención y protección aplicables a dichos riesgos.

El empleador deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 a 45 de esta ley.

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empleador, así como a los órganos de participación y representación previstos en esta ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa.

Art. 19. – *Formación de los trabajadores.* En cumplimiento del deber de protección, el empresario principal y el titular del establecimiento o explotación deberán garantizar solidariamente que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan modificaciones en las funciones que desempeña o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.

La formación a que se refiere el párrafo anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo. Si esto no resultare posible por las características de la producción o por circunstancias propias del curso que se dicte, dicha capacitación podrá impartirse fuera del horario de trabajo, en cuyo caso se deberá efectuar la correspondiente compensación de horas laborales dentro de la misma semana, o en la subsiguiente si la respectiva clase hubiera sido dictada en el último día laborable de la misma.

La formación se podrá impartir en forma directa por el empleador o a través de terceras instituciones contratadas al efecto y a su costa.

Art. 20. – *Medidas frente a emergencias.* El empleador, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a ella, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para

ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empleador deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de aquellas.

Art. 21. – *Medidas frente a riesgo grave e inminente.* Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empleador estará obligado a:

- a) Informar en forma urgente e idónea a todos los trabajadores sobre la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deberán adoptarse a los efectos de una eficaz prevención y protección;
- b) Adoptar las medidas e impartir las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave e inminente los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo en condiciones de seguridad;
- c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad o la de otros trabajadores o terceros, se encuentre en condiciones de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro, teniendo en consideración sus conocimientos y los medios técnicos que se encuentren a su disposición.

De acuerdo con lo previsto en el primer párrafo del artículo 13 de la presente ley, el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud.

Cuando según el caso a que se refiere el párrafo primero de este artículo, el empleador no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los delegados de prevención, por acuerdo mayoritario, podrán determinar la interrupción de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato al empleador y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro (24) horas, anulará o ratificará la interrupción acordada.

Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las

medidas a que se refieren los párrafos anteriores, a menos que hubieran obrado con dolo o negligencia grave.

Art. 22. – *Vigilancia de la salud.* El empleador garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, previo consentimiento de los mismos.

Se considerarán excepciones al carácter voluntario, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sean imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para sí mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o la explotación, o cuando así estuviere establecido en una norma legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. En todo caso, se deberá optar por la realización de aquellos exámenes que causen las menores molestias al trabajador y que sean imprescindibles con relación al riesgo en cuestión.

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.

Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a los trabajadores afectados.

Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. El acceso a la información médica de carácter personal se limitará a los profesionales médicos y paramédicos y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empleador o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.

No obstante lo anterior, el empleador y las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención, serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados con relación a la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, para que los responsables puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva.

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que reglamentariamente se determinen.

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación e idoneidad acreditada.

Art. 23. – *Documentación.* El empleador deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación relativa a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores:

- a) Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 15 de esta ley;
- b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso a) del segundo párrafo del artículo 15 de esta ley;
- c) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse, de conformidad con el inciso b) del segundo párrafo del artículo 15 de esta ley.

En el momento de cesación de su actividad, las empresas deberán remitir a la autoridad laboral la documentación señalada en el párrafo anterior.

El empleador estará obligado a notificar por escrito a la autoridad de aplicación los daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al procedimiento que se determine en la reglamentación.

La documentación a que se hace referencia en el presente artículo deberá también ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias al objeto de que éstas puedan cumplir con lo dispuesto en el artículo 9º de la presente ley.

Art. 24. – *Coordinación de actividades empresariales.* Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre ellos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el párrafo primero del artículo 18 de esta ley.

El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellas otras empresas que desarrollen actividades en el establecimiento distribuyan la información y las instrucciones adecuadas a sus respectivos empleados, con relación a los riesgos existentes y las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar.

Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo serán solidariamente responsables ante el trabajador o sus derechohabientes por las consecuencias derivadas del incumplimiento

de la normativa sobre salud y prevención de riesgos laborales.

Las obligaciones consignadas en el quinto párrafo del artículo 46 de esta ley serán también de aplicación respecto de las obras u operaciones contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no presten servicios en establecimientos de la empresa principal, siempre que tales trabajadores deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por la empresa principal.

Los deberes de cooperación y de información e instrucción establecidos en los dos primeros párrafos de este artículo serán de aplicación respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo.

Art. 25. – *Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.* El empleador garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias.

Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que –a causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida–, puedan ellos mismos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa, ponerse en situación de peligro: o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.

Igualmente, el empleador deberá tener en cuenta en las evaluaciones de los factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias.

Art. 26. – *Riesgos psicosociales.* Se entenderá por riesgos psicosociales a los riesgos laborales derivados de las interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo y de las condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades de los trabajadores, por otra.

Se entenderá por factores de riesgos psicosociales a las condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación muestran efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo.

Se entenderá por factor protector psicosocial a las condiciones de trabajo que promueven la salud y el bienestar del trabajador.

La obligación del empleador de evaluar los riesgos laborales comprende la evaluación de los riesgos psicolaborales.

Es obligación de los empleadores adoptar las medidas necesarias a los fines de evitar que los riesgos psicosociales causen daños a la salud física o psíquica del trabajador.

Serán consideradas como laborales y por lo tanto comprendidas en el artículo 66 de esta ley, las enfermedades derivadas de factores de riesgos psicosociales.

Art. 27. – *Protección de la maternidad.* La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 15 de la presente ley deberá comprender la determinación de la naturaleza, grado y duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las trabajadoras, el empleador adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la prohibición de realizar trabajo nocturno, insalubre o en turnos rotativos.

Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los cuerpos médicos reglamentariamente habilitados, esta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El empleador deberá determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos. El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto. En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o a categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.

Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato con derecho a remuneración por riesgo

durante el embarazo durante el período necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.

Lo dispuesto en los dos primeros párrafos de este artículo será también de aplicación durante el período de lactancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certificase el médico que reglamentariamente habilitado asista a la trabajadora.

Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empleador y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

Art. 28. – *Protección de los menores.* Antes de la incorporación al trabajo de menores con edad comprendida entre la edad mínima legal para la admisión en el empleo y los dieciocho (18) años, y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por aquéllos, para determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico al respecto, a agentes, procesos o condiciones de trabajo que puedan poner en peligro la seguridad o la salud de estos trabajadores.

A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos para la seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.

En todo caso, el empleador informará a dichos jóvenes y a sus padres o tutores por escrito los posibles riesgos y todas las medidas adoptadas para la protección de su seguridad y salud.

Art. 29. – *Relaciones de trabajo en las modalidades de contrato de trabajo a tiempo parcial, a plazo fijo, de temporada o eventual.* Los trabajadores sujetos a las modalidades de contrato de trabajo a tiempo parcial, a plazo fijo, de temporada o eventual, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios; la existencia de una relación de trabajo de esta naturaleza no justificará en ningún caso una diferencia de trato, por lo que respecta a las condiciones de trabajo, en lo relativo a cualquiera de los aspectos de la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. La presente ley y sus normas reglamentarias y complementarias se aplicarán plenamente a las relaciones de trabajo de esta naturaleza.

El empleador adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con carácter previo al inicio de su actividad, los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior reciban información acerca de los riesgos a los que vayan a estar expuestos, en particular en lo

relativo a la necesidad de calificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controles médicos especiales o la existencia de riesgos específicos del puesto de trabajo a cubrir, así como sobre las medidas de protección y prevención frente a esos riesgos. Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada a las características del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su calificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vayan a estar expuestos.

El empleador deberá informar a los trabajadores designados para ocuparse de las actividades de protección y prevención o, en su caso, al servicio de prevención previsto en el artículo 32 de esta ley, de la incorporación de los trabajadores a que se refiere el presente artículo, en la medida necesaria para que puedan desarrollar de forma adecuada sus funciones respecto de todos los trabajadores de la empresa o la explotación.

Los trabajadores a que se refiere el presente artículo tendrán derecho a una vigilancia periódica de su estado de salud, en los términos establecidos en el artículo 22 de esta ley y en su reglamentación.

En las relaciones de trabajo a través de empresas de servicios eventuales, la empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Corresponderá, además, a la empresa usuaria el cumplimiento de las obligaciones en materia de información previstas en los párrafos segundo y tercero del presente artículo.

La empresa de servicios eventuales será responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de formación y vigilancia de la salud que se establecen en los párrafos segundo y cuarto de este artículo. A tal fin, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la empresa usuaria deberá informar a la empresa de servicios eventuales, y ésta a los trabajadores afectados, antes de su adscripción, acerca de las características propias de los puestos de trabajo a desempeñar y de las calificaciones requeridas.

La empresa usuaria deberá informar a los representantes de sus trabajadores la adscripción de los trabajadores puestos a disposición por la empresa de servicios eventuales. Dichos trabajadores podrán dirigirse a estos representantes en el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente ley.

Art. 30. – Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empleador.

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empleador, deberán, en particular:

- a) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad;
- b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empleador, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste;
- c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar;
- d) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores;
- e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo;
- f) Cooperar con el empleador para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

Art. 31. – Protección y prevención de riesgos profesionales. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empleador constituirá un servicio de prevención, asociándose a una mutual, o contratando dicho servicio con una entidad sin fines de lucro especializada ajena a la empresa o designando uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad.

En el caso de designación de trabajadores de la misma empresa, deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa o explotación, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en ellas, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere el inciso 5 del artículo 6º de la presente ley. Los trabajadores designados colaborarán entre sí y, en su caso, con los servicios de prevención.

Para la realización de la actividad de prevención, el empleador deberá facilitar al servicio de prevención el acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente ley.

Los trabajadores designados deberán guardar secreto profesional sobre la información relativa a la empresa o explotación a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones.

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empleador podrá asumir personalmente las funciones

señaladas en el párrafo primero, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere el inciso 5 del artículo 6º de la presente ley.

El empleador que no se hubiere asociado a una mutual o no hubiere contratado el servicio de prevención con una entidad sin fines de lucro especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa, en los términos que reglamentariamente se determinen.

Art. 32. – *Servicios de prevención.* Si la designación de un servicio de prevención interno fuera insuficiente, en función del tamaño de la empresa o explotación, de los riesgos a que están expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, con el alcance que se establezca en las disposiciones a que se refiere el inciso 5 del artículo 6º de la presente ley, el empleador deberá recurrir a un servicio de prevención externo.

Los servicios de prevención externos, cualquiera que sea su forma asociativa, ejercerán sus funciones a partir de su habilitación por parte de la Oficina Nacional de Salud y Seguridad Laboral, donde constarán en un registro especial, a partir de la verificación del cumplimiento de los requisitos que reglamentariamente se establezcan.

Para el establecimiento de estos servicios en las administraciones públicas se tendrá en cuenta su estructura organizativa y la existencia, en su caso, de ámbitos sectoriales y descentralizados.

Se entenderá como servicio de prevención, el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas y garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empleador, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el empleador deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente ley.

Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:

- a) El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de los riesgos laborales que permita la integración de la prevención en la empresa o explotación;
- b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 15 de esta ley;

- c) La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia;
- d) La información y formación de los trabajadores;
- e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia;
- f) La vigilancia de la salud de los trabajadores con relación a los riesgos derivados del trabajo.

El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes de estos servicios, así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes circunstancias:

- I. Tamaño de la empresa o explotación.
- II. Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.
- III. Distribución de riesgos en la empresa o explotación.

Para poder actuar como servicios de prevención, las asociaciones mutualistas o las entidades sin fines de lucro especializadas deberán ser objeto de acreditación por la autoridad laboral competente, mediante la comprobación de que reúnen los requisitos que se establezcan reglamentariamente y previa aprobación de la autoridad sanitaria competente en cuanto a los aspectos de carácter sanitario.

Art. 33. – *Actuación preventiva de las asociaciones mutualistas.* Las asociaciones mutualistas regidas por la ley 20.321 podrán desarrollar para las empresas a ellas asociadas las funciones correspondientes a los servicios de prevención regulados en este capítulo.

Las autoridades promoverán la constitución de asociaciones mutualistas a estos fines.

Art. 34. – *Presencia de los recursos preventivos.* Se consideran recursos preventivos a los que el empleador podrá asignar la presencia, los siguientes:

- a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa o explotación;
- b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa;
- c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos contratados por la empresa.

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:

- 1) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones

- diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
- 2) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales.
 - 3) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Oficina Nacional de Seguridad y Salud Laboral, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.

Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos, éstos deberán colaborar entre sí. Dichos recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determina su presencia.

No obstante lo dispuesto en este artículo, el empleador podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa o explotación que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la calificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el párrafo segundo y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico. En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos del empleador.

Art. 35. – *Consulta y participación de los trabajadores.* El empleador deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones relativas a:

- a) La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo;
- b) La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo;
- c) La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia;
- d) Los procedimientos de información y documentación a que se refieren los artículos 17, primer párrafo, y 23, párrafo primero, de la presente ley;

- e) El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva;
- f) Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores.

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las consultas a que se refiere el párrafo anterior se llevarán a cabo con dichos representantes.

Art. 36. – *Derechos de participación y representación.* Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo.

Para ejercer tales derechos los empleadores y las autoridades competentes deberán observar y hacer observar los siguientes criterios:

- a) En ningún caso dicho ejercicio podrá afectar a las competencias, facultades y garantías que se reconocen en esta ley a los delegados de prevención y a los comités de prevención de riesgos en el trabajo;
- b) Se deberá establecer el ámbito específico que resulte adecuado en cada caso para el ejercicio de la función de participación en materia preventiva dentro de la estructura organizativa de la administración. Con carácter general, dicho ámbito será el de los órganos de representación del personal al servicio de la administración pública, si bien podrán establecerse otros distintos en función de las características de la actividad y frecuencia de los riesgos a que puedan encontrarse expuestos los trabajadores;
- c) Cuando en el indicado ámbito existan diferentes representaciones gremiales, se deberá garantizar una actuación coordinada de todos ellos en materia de prevención y protección de la seguridad y la salud en el trabajo, posibilitando que la participación se realice de forma conjunta entre unos y otros, en el ámbito específico establecido al efecto.

Art. 37. – *Delegados de prevención.* Los “delegados de prevención” son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo y control de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo.

Los delegados de prevención serán designados por voto directo y secreto de los trabajadores de la empresa, con arreglo a la siguiente escala:

De 10 a 50 trabajadores: 1 delegado de prevención.

De 51 a 100 trabajadores: 2 delegados de prevención.

De 101 a 500 trabajadores: 3 delegados de prevención.

De 501 a 1.000 trabajadores: 4 delegados de prevención.

De 1.001 a 2.000 trabajadores: 5 delegados de prevención.

De 2.001 a 3.000 trabajadores: 6 delegados de prevención.

De 3.001 a 4.000 trabajadores: 7 delegados de prevención.

De 4.001 en adelante: 8 delegados de prevención.

Para ser electo delegado de prevención el trabajador deberá contar con seis (6) meses de antigüedad en el empleo y no se requerirá afiliación sindical.

Cuando en función de la cantidad de trabajadores correspondieren dos o más delegados de prevención, éstos constituirán una comisión unitaria de prevención de riesgos en el trabajo.

Art. 38. – *Duración y revocación del mandato.* El mandato de los delegados será de dos (2) años y podrá ser revocado por decisión mayoritaria de sus mandantes reunidos en asamblea convocada a tales efectos por el veinticinco por ciento (25 %) del total de los representados. El delegado cuestionado deberá tener la posibilidad cierta de ejercitar su defensa.

Art. 39. – *Competencias y facultades de los delegados de prevención.* Son competencias de los delegados de prevención:

- 1) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
- 2) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales y salud y seguridad en el trabajo.
- 3) Ser consultados por el empleador, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 35 de la presente ley.
- 4) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 42 de esta ley, no cuenten con Comité de Prevención de Riesgos en el Trabajo por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente ley serán ejercidas por los delegados de prevención.

En el ejercicio de las competencias atribuidas a los delegados de prevención, éstos estarán facultados para:

- a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 44 de esta ley, a los inspectores laborales o sanitarios facultados por las autoridades competentes en cada materia en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas;

- b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el párrafo quinto del artículo 22 de esta ley, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 del presente régimen. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad;
- c) Ser informados por el empleador sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias que los rodean;
- d) Recibir del empleador las informaciones por él obtenidas procedentes de las personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 de esta ley en materia de colaboración con la ONSySL;
- e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de aquéllos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no altere el normal desarrollo del proceso productivo;
- f) Recabar del empleador la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empleador, así como al Comité de Prevención de Riesgos en el Trabajo para su discusión;
- g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de interrupción de actividades a que se refiere el párrafo tercero del artículo 21;
- h) Denunciar ante la Oficina Nacional de Seguridad y Salud Laboral los incumplimientos en materia de seguridad e higiene en el trabajo;
- i) Denunciar ante la autoridad competente la existencia en el establecimiento de trabajadores precarizados, no registrados o parcialmente registrados, sea que éstos se encuentren en relación directa con el empleador titular del mismo o que se desempeñen bajo el régimen de tercerización o subcontratación. La denuncia realizada y comunicada por el organismo al empleador genera una presunción en favor de la existencia de tales relaciones laborales;
- j) Participar en las negociaciones de convenios de empresa cuando se pacten disposiciones rela-

tivas a la prevención de riesgos y condiciones y medio ambiente de trabajo.

Los informes que deben emitir los delegados de prevención a tenor de lo dispuesto en el numeral 3 del párrafo primero de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince (15) días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empleador podrá poner en práctica su decisión.

La decisión negativa del empleador a la adopción de las medidas propuestas por el delegado de prevención a tenor de lo dispuesto en el literal f) del segundo párrafo de este artículo deberá ser motivada.

Art. 40. – *Garantías y secreto profesional de los delegados de prevención.* Corresponden a los delegados de prevención todas las garantías establecidas en la ley 23.551, y especialmente las establecidas en los capítulos XI, XII y XIII de dicho régimen, en resguardo de la estabilidad en el empleo y la intangibilidad de las condiciones de trabajo de los representantes sindicales.

El tiempo utilizado por los delegados de prevención para el desempeño de las funciones previstas en esta ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación, a efectos de la aplicación del artículo 44, inciso c), de la ley 23.551. No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al mencionado crédito de horas mensuales retribuidas, el correspondiente a las reuniones del Comité de Prevención de Riesgos en el Trabajo y a cualesquiera otras convocadas por el empleador en materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en los literales a) y c) del párrafo segundo del artículo anterior.

El empleador deberá proporcionar a los delegados de prevención los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. La formación se deberá facilitar por el empleador por sus propios medios o mediante contratación con organismos o entidades sin fines de lucro especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario. El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su costo no podrá recaer en ningún caso sobre los delegados de prevención.

El empleador deberá elaborar un programa anual de prevención en materia de salud y seguridad en el trabajo, ponerlo a disposición del Comité de Prevención de Riesgos en el Trabajo y atender opiniones, sugerencias, correcciones, modificaciones o adiciones que el comité proponga, pudiendo el empleador asociar al comité en la elaboración del programa anual.

A los delegados de prevención les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 85 de la ley 20.744 en cuanto a la reserva o secreto de las informaciones a que

tuviesen acceso como consecuencia de su actuación en la empresa.

Art. 41. – *Elección de delegados de prevención en supuestos especiales.* En los centros de trabajo que carezcan de representantes de los trabajadores por no existir trabajadores con la antigüedad suficiente para ser electores o elegibles en las elecciones para representante del personal, los trabajadores podrán elegir por mayoría a un trabajador que ejerza las competencias del delegado de prevención, quien tendrá las facultades, garantías y obligaciones de reserva o secreto de las informaciones a que tuviesen acceso como consecuencia de su actuación en la empresa.

La actuación de éstos cesará en el momento en que se reúnan los requisitos de antigüedad necesarios para poder celebrar la elección de representantes del personal, prorrogándose por el tiempo indispensable para la efectiva celebración de la elección.

Art. 42. – *Comité de Prevención de Riesgos en el Trabajo.* El Comité de Prevención de Riesgos en el Trabajo con carácter autónomo y accesorio del Estado es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica y a la supervisión de las actuaciones de la empresa o explotación en materia de prevención de riesgos.

Se constituirá un comité de prevención de riesgos en el trabajo en todas las empresas, explotaciones o centros de trabajo que cuenten con cincuenta (50) o más trabajadores. El comité estará formado por los delegados de prevención, de una parte, y por el empleador o sus representantes en número igual al de los delegados de prevención, de la otra. En las reuniones del Comité de Prevención de Riesgos en el Trabajo participarán, con voz pero sin voto, los delegados sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa o explotación que cuenten con una especial calificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa o explotación, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el comité.

En empresas con menos de 50 trabajadores la ON-SySL podrá exigir la creación de un comité de prevención de riesgos en el trabajo en razón de los riesgos existentes derivados de la naturaleza o índole de la actividad, de las maquinarias o materias primas que se utilicen, de los productos que se elaboren o fabriquen o del tipo de instalaciones del establecimiento, independientemente del número de trabajadores de la empresa.

El Comité de Prevención de Riesgos en el Trabajo se reunirá de manera ordinaria cuatrimestralmente y en forma extraordinaria siempre que lo solicite alguna de las representaciones que lo integran. Siempre que una empresa comprenda varios establecimientos se constituirá un comité o se designará un delegado de prevención en cada uno de ellos de conformidad al

artículo 37, según corresponda, disponiendo un mecanismo de coordinación entre ellos.

Art. 43. – *Competencias y facultades del Comité de Prevención de Riesgos en el Trabajo.* El Comité de Prevención de Riesgos en el Trabajo tendrá las siguientes competencias:

- a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, de organización del trabajo, de introducción de nuevas tecnologías, de organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención y proyecto y organización de la formación en materia preventiva;
- b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.

En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Prevención de Riesgos en el Trabajo estará facultado para:

- 1) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.
- 2) Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los precedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso.
- 3) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.
- 4) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta ley respecto de la colaboración entre empresas en los supuestos de desarrollo simultáneo de actividades en un mismo centro de trabajo, se podrá acordar la realización de reuniones conjuntas de los comités de Prevención de Riesgos en el Trabajo o, en su defecto, de los delegados de prevención y empleadores cuyas empresas carezcan de dichos comités, u otras medidas de actuación coordinada.

Art. 44. – *Colaboración con la Oficina Nacional de Seguridad y Salud Laboral.* Los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Oficina Nacional de Seguridad y Salud Laboral (ONSySL) si consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empleador no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.

En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, el inspector laboral comunicará su presencia al empleador o a su representante o a la persona inspeccionada, al Comité de Prevención de Riesgos en el Trabajo, al delegado de prevención o, en su ausencia, a los representantes legales de los trabajadores, para que puedan acompañarlo durante el desarrollo de su visita y formularle las observaciones que estimen oportunas, a menos que considere que dichas comunicaciones puedan perjudicar el éxito de sus funciones.

La ONSySL o la autoridad administrativa del trabajo informará a los delegados de prevención sobre los resultados de las visitas a que hace referencia el párrafo anterior y sobre las medidas adoptadas como consecuencia de ellas, así como al empleador mediante diligencia en el libro de visitas habilitado al efecto que debe existir en cada centro de trabajo.

Las organizaciones gremiales y empresariales serán consultadas con carácter previo a la elaboración de los planes de actuación de la ONSySL en materia de prevención de riesgos en el trabajo, en especial de los programas específicos para empresas de menos de seis (6) trabajadores, e informadas del resultado de dichos planes.

Art. 45. – *Incorporación de disposiciones sobre prevención de riesgos y condiciones y medio ambiente de trabajo en la negociación colectiva.* Las convenciones colectivas que se presenten para su homologación o registración ante la autoridad competente deberán obligatoriamente contener cláusulas relativas a la prevención de los riesgos del trabajo. En las negociaciones de convenios de empresa que se establezcan a tal fin, tendrán necesaria participación los delegados de prevención previstos en esta ley.

Art. 46. – *Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores.* Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos.

Los fabricantes, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a envasarlos y etiquetarlos de forma que se permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilización comporten.

Los sujetos mencionados en los dos párrafos anteriores deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven, tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado.

Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores están obligados a asegurar su efectividad, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información que indique el tipo y nivel de protección frente al riesgo al que van dirigidos, y la forma correcta de su uso y mantenimiento.

Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empleadores, y éstos recabar de aquéllos, la información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como para que los empleadores puedan cumplir con sus obligaciones de información respecto de los trabajadores.

El empleador deberá garantizar que las informaciones a que se refiere este artículo sean facilitadas a los trabajadores en términos que resulten comprensibles para ellos.

La Oficina Nacional de Seguridad y Salud Laboral podrá requerir en forma directa la información a la que se refieren los párrafos anteriores a los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo.

Art. 47. – *Responsabilidad administrativa y su compatibilidad.* El incumplimiento por los empleadores de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento.

La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se refiere el párrafo tercero del artículo 24 de esta ley del cumplimiento, durante el período de la contratación, de las obligaciones impuestas por esta ley en relación con los trabajadores que aquéllos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal.

En las relaciones de trabajo a través de empresas de servicios eventuales, la empresa usuaria será responsable de la protección en materia de seguridad y salud de los trabajadores.

Art. 48. – *Intimaciones y requerimientos de las autoridades competentes en materia laboral.* Cuando el inspector laboral compruebe la existencia de una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, requerirá al empleador para la subsanación de las deficiencias observadas, salvo que por la gravedad e inminencia de los riesgos procediese acordar la interrupción prevista en el artículo 49. Todo ello sin perjuicio de la propuesta de sanción correspondiente, en su caso.

El requerimiento formulado por el inspector laboral se hará saber por escrito al empleador presuntamente

responsable señalando las anomalías o deficiencias apreciadas con indicación del plazo para su subsanación. Dicho requerimiento se pondrá, asimismo, en conocimiento de los delegados de prevención.

Si se incumpliera el requerimiento formulado, persistiendo los hechos infractores, el inspector laboral, de no haberlo efectuado inicialmente, levantará la correspondiente acta de infracción por tales hechos.

Art. 49. – *Interrupción de la actividad.* Cuando el inspector laboral compruebe que la inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales implica, a su juicio, un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, podrá ordenar la interrupción inmediata de tales trabajos o tareas. Dicha medida será comunicada a la empresa o explotación responsable, que la pondrá en conocimiento inmediato de los trabajadores afectados, del Comité de Prevención de Riesgos en el Trabajo, del delegado de prevención o, en su ausencia, de los representantes del personal. La empresa o explotación responsable dará cuenta al inspector laboral del cumplimiento de esta notificación.

El inspector laboral dará traslado de su decisión de forma inmediata a la autoridad laboral. La empresa o explotación, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de tal decisión, podrá impugnarla ante la autoridad laboral en el plazo de tres (3) días hábiles, debiendo resolverse tal impugnación en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas. Tal resolución tendrá fuerza ejecutoria, sin perjuicio de los recursos que procedan.

La interrupción de los trabajos se levantará por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que la hubiera ordenado o por el empleador tan pronto como se subsanen las causas que la motivaron, debiendo, en este último caso, comunicarlo inmediatamente a la ONSySL o a la autoridad administrativa del trabajo que corresponda.

Los supuestos de interrupción regulados en este artículo, así como los que se contemplen en la normativa reguladora de las actividades previstas en el segundo párrafo del artículo 7º de la presente ley, se entenderán, en todo caso, sin perjuicio del pago del salario o de las indemnizaciones que procedan y de las medidas que puedan arbitrase para su garantía.

Art. 50. – *Infracciones administrativas.* Son infracciones a la normativa en materia de prevención de riesgos laborales las acciones u omisiones de los empleadores que incumplan las normas legales, reglamentarias o cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y de salud laboral sujetas a responsabilidades conforme a la presente ley.

Las infracciones tipificadas conforme a la presente complementan aquellas previstas en los artículos 2, 3 y 4 del anexo II “Régimen general de sanciones por infracciones laborales” de la ley 25.212 y serán objeto de sanción tras la instrucción del oportuno sumario infraccional, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que puedan concurrir. Serán de aplicación

las leyes 18.693, de procedimiento para comprobación y juzgamiento de infracciones a las normas laborales y 18.695, de régimen de sanciones por infracciones a las leyes laborales, procedimiento para su comprobación y juzgamiento. La reglamentación podrá fijar recaudos especiales.

No obstante lo anterior, en el ámbito de las relaciones del personal de la administración pública nacional, las infracciones serán objeto de responsabilidades a través de la imposición, por resolución de la autoridad competente, de la realización de las medidas correctoras de los correspondientes incumplimientos, conforme al procedimiento que al efecto se establezca que se ajustará a los siguientes principios:

- a) El procedimiento se iniciará por el órgano competente de la ONSySL, bien por propia iniciativa o a petición de los representantes del personal;
- b) Tras su actuación, la ONSySL efectuará un requerimiento sobre las medidas a adoptar y plazo de ejecución de ellas, del que se dará traslado a la unidad administrativa inspeccionada a efectos de formular alegaciones;
- c) En caso de discrepancia entre los titulares de las jurisdicciones competentes como consecuencia de la aplicación de este procedimiento, se elevarán las actuaciones al PEN para su decisión final.

Las infracciones en el ámbito laboral se califican en leves, graves y muy graves, en atención a la naturaleza del deber infringido y la entidad del derecho afectado, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes de la presente ley.

Art. 51. – *Infracciones leves.* Son infracciones leves:

1. La falta de limpieza del centro de trabajo de la que no se derive riesgo para la integridad física o salud de los trabajadores.
2. No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente, conforme a las disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de leves.
3. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud los datos que debe declarar o cumplimentar, siempre que no se trate de industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, insalubre o nociva por los elementos, procesos, sustancias o residuos que se manipulen o gestionen.
4. Las que supongan incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que carezcan de trascendencia grave

para la integridad física o la salud de los trabajadores.

5. Cualesquiera otras que afecten a obligaciones de carácter formal o documental exigidas en la normativa de prevención de riesgos laborales y que no estén tipificadas como graves o muy graves.

Art. 52. – *Infracciones graves.* Son infracciones graves:

1. No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores que procedan conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, o no realizar aquellas actividades de prevención que hicieran necesarias los resultados de las evaluaciones.
2. No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores que procedan conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, o no comunicar a los trabajadores afectados el resultado de los mismos.
3. No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de graves, muy graves o mortales, o no llevar a cabo una investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o de tener indicios de que las medidas preventivas son insuficientes.
4. No registrar ni archivar los datos obtenidos en las evaluaciones, controles, reconocimientos, investigaciones o informes a que se refieren los artículos 15, 22 y 23 de esta ley.
5. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud los datos que debe declarar o cumplimentar, siempre que se trate de industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, insalubre o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen.
6. El incumplimiento de la obligación de elaborar el plan específico de seguridad e higiene en el trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas, así como el incumplimiento de dicha obligación mediante alteraciones en el volumen de la obra o en el número de trabajadores en fraude de ley.
7. La adscripción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con sus características personales o de quienes se encuentren manifiestamente en estados o

- situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo, así como la dedicación de aquéllos a la realización de tareas sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, salvo que se trate de infracción muy grave conforme al artículo siguiente.
8. El incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo susceptibles de provocar daños para la seguridad y salud y sobre las medidas preventivas aplicables, salvo que se trate de infracción muy grave conforme al artículo siguiente.
 9. La superación de los límites de exposición a los agentes nocivos que conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales origine riesgo de daños graves para la seguridad y salud de los trabajadores, sin adoptar las medidas preventivas adecuadas, salvo que se trate de infracción muy grave conforme al artículo siguiente.
 10. No adoptar las medidas previstas en el artículo 21 de esta ley en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.
 11. El incumplimiento de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
 12. No proporcionar la formación o los medios adecuados para el desarrollo de sus funciones a los trabajadores designados para las actividades de prevención y a los delegados de prevención.
 13. No adoptar los empleadores que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo las medidas de coordinación necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales.
 14. No informar al empleador titular del centro de trabajo a aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia.
 15. No designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de protección y prevención en la empresa o no organizar o contratar un servicio de prevención cuando ello sea preceptivo.
 16. Las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la salud de los trabajadores afectados, y especialmente en materia de:
 - a) Comunicación, cuando proceda legalmente, a la autoridad laboral de sustancias, agentes físicos, químicos o biológicos o procesos utilizados en las empresas;
 - b) Diseño, elección, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los lugares de trabajo, herramientas, maquinaria y equipos;
 - c) Prohibiciones o limitaciones respecto de operaciones, procesos y uso de agentes físicos, químicos o biológicos en los lugares de trabajo;
 - d) Limitaciones respecto del número de trabajadores que puedan quedar expuestos a determinados agentes físicos, químicos o biológicos;
 - e) Utilización de modalidades determinadas de muestreo, medición y evaluación de resultados;
 - f) Medidas de protección colectiva o individual;
 - g) Señalización de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas;
 - h) Servicios o medidas de higiene personal;
 - i) Registro de los niveles de exposición a agentes físicos, químicos o biológicos: listas de trabajadores expuestos y expedientes médicos.
 17. La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, o cuando de ello se deriven riesgos para la integridad física y salud de los trabajadores.
 18. El incumplimiento del deber de información a los trabajadores designados para ocuparse de las actividades de prevención o, en su caso, al servicio de prevención de la incorporación a la empresa de trabajadores en las modalidades de contrato de trabajo a tiempo parcial, a plazo fijo, de temporada o eventual.
 19. No facilitar al servicio de prevención el acceso a la información y documentación señaladas en el párrafo primero del artículo 18 y en el párrafo primero del artículo 23 de esta ley.
 20. No someter, en los términos reglamentariamente establecidos, el sistema de prevención de la empresa al control de una auditoría o evaluación externa cuando no se hubiera asociado a una mutual o contratado el servicio de prevención con una entidad sin fines de lucro especializada y ajena a la empresa.
 21. Facilitar –a la autoridad laboral competente, a las entidades sin fines de lucro especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos a las empresas, a las personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas o a las entidades acreditadas para desarrollar y certi-

ficar la formación en materia de prevención de riesgos laborales— datos de forma o con contenido inexactos, omitir los que hubiera debido consignar, así como no comunicar cualquier modificación de sus condiciones de acreditación o autorización.

22. Incumplir las obligaciones derivadas de actividades correspondientes a servicios de prevención ajenos respecto de sus empleadores contratantes, de acuerdo con la normativa aplicable.

Art. 53. — *Infracciones muy graves.* Son infracciones muy graves:

1. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de las trabajadoras durante los períodos de embarazo y lactancia.
2. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de los menores.
3. No interrumpir de forma inmediata, a requerimiento de la Oficina Nacional de Seguridad y Salud Laboral o de la autoridad administrativa del trabajo o sanitaria de cada jurisdicción, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre prevención de riesgos laborales y que, a juicio de cualesquiera de esas autoridades, impliquen la existencia de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, o reanudar los trabajos sin haber subsanado previamente las causas que motivaron la interrupción.
4. La adscripción a puestos de trabajo de trabajadores cuyas condiciones fuesen incompatibles con sus características personales conocidas o que se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo, así como la dedicación de aquellos a la realización de tareas sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de ello se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.
5. Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores, en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 22 de esta ley.
6. Superar los límites de exposición a los agentes nocivos que, conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, originen riesgos de daños para la salud de los trabajadores sin adoptar las medidas preventivas adecuadas, cuando se trate de riesgos graves e inminentes.
7. No adoptar, los empleadores y los trabajadores por cuenta propia que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, las medidas de cooperación y coordinación necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales, cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales.
8. No informar, el promotor o el empleador titular del centro de trabajo, a aquellos otros que desarrollen actividades en él, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia, cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales.
9. Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores a paralizar su actividad en los casos de riesgo grave e inminente, en los términos previstos en el artículo 21 de esta ley.
10. No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo, en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de las que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.
11. Ejercer sus actividades, las mutuales o entidades sin fines de lucro especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos a las empresas, las personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas o las que desarrollen y certifiquen la formación en materia de prevención de riesgos laborales, sin contar con la preceptiva acreditación o autorización, cuando esta hubiera sido suspendida o cancelada, cuando hubiera caducado la autorización provisional o cuando se excedieran en su actuación del alcance establecido.
12. Mantener, las entidades sin fines de lucro especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos a las empresas o las personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas, vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo, con las empresas auditadas o contratadas, distintas a las propias de su actuación como tales, así como certificar las entidades que desarrollen o certifiquen la formación preventiva, actividades no desarrolladas en su totalidad.

Art. 54. — *Sanciones.* Las sanciones por las infracciones tipificadas en los artículos anteriores podrán imponerse en los grados de mínimo, medio y máximo, atendiendo a los siguientes criterios:

- a) La peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa, explotación o centro de trabajo;

- b) El carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a dichas actividades;
- c) La gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias;
- d) El número de trabajadores afectados;
- e) Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empleador y las instrucciones impartidas por éste para la prevención de los riesgos;
- f) El incumplimiento de advertencias o requerimientos previos de la ONSySL o de la autoridad administrativa del trabajo en jurisdicción local;
- g) La inobservancia de las propuestas realizadas por los servicios de prevención, los delegados de prevención o el Comité de Prevención de Riesgos en el Trabajo de la empresa para la corrección de las deficiencias legales existentes;
- h) La conducta general seguida por el empleador para la estricta observancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales.

Los criterios de graduación no podrán atenuar o agravar la calificación de la infracción cuando estén contenidos en la descripción de la conducta infractora.

El acta de infracción que da impulso al sumario infraccional y la resolución administrativa que recaiga, deberán explicitar los criterios tenidos en cuenta, de entre los señalados en este artículo, para la graduación de la sanción.

Cuando no se considere relevante a estos efectos ninguna de las circunstancias enumeradas en este artículo, la sanción se impondrá en el grado mínimo en su extremo inferior.

Las sanciones se graduarán como sigue:

- a) *Infracciones leves*: Grado mínimo: apercibimiento. Grado medio: multa de 150 a 1.500 pesos. Grado máximo: multa de 1.501 a 3.000 pesos.
- b) *Infracciones graves*: Grado mínimo: multa de 3.001 a 4.500 pesos. Grado medio: multa de 4.501 a 15.000 pesos. Grado máximo: multa de 15.001 a 40.000 pesos.
- c) *Infracciones muy graves*: Grado mínimo: 40.001 a 80.000 pesos. Grado medio: multa de 80.001 a 300.000 pesos. Grado máximo: multa de 300.001 a 600.000 pesos.

En los casos que el empleador infractor sea un organismo, empresa o sociedad del Estado, sea nacional, provincial o municipal, los respectivos responsables del área donde se ha cometido la infracción serán solidariamente responsables del cumplimiento de la sanción pecuniaria que fije la autoridad.

Las sanciones impuestas por infracciones muy graves una vez firmes, se harán públicas en la forma que se determine reglamentariamente.

Art. 55. – *Reincidencia*. Existe reincidencia cuando se comete una infracción del mismo nivel de gravedad tipo y calificación, o superior a la que motivó una sanción anterior en el término de cinco (5) años desde la comisión de esta, en tal supuesto se requerirá que la resolución condenatoria hubiere adquirido firmeza.

Si se apreciase reincidencia, la cuantía de las sanciones consignadas en el artículo anterior podrá incrementarse hasta el duplo del grado de la sanción correspondiente a la infracción cometida, sin exceder en ningún caso del tope máximo previsto para las infracciones muy graves en el artículo 54 de esta ley.

Art. 56. – *Prescripción de las infracciones*. Las infracciones a la normativa en materia de prevención de riesgos laborales prescriben: las leves a tres (3) años, las graves a los cinco (5) años y las muy graves a los diez (10) años, contados desde la fecha de la infracción.

Art. 57. – *Suspensión de las actividades laborales o clausura del centro de trabajo*. Las autoridades administrativas del trabajo, cuando concurren circunstancias de excepcional gravedad en las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, podrán acordar la suspensión de las actividades laborales por un tiempo determinado o, en caso extremo, solicitar ante el fuero competente la clausura del centro de trabajo correspondiente, sin perjuicio, en todo caso, del pago del salario o de las indemnizaciones que procedan y de las medidas que puedan arbitrarse para su garantía.

Art. 58. – *Competencia sancionadora*. La reglamentación podrá determinar distintos órganos sancionadores según la cuantía de las multas.

En los supuestos de pluralidad de infracciones recogidas en un único sumario infraccional, será órgano competente para imponer la sanción por la totalidad de dichas infracciones, el que lo sea para imponer la de mayor cuantía.

La atribución de competencias a la que se refiere el párrafo primero no afecta al ejercicio de la potestad sancionadora que pueda corresponder a otras administraciones por razón de las competencias que tengan atribuidas.

Art. 59. – *Limitación a la facultad de contratar con la administración*. La reglamentación podrá establecer limitaciones para contratar con la administración pública nacional a los empleadores que hayan cometido un delito o una infracción administrativa muy grave en materia de seguridad y salud laboral.

Art. 60. – *Seguro de accidentes de trabajo y enfermedades laborales*. Todo empleador está obligado a asegurar en el Banco de Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales los riesgos, daños e incapacidades derivados del trabajo en las condiciones establecidas en el presente régimen.

Los empleadores contratantes del seguro al que refiere el párrafo anterior deberán declarar las altas y las bajas que se produzcan en su plantel de trabajadores. La declaración de alta debe ser acompañada con la constancia del ente recaudador emitida como mínimo el día previo a la incorporación del trabajador al plantel.

La renovación del contrato será automática, aplicándose el régimen de alcúotas vigente a la fecha de la renovación.

Art. 61. – *Banco de Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales (Bsatyel)*. La gestión de las prestaciones y demás acciones previstas en la presente ley estará a cargo del Banco de Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales (Bsatyel), que deberá constituirse con ese único objeto y funcionará como persona jurídica de derecho público no estatal, con individualidad económica, financiera y administrativa, de acuerdo a las disposiciones de la presente ley y sus normas reglamentarias.

Art. 62. – *Integración*. El gobierno y la administración del Banco de Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales estarán a cargo de un Directorio Ejecutivo Nacional (DEN).

El DEN estará integrado por doce (12) directores: cuatro (4) en representación del Estado, cuatro (4) en representación de los trabajadores y cuatro (4) en representación de los empleadores.

Los cuatro (4) directores en representación del Estado serán designados por el Poder Ejecutivo nacional.

Los directores en representación de los trabajadores serán designados de la siguiente manera: dos (2) por la Confederación General del Trabajo y dos (2) por la Central de Trabajadores de la Argentina.

Los directores en representación de los empleadores serán designados de la siguiente manera: uno (1) por la Unión Industrial Argentina, uno (1) por la Cámara Argentina de Comercio, uno (1) por la Cámara de la Construcción, y uno (1) por acuerdo de las organizaciones más representativas de la actividad rural.

Su presidente será elegido entre los directores que representan al Estado.

Los integrantes del DEN, con dedicación exclusiva en el cumplimiento de sus funciones, gozarán de la remuneración que establezca el presupuesto, y durarán en las mismas cuatro (4) años. Cesarán en sus funciones por vencimiento del mandato, renuncia, remoción con justa causa o disposición judicial.

Para ser miembro del DEN, representando a los empleadores y a los trabajadores deberán reunir los siguientes requisitos:

- a) Ser argentino, nativo o naturalizado, y mayor de edad;
- b) Poseer idoneidad para desempeñar sus funciones;
- c) No tener relación de dependencia con el banco;

- d) No tener antecedentes penales ni haber sido condenado en causa criminal alguna;
- e) No ejercer otra función incompatible con el Bsatyel, de naturaleza prestacional o de representación profesional vinculadas o relacionadas al mismo;
- f) No mantener relación, vinculación directa o indirecta con prestadores o terceras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que mantengan relación prestacional con el Bsatyel.

Para ser miembro del DEN representando al Poder Ejecutivo, sus integrantes deberán reunir los siguientes requisitos:

- a) Ser argentino, nativo o naturalizado, y mayor de edad;
- b) Poseer idoneidad y capacidad técnica para desempeñar sus funciones;
- c) No tener relación de dependencia con el Bsatyel;
- d) No tener antecedentes penales ni haber sido condenado en causa criminal alguna;
- e) No ejercer otra función incompatible con el Bsatyel, de naturaleza prestacional o de representación profesional, vinculadas o relacionadas al mismo;
- f) No mantener relación, vinculación directa o indirecta con prestadores o terceras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que mantengan relación prestacional con el Bsatyel.

Cada director podrá designar como máximo dos (2) asesores de probada idoneidad, cuyos honorarios estarán comprendidos dentro del presupuesto previsto para el DEN, y no podrán ser incorporados a la planta permanente de agentes del Bsatyel, cesando en sus funciones a la finalización por cualquier causa del mandato del director que los hubiere designado, sin derecho a indemnización alguna.

Art. 63. – *Obligaciones y facultades del Directorio Ejecutivo Nacional*. El Directorio Ejecutivo Nacional tendrá las siguientes obligaciones y ejercerá las siguientes facultades:

- a) Administrar los fondos y bienes del Bsatyel, conforme a las necesidades de prestaciones y servicios previstos en esta norma y sus reglamentaciones;
- b) Formular, diseñar y ejecutar las políticas del Bsatyel observando los principios de transparencia y eficacia en la gestión en armonía con el objetivo de garantizar la calidad, automaticidad, universalidad e integralidad de las prestaciones a cargo del banco;
- c) Ejercer la administración general del Bsatyel, asimilando para sí los criterios de administra-

- ción financiera y sistemas de control que en la materia rigen para el sector público nacional, en función de los cuales deberá dictar las reglamentaciones necesarias para regular la relación entre el Bsatyel y su personal –garantizando la carrera administrativa y programas de capacitación en todos sus estamentos–: con los afiliados, beneficiarios y terceros, previendo en su caso los recursos;
- d) Establecer y controlar administrativa y técnicamente las prestaciones, reglamentar sus modalidades y beneficiarios;
 - e) Disponer las inspecciones, auditorías, controles prestacionales periódicos y extraordinarios de todos los prestadores por intermedio de los agentes del Bsatyel, expresamente capacitados y autorizados que designe al efecto;
 - f) Elaborar el presupuesto anual, y remitirlo para su conocimiento al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional;
 - g) Confeccionar dentro de los tres (3) meses posteriores a la finalización del ejercicio, una memoria, el balance y cuenta de resultados del mismo, y elevarlos a conocimiento del Poder Ejecutivo y Congreso Nacional;
 - h) Fijar un régimen de sanciones para los prestadores de servicios, sin perjuicio de las vías administrativas o judiciales que pudieran corresponder;
 - i) Dictar normativas que regulen la relación entre afiliados y el Bsatyel, estableciendo un régimen de sanciones ante conductas dolosas contra este último;
 - j) Crear comisiones técnicas asesoras, y designar sus integrantes;
 - k) Dictar el estatuto y escalafón del personal;
 - l) Nombrar, remover y ascender personal;
 - m) Comprar, gravar y vender bienes, gestionar y contratar préstamos, celebrar toda clase de contratos y convenios de reciprocidad o de prestación de servicios con entidades nacionales, internacionales, provinciales, municipales o privadas;
 - n) Celebrar, como medida previa a cualquier contratación y dependiendo del monto, concurso de precios o licitación pública;
 - o) Determinar cuáles deben ser los montos mínimos de las contrataciones, para que sea exigible la licitación pública para su adjudicación.
 - p) Aceptar subsidios, legados y donaciones;
 - q) Solicitar del presidente del DEN informes sobre los actos de administración que éste ejecute en cumplimiento de sus funciones;
 - r) Aprobar los convenios a celebrar por el presidente en cumplimiento de sus funciones;

- s) Resolver los recursos o reclamos que interpusiesen el personal del Bsatyel, afiliados, beneficiarios o terceros, contra decisiones del directorio;
- t) Dictar todas las resoluciones y actos de disposición necesarios para el mejor desempeño de sus funciones;
- u) Adoptar todas las medidas conducentes a garantizar el normal y eficiente funcionamiento del Bsatyel.
- v) Realizar todas las acciones que fueran necesarias para garantizar la calidad y transparencia de la gestión.

Art. 64. – *Presupuesto*. El presupuesto de gastos administrativos y de funcionamiento del Banco de Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales no podrá exceder el ocho (8) por ciento del total de sus recursos.

Art. 65. – Si el accidente de trabajo o la enfermedad laboral se hubiere producido como consecuencia de incumplimientos por parte del empleador de las obligaciones establecidas en la presente ley, este deberá pagar al Fondo de Garantía previsto en el artículo 90 de la misma una suma de dinero cuya cuantía se graduará en función de la gravedad del incumplimiento y cuyo tope máximo será de doscientos cincuenta mil pesos (\$ 250.000), sin perjuicio de la responsabilidad civil derivada del mismo.

Aquel empleador cuyo índice de siniestralidad presentara desvíos significativamente superiores –tomado como base la media de la actividad– respecto del promedio del sector de empleadores al que pertenece, deberá integrar al Fondo de Garantía un porcentaje graduado según la gravedad del desvío, de entre el diez por ciento (10 %) y el cincuenta por ciento (50 %) de las prestaciones dinerarias a que dieran derecho los accidentes de trabajo y enfermedades laborales producidos en dicho período. Este recargo se aplicará automáticamente desde el momento en que se detecte el desvío de siniestralidad y hasta tanto no se corrija.

La ONSySL o la autoridad administrativa laboral competente será el órgano encargado de constatar y determinar la gravedad de los incumplimientos y demás circunstancias de hecho previstas en los apartados anteriores, de fijar el monto de los recargos y de gestionar el pago de las cantidades resultantes.

Art. 66. – *Accidentes de trabajo y enfermedades laborales*.

1. El trabajador tendrá derecho a las prestaciones establecidas en esta ley cuando sufra un accidente de trabajo, una enfermedad laboral o un daño a la salud causado por aquél o ésta. Los derechohabientes del trabajador tendrán derecho a las prestaciones establecidas en esta ley, en caso de fallecimiento del mismo como

consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral.

2. Contingencias:

- a) “Accidente de trabajo” es todo acontecimiento producido por el hecho o en ocasión del trabajo que cause un daño a la salud del trabajador;
- b) “Accidente *in itinere*” es el producido en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, en cualquier sentido, siempre que el trabajador no haya modificado o interrumpido dicho trayecto por iniciativa propia y por causas ajenas al trabajo. El trabajador podrá comunicar por escrito al empleador, y éste deberá hacerlo dentro de las 72 horas al asegurador, que modifica el trayecto por razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de un familiar directo y no conviviente. La omisión del empleador de hacer la comunicación al asegurador no será oponible al trabajador;
- c) Es “enfermedad laboral” aquella que sea consecuencia inmediata o mediata previsible del tipo de tareas desempeñadas por el trabajador, de las condiciones en las que fueren ejecutadas por éste o de la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos.

El Poder Ejecutivo nacional, con la asistencia y colaboración de la Oficina Nacional de Seguridad y Salud Laboral prevista en el artículo 8º de esta ley, elaborará un listado de enfermedades laborales que identifique el agente de riesgo, cuadro clínico y actividades en cuyo ámbito aquellas puedan producirse. Este listado deberá ser actualizado anualmente en virtud de los avances de la ciencia y de comprobaciones estadísticas.

- d) También se considerarán enfermedades laborales aquellas no incluidas en el listado, en caso de encontrarse relacionadas causal o concausalmente con la prestación del trabajo.
3. No darán derecho a las prestaciones de esta ley los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales causados por el dolo del trabajador, ni las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral, a excepción del agravamiento de las mismas que sean consecuencia del trabajo.

Para que opere la exclusión de las incapacidades preexistentes a la iniciación de la relación laboral, éstas deberán haber sido identificadas en su tipo y grado en el examen preocupacional, y esto notificado fehacien-

temente al trabajador y a la entidad sindical correspondiente.

Art. 67. – *Deber de otorgamiento de asistencia médica.*

1. En caso de discrepancia acerca de la procedencia de las prestaciones de asistencia médica previstas por esta ley, el Bsatyel no podrá suspender su cumplimiento sin previo dictamen de la comisión médica o resolución de autoridad administrativa o judicial competente que así lo determinen. En este caso, la Bsatyel tendrá derecho de repetir el valor de las prestaciones otorgadas hasta ese momento de quien resulte responsable.
2. Se garantizará la automaticidad e inmediatez en la cobertura a través de la coordinación administrativa e integración de sistema de prestaciones médicas, por el cual el trabajador lesionado podrá recibir automáticamente las prestaciones de asistencia médica a cargo del Bsatyel, por parte del sistema de obras sociales u otro agente del seguro de salud comprendido en las disposiciones de la ley 23.661, los que podrán repetir los costos generados al Bsatyel.
3. La sola denuncia del trabajador en los organismos pertinentes de la existencia de incapacidad transitoria o permanente como resultado de alguna de las situaciones protegidas por esta ley, imposibilita al empleador la utilización de las normas previstas en el régimen de enfermedades inculpables de la Ley de Contrato de Trabajo hasta tanto haya dictamen de la comisión médica o resolución de autoridad administrativa o judicial competente que disponga el carácter inculpable del infortunio.

Art. 68. – *Incapacidad laboral temporaria.*

1. Existe situación de incapacidad laboral temporaria (ILT) cuando el daño sufrido por el trabajador le impida temporariamente la realización de sus tareas habituales.
2. La situación ILT cesa por:
 - a) Alta médica;
 - b) Declaración de incapacidad laboral permanente (ILP);
 - c) Transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante;
 - d) Muerte del damnificado.

Los plazos, términos y circunstancias mencionados que los conforman serán de aplicación a las consecuencias de enfermedades y accidentes denunciados como laborales y rechazados por el empleador como tales.

Art. 69. – *Incapacidad laboral permanente.*

1. Existe situación de incapacidad laboral permanente (ILP) cuando el daño sufrido por el

trabajador le ocasione una disminución de su capacidad laborativa

2. La ILP será total cuando la disminución de la capacidad laborativa permanente fuere igual o superior al sesenta y seis por ciento (66 %), y parcial cuando fuere inferior a este porcentaje.
3. El grado de incapacidad laboral permanente será determinado por las comisiones médicas laborales de esta ley en base a la tabla de evaluación de las incapacidades laborales que confeccionará el PEN, y ponderará, entre otros factores, la edad del trabajador, el tipo de actividad y las posibilidades de reubicación laboral.
4. El Poder Ejecutivo nacional garantizará, en los supuestos que correspondiese, la aplicación de criterios homogéneos en la evaluación de las incapacidades dentro del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y de esta ley.

Art. 70. – *Carácter provisorio y definitivo de la ILP.* La situación de incapacidad laboral permanente tendrá carácter provisorio durante los treinta y seis (36) meses siguientes a su declaración.

Este plazo podrá ser extendido por las comisiones médicas por un máximo de veinticuatro (24) meses más, cuando no existe certeza acerca del carácter definitivo del porcentaje de disminución de la capacidad laborativa.

Vencidos los plazos anteriores, la incapacidad laboral permanente tendrá carácter definitivo.

Art. 71. – *Gran invalidez.* Existe situación de gran invalidez cuando el trabajador en situación de Incapacidad Laboral Permanente Total (IPT) necesita la asistencia continua de otra persona para realizar los actos elementales de su vida.

Art. 72. – *Reagravación.* Existe situación de reagravación cuando el trabajador padece una secuela de una contingencia prevista en esta ley ocurrida con anterioridad y que le provoca una mayor minusvalía.

Tendrá derecho a accionar por reagravación el trabajador accidentado que, luego de determinada una incapacidad permanente, demuestre la existencia de consecuencias mediatas relacionadas con el accidente que no hubieran sido tenidas en cuenta en el juicio o reclamo administrativo anterior –ya sea por no existentes o desconocidas al tiempo de evaluarse su incapacidad–, las cuales provocan una mayor minusvalía.

Art. 73. *Régimen legal de las prestaciones dinerarias.*

1. Las prestaciones dinerarias de esta ley gozan de las franquicias y privilegios de los créditos por alimentos. Son, además, irrenunciables, inembargables y no pueden ser cedidas ni enajenadas.
2. Las prestaciones dinerarias por ILT o permanente provisoria deberán ajustarse a las varia-

ciones que por cualquier causa se produjeran en el ingreso que debiera percibir el trabajador de encontrarse prestando servicios.

3. El PEN se encuentra facultado para mejorar las prestaciones dinerarias establecidas en la presente ley cuando las condiciones económico-financieras generales del sistema así lo permitan.

Art. 74. – *Ingreso base.*

1. A los efectos de determinar la cuantía de las prestaciones dinerarias se considerará ingreso base a la cantidad que resulte de dividir la suma total de los ingresos salariales del trabajador, incluyendo aquellos sindicados como “no remunerativos”, derivados de su relación laboral devengados en los doce (12) meses anteriores a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuere menor a un año, por el número de días corridos comprendido en el período considerado. Para el caso de trabajo no registrado, el monto a tomar de base será el que debió conformarse según las indicaciones y escalas del convenio colectivo aplicable. Para el caso de que la actividad no tuviere un convenio colectivo con escala salarial aplicable, la base será la del salario mínimo vital y móvil, siempre que el trabajador o sus derechohabientes no prueben una mejor remuneración percibida y no registrada.
2. El valor mensual del ingreso base resulta de multiplicar la cantidad obtenida según el apartado anterior por 30,4.
3. En caso de pluriempleo, se computará el total resultante de las remuneraciones devengadas con cada empleador. La reglamentación determinará el modo de distribución y reintegro del valor de las prestaciones.
4. En ningún caso el valor del ingreso base podrá ser inferior al ingreso que hubiese percibido el trabajador de no haberse operado el impedimento.

Art. 75. – *Prestaciones por incapacidad laboral temporaria.*

1. A partir del día siguiente a la primera manifestación invalidante y mientras dure el período de ILT, el damnificado percibirá una prestación de pago mensual de cuantía igual al valor mensual del ingreso base.

La prestación dineraria correspondiente a los primeros diez días estará a cargo del empleador. Las prestaciones dinerarias siguientes estarán a cargo del Bsatyel, el que, en todo caso, asumirá las prestaciones en especie.

El pago de la prestación dineraria deberá efectuarse en el plazo y en la forma establecidos en la ley 20.744 (texto ordenado en 1976) y

sus modificatorias para el pago de las remuneraciones a los trabajadores. La prestación que corresponda abonar al damnificado se liquidará y ajustará de conformidad con lo establecido por el artículo 208 de la LCT y sus modificatorias.

2. El responsable del pago de la prestación dineraria retendrá los aportes y efectuará las contribuciones correspondientes a los subsistemas de seguridad social que integran el Sistema Único de Seguridad Social (SUSS) o los de ámbito provincial que los reemplazan, exclusivamente, conforme la normativa previsional vigente debiendo abonar, asimismo, las asignaciones familiares.
3. Durante el período de ILT, originada en accidentes de trabajo o en enfermedades laborales, el trabajador no devengará remuneraciones de su empleador, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 1 del presente artículo.

Art. 76. – Prestaciones por incapacidad permanente parcial (IPP).

1. Declarado el carácter permanente de la incapacidad laboral parcial, el damnificado percibirá una indemnización de pago único cuya cuantía será igual a setenta (70) veces el valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por un coeficiente que resultará de dividir el número 100 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante. Esta suma en ningún caso será inferior a la cantidad que resulte de multiplicar \$ 250.000 por el porcentaje de incapacidad;
2. El Bsatyel deberá abonar la indemnización establecida en el apartado anterior dentro de los quince (15) días de configurado el carácter permanente de la incapacidad parcial a cuyo efecto determinará provisoriamente el porcentaje de incapacidad. Hasta tanto abone las indemnizaciones establecidas en el apartado anterior, el Bsatyel deberá abonar una suma igual al ciento por ciento (100 %) del ingreso diario, suma esta que no será debitada de las indemnizaciones por incapacidad permanente.

Art. 77. – Prestaciones por incapacidad permanente total.

1. Mientras dure la situación de provisionalidad de la incapacidad laboral permanente total (IPT), el damnificado percibirá una prestación de pago mensual equivalente al cien por ciento (100 %) del valor mensual del ingreso base, que será liquidada de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 75. Percibirá, además, las asignaciones familiares correspondientes.

2. Declarado el carácter definitivo de la IPT, el damnificado recibirá las prestaciones que por retiro definitivo por invalidez establezca el régimen previsional al que estuviera afiliado.
3. El damnificado percibirá, además, una indemnización de pago único cuyo monto será igual a 70 veces el valor del ingreso mensual base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por el coeficiente que resultará de dividir el número 100 por la edad de aquél a la fecha de la primera manifestación invalidante. Esta suma en ningún caso será inferior a \$ 400.000.

Art. 78. – Retorno al trabajo por parte del damnificado.

1. La percepción de prestaciones dinerarias por incapacidad laboral permanente es compatible con el desempeño de actividades remuneradas por cuenta propia o en relación de dependencia.
2. El PEN podrá reducir los aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social correspondientes a supuestos de retorno al trabajo de trabajadores con incapacidad laboral permanente.
3. Las prestaciones establecidas por esta ley son compatibles con las otras correspondientes al régimen previsional a las que el trabajador tuviere derecho.

Art. 79. – Gran invalidez.

1. El damnificado declarado gran inválido percibirá las prestaciones correspondientes a los distintos supuestos de incapacidad laboral permanente total.
2. Adicionalmente, el Bsatyel abonará al damnificado una prestación de pago mensual equivalente al cincuenta por ciento (50 %) el salario mínimo vital y móvil fijado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil que se extinguirá a la muerte del damnificado.

Art. 80. – Muerte del damnificado.

1. Los derechohabientes accederán a la pensión por fallecimiento prevista en el régimen previsional al que estuviera afiliado el damnificado y serán acreedores a las prestaciones correspondientes al supuesto de IPT.
2. Se consideran derechohabientes a los efectos de esta ley, a las personas enumeradas en el artículo 53 de la ley 24.241, quienes concurrirán en el orden de prelación y condiciones allí señaladas. El límite de edad establecido en dicha disposición se entenderá extendido hasta los veintitún (21) años, elevándose hasta los veinticinco (25) años en caso de tratarse de estudiantes a cargo exclusivo del trabajador fallecido. En ausencia de las personas enu-

meradas en el referido artículo, accederán los padres del trabajador en partes iguales; si hubiera fallecido uno de ellos, la prestación será percibida íntegramente por el otro. En caso de fallecimiento de ambos padres, la prestación corresponderá, en partes iguales, a aquellos familiares del trabajador fallecido que acrediten haber estado a su cargo. La reglamentación determinará el grado de parentesco requerido para obtener el beneficio y la forma de acreditar la condición de familiar a cargo.

3. En caso de inexistencia de los derechohabientes enumerados en el apartado precedente, a los efectos de la presente ley serán beneficiarios por derecho propio aquellos que resulten sucesores del trabajador fallecido, de conformidad con lo normado por el Código Civil. Para el caso de inexistencia de sucesores, la indemnización resultante deberá ser depositada en el fondo de garantía de esta ley.

Art. 81. – Prestaciones a cargo del Bsatyel.

1. El Bsatyel otorgará a los trabajadores que sufran algunas de las contingencias previstas en esta ley las siguientes prestaciones en especie:
 - a) Asistencia médica y farmacéutica;
 - b) Prótesis y ortopedia;
 - c) Rehabilitación;
 - d) Recalificación profesional;
 - e) Servicio funerario.
2. El Bsatyel podrá suspender las prestaciones dinerarias en caso de negativa injustificada del damnificado, determinada por la comisiones médicas, a percibir las prestaciones en especie de los incisos a), c) y d).
3. Las prestaciones a que se hace referencia en el apartado 1, incisos a), b) y c) del presente artículo se otorgarán a los damnificados hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas incapacitantes, de acuerdo a como lo determine la reglamentación.
4. Las prestaciones en especie de esta ley gozan de las franquicias y privilegios de los créditos por alimentos. Son, además, irrenunciables, inembargables y no pueden ser cedidas ni enajenadas.
5. El Bsatyel deberá garantizar las prestaciones médico asistenciales y las terapias de rehabilitación.

En caso de deficiencia en la prestación comprometida, el Bsatyel será directamente responsable por los daños y perjuicios ocasionados al trabajador, tanto con relación a la incapacidad sobreviniente, como con las demoras en la recuperación que se produzcan como

consecuencia de prestaciones insuficientes o carentes de pericia.

Art. 82. – Comisiones médicas.

1. Créanse las comisiones médicas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
2. Se constituirá como mínimo una comisión médica de riesgos del trabajo en cada provincia y una en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada una de las comisiones médicas no deberá tener un radio de acción superior a los 250 kilómetros.
3. Cada comisión médica estará integrada por tres médicos designados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, previo concurso público de antecedentes y oposición.
4. Las comisiones médicas serán los órganos que deberán determinar:
 - a) La naturaleza laboral del accidente o la enfermedad;
 - b) El carácter y grado de la incapacidad;
 - c) El contenido y alcance de las prestaciones en especie, cuando existiera discrepancia entre las partes.
5. Los damnificados podrán optar por someter el conflicto a la decisión de las comisiones médicas o concurrir directamente ante los respectivos tribunales del trabajo.

Cuando el damnificado voluntariamente haya concurrido ante las comisiones médicas, los dictámenes emitidos por éstas serán vinculantes para las partes si no fueran impugnados dentro del plazo de sesenta días hábiles, contados a partir de ser fehacientemente notificados.

El damnificado deberá contar con asistencia médica, sindical o letrada; será nulo todo lo actuado en infracción a este requisito.

Los médicos de las comisiones médicas tendrán la condición de empleados públicos nacionales, y como tales, la garantía constitucional de estabilidad en el empleo y los derechos y deberes establecidos en la legislación que regula el contrato de empleo público. Asimismo y por el plazo de cinco (5) años posteriores a su cese en el cargo, tendrán incompatibilidad para desempeñarse en forma directa o indirecta en el Bsatyel.

6. Los gastos que demande el funcionamiento de las comisiones médicas serán financiados por el PEN.

En todos los casos el procedimiento será gratuito para el damnificado incluyendo traslados y estudios complementarios.

7. La acción de las comisiones médicas podrá ser complementada en cuanto a la calificación de

la situación protegida, el alcance y extensión de la incapacidad, su tipo y grado, y las características de las prestaciones médicas, por un sistema administrativo territorialmente extendido mediante convenios con los ministerios y/o secretarías de Trabajo de las provincias.

Art. 83. – *Revisión de la incapacidad.* Hasta la declaración del carácter definitivo de la incapacidad y a solicitud del obligado al pago de las prestaciones o del damnificado, las comisiones médicas efectuarán nuevos exámenes para revisar el carácter y grado de incapacidad anteriormente reconocidos.

Art. 84. – *Cotización.*

1. Las prestaciones previstas en esta ley a cargo del Bsatyel, y el funcionamiento y cometidos de la oficina nacional se financiarán con una cuota mensual a cargo del empleador.
2. Para la determinación de la base imponible se considerará sujeta a cotización la remuneración que por cualquier concepto deba percibir el trabajador y los beneficios sociales enumerados en el artículo 103 bis de la LCT (20.744), con excepción de los mencionados en los incisos a), d), e), h) e i).
3. La cuota debe ser declarada y abonada conjuntamente con los aportes y contribuciones que integran la contribución unificada de la seguridad social (CUSS). Su fiscalización, verificación y ejecución estará a cargo del Bsatyel.

Art. 85. – *Régimen de alícuotas.*

1. La Superintendencia de Seguros de la Nación en forma conjunta con el Banco de Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales establecerán los indicadores que habrán de tener en cuenta para diseñar el régimen de alícuotas. Estos indicadores reflejarán la siniestralidad presunta y la siniestralidad efectiva.
2. El régimen de alícuotas deberá ser aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Art. 86. – *Tratamiento impositivo.*

1. Los contratos de seguro suscritos con el Bsatyel están exentos de todo impuesto o tributo nacional.
2. Las reservas obligatorias del Bsatyel están exentas de impuestos.

Art. 87. – *Responsabilidad por omisiones.*

1. Si el empleador omitiera afiliarse al Bsatyel, responderá directamente ante los beneficiarios por las prestaciones previstas en esta ley.
2. Si el empleador omitiera declarar su obligación de pago o la contratación de un trabajador,

el Bsatyel otorgará las prestaciones, y podrá repetir del empleador el costo de éstas.

3. En el caso de los apartados anteriores el empleador deberá depositar las cuotas omitidas en la cuenta del Fondo de Garantía creado por esta ley.
4. Si el empleador omitiera total o parcialmente el pago de las cuotas a su cargo, el Bsatyel deberá otorgar las prestaciones y podrá ejecutar contra el empleador las cotizaciones adeudadas. El Bsatyel deberá denunciar el incumplimiento a los interesados y a las organizaciones sindicales que los representen, se encuentren o no afiliados a éstas.

Art. 88. – *Insuficiencia patrimonial.* Declarada judicialmente la insuficiencia patrimonial del empleador no asegurado para asumir las obligaciones a su cargo, las prestaciones serán financiadas por el Bsatyel con cargo al Fondo de Garantía.

La insuficiencia patrimonial que refiere el presente artículo será probada a través del procedimiento sumarisimo previsto para las acciones meramente declarativas conforme se encuentre regulado donde la misma deba acreditarse, salvo en los casos que se encuentre ya abierto el concurso y/o quiebra y/o liquidación forzosa o voluntaria de cualquiera de los obligados al pago.

Art. 89. – *Derechos, deberes y prohibiciones.*

1. El Banco de Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales:

- a) Denunciará ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Oficina Nacional de Seguridad y Salud Laboral y la autoridad administrativa laboral provincial según correspondiere, los incumplimientos de sus afiliados de las normas de higiene y seguridad en el trabajo;
- b) Tendrá acceso a la información necesaria para cumplir con las prestaciones de esta ley;
- c) Mantendrá un registro de siniestralidad por establecimiento, siendo responsable por la calidad de los datos que suministre al Registro Nacional de Incapacidades Laborales.

Art. 90. – *Fondo de Garantía. Creación y recursos.*

1. Créase el Fondo de Garantía de la presente ley con cuyos recursos se abonarán las prestaciones en caso de insuficiencia patrimonial del empleador judicialmente declarada.
2. Para que opere la garantía del apartado anterior, los beneficiarios o el Bsatyel en su caso deberán realizar las gestiones indispensables para ejecutar la sentencia y solicitar la declaración de insuficiencia patrimonial en los plazos que fije la reglamentación.
3. El Fondo de Garantía será administrado por el Bsatyel y contará con los siguientes recursos:

- a) Los previstos en esta ley, incluido el importe de las multas por incumplimiento a las normas sobre riesgos del trabajo y a las normas de higiene y seguridad impuestas por la autoridad laboral competente;
 - b) Las cantidades recuperadas por el Bsatyel de los empleadores en situación de insuficiencia patrimonial;
 - c) Las rentas producidas por los recursos del Fondo de Garantía;
 - d) Donaciones y legados;
 - e) Los recursos previstos en el artículo 80, apartado 3, de esta ley.
4. Los excedentes del fondo, así como también las donaciones y legados al mismo, tendrán como destino único apoyar las investigaciones, actividades de capacitación, publicaciones y campañas publicitarias que tengan como fin disminuir los impactos desfavorables en la salud de los trabajadores. Estos fondos serán administrados y utilizados en las condiciones que prevea la reglamentación.
 5. Los recursos pertenecientes al Fondo de Garantía son inembargables frente a beneficiarios y terceros, e indisponibles para otros fines que no sean los previstos por esta ley.

Art. 91. – *Responsabilidad civil y penal.* El incumplimiento por los empleadores de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento.

Art. 92. – *Responsabilidad civil del empleador.*

1. Las indemnizaciones pagadas con motivo de esta ley no eximen a los empleadores de responsabilidad civil frente a los trabajadores y a los derechohabientes de éstos.
2. Los trabajadores damnificados por un accidente o enfermedad previstos en el artículo 66 de esta ley o sus derechohabientes o herederos declarados en juicio podrán reclamar ante el empleador responsable de la contingencia la reparación de los daños y perjuicios que pudiera corresponderles de acuerdo a las normas del Código Civil, de las que se deducirá únicamente el valor de las prestaciones por incapacidad permanente definitiva que hayan percibido del Bsatyel.
3. Se considerarán “daños causados con las cosas” a los provenientes de la exposición humana al ambiente de trabajo o del contacto con elementos utilizados por el trabajador o modalidad de trabajo asignada, quedando comprendidos los daños producidos en la salud que se deriven del esfuerzo, posiciones o movimientos humanos frente a las cosas.

4. Si algunas de las contingencias reparadas con prestaciones previstas por esta ley o aquellas a las que tenga derecho el trabajador hubieran sido causadas por un tercero, el damnificado o sus derechohabientes podrán reclamar del responsable la reparación de los daños y perjuicios que pudieren corresponderle de acuerdo con las normas del Código Civil, de las que se deducirá el valor de las prestaciones que haya percibido o deba recibir del Bsatyel.
5. En los supuestos del apartado anterior, el Bsatyel está obligado a otorgar al damnificado o a sus derechohabientes la totalidad de las prestaciones prescritas en esta ley, pero podrán repetir del responsable del daño causado el valor de las que hubieran abonado, otorgado o contratado.
6. El ejercicio de la acción judicial no suspenderá el beneficio de las prestaciones en especie ni podrán éstas ser compensadas ni deducidas de la indemnización fundada en el derecho civil.
7. Serán competentes para entender en los procesos donde se promuevan acciones con fundamento en las disposiciones de este artículo, a opción del trabajador, los juzgados de primera instancia en lo civil y los tribunales de trabajo de cada jurisdicción.

Art. 93. – *De los seguros de responsabilidad civil.*

1. Los empleadores podrán contratar una póliza de responsabilidad civil adicional para hacer frente a los reclamos a los que refiere el inciso 2 del artículo anterior.
2. Las pólizas de responsabilidad civil adicional deberán ser contratadas con aseguradoras debidamente autorizadas para ello por la Superintendencia de Seguros de la Nación, la cual deberá exigirles para operar de acuerdo a las pautas establecidas por esta ley un capital mínimo de \$ 15.000.000, que deberá ser reajustado de acuerdo a lo que determine la reglamentación vigente.

Art. 94. – *Transporte de mercancías peligrosas.* Lo dispuesto en la presente ley se entiende sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la regulación en materia de transporte de mercancías peligrosas.

Art. 95. – *Constitución de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral.* El PEN, en el plazo de tres (3) meses a partir de la vigencia de esta ley, regulará la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral, la que se constituirá en el plazo de los treinta (30) días siguientes.

Art. 96. – *Adaptación de la normativa preexistente a esta ley.* El Poder Ejecutivo nacional, previa consulta a los sectores u organizaciones representativas, revisará

las regulaciones vigentes en materia de protección de la seguridad y la salud de los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, con el propósito de adaptarlas a la presente ley.

Art. 97. – Sustitúyese el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo (ley 20.744) (t. o. decreto 1976), por el siguiente:

El empleador debe hacer observar las pausas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en esta ley y demás normas reglamentarias, y adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, debiendo evitar los efectos perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, así como también los derivados de ambientes insalubres o ruidosos.

Está obligado a observar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre higiene y seguridad en el trabajo. El trabajador podrá rehusar la prestación de trabajo, sin que ello le ocasione pérdida o disminución de la remuneración, si el mismo le fuera exigido en trasgresión a tales condiciones, siempre que exista peligro inminente de daño o se hubiera configurado el incumplimiento de la obligación, mediante constitución en mora, o si habiendo el organismo competente declarado la insalubridad del lugar, el empleador no realizara los trabajos o proporcionara los elementos que dicha autoridad establezca.

Art. 98. – Agrégase a la Ley de Contrato de Trabajo (ley 20.744) (texto ordenado en el decreto 390/76), el siguiente artículo:

Artículo 213 bis: En el supuesto de que un trabajador que haya sufrido un accidente o una enfermedad laboral sea despedido dentro de los dos años posteriores a su alta definitiva, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la rescisión se dispuso con motivación discriminatoria. En tal caso, el trabajador tendrá derecho a solicitar su reincorporación en idénticas condiciones laborales a las que gozaba al momento del alta médica o percibir, además de las indemnizaciones comunes por despido, una indemnización especial cuyo monto será igual a la prevista en el artículo 182 de esta ley.

Art. 99. – *Normas aplicables.*

1. En las materias no reguladas expresamente por esta ley, y en cuanto resulte compatible con la misma, será de aplicación supletoria la ley 20.091.
2. No es aplicable al régimen de esta ley, el artículo 188 de la ley 24.241.

Art. 100. – *Denuncia.*

1. El derecho a recibir las prestaciones de esta ley comienza a partir de la denuncia de los hechos causantes de daños derivados del trabajo.
2. La reglamentación determinará los requisitos de esta denuncia.
3. La tramitación de la denuncia ante la Comisión Médica será pública y las actuaciones deberán ser exhibidas a toda persona que lo solicite.

Art. 101. – *Prescripción.*

1. Las acciones derivadas de esta ley prescriben a los diez (10) años a contar desde la fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada y, en su caso, a los diez (10) años desde el cese de la relación laboral.
2. Prescriben en igual plazo que el previsto en el inciso anterior, a contar desde la fecha en que debió efectuarse el pago, las acciones para reclamar el pago de sus acreencias de los entes gestores y de los entes de regulación y supervisión de esta ley.

Art. 102. – *Situaciones especiales.* Encomiéndase al Poder Ejecutivo de la Nación el dictado de normas complementarias en materia de:

- a) Pluriempleo;
- b) Relaciones laborales de duración determinada y a tiempo parcial;
- c) Sucesión de siniestros;
- d) Trabajador jubilado o con jubilación postergada.

Esta facultad está restringida al dictado de normas complementarias que hagan a la aplicación y cumplimiento de la presente ley.

Art. 103. – *Competencia judicial.*

1. Para las acciones previstas en la presente ley será competente la justicia ordinaria del trabajo en materia laboral conforme las normas procesales locales.
2. Las resoluciones de las comisiones médicas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán recurribles y se sustanciarán ante el juez laboral competente correspondiente al domicilio del trabajador o del domicilio del empleador, a opción del trabajador.
3. Los demás conflictos que se generen entre las partes en materia de pago u otorgamiento de prestaciones, carácter laboral del accidente o los relacionados con el contrato de trabajo serán dirimidos ante los tribunales competentes en materia laboral.
4. El cobro de cuotas, recargos e intereses adeudados al Bsatyel se hará efectivo por la vía del apremio regulado en los códigos procesales civiles y comerciales de cada jurisdicción, sirviendo de suficiente título ejecutivo el cer-

tificado de deuda expedido por el Bsatyel o la autoridad administrativa laboral provincial.

5. En caso de discrepancia del damnificado de un accidente o enfermedad resarcible por esta ley respecto al prestador médico asignado o las prestaciones aquí previstas, el trabajador tendrá derecho a una acción sumarísima ante el juez del trabajo de turno, con habilitación de días y horas inhábiles, si la urgencia del caso así lo requiriese. En tal supuesto el juez habilitado, si fuera necesario, deberá requerir la asistencia del servicio médico público más cercano en su jurisdicción, a fin de poder evacuar las discrepancias médicas.
6. Los trabajadores o sus derechohabientes gozarán de los beneficios de gratuidad y de litigar sin gastos en los procedimientos judiciales y administrativos que se deriven de la aplicación de la presente ley.

Art. 104. – *Aplicación de disposiciones más favorables.* Lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de esta ley en materia de competencias, facultades y garantías de los delegados de prevención, se entenderá sin perjuicio del respeto a las disposiciones más favorables para el ejercicio de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores en la prevención de riesgos laborales previstas en los convenios colectivos vigentes en la fecha de su entrada en vigor.

Art. 105. – *Entrada en vigencia.* La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación y será aplicable aun a las consecuencias de las situaciones jurídicas existentes.

Art. 106. – Derógase la ley 24.557 y sus modificaciones.

Art. 107. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del Reglamento de este Honorable Senado de la Nación, solicito la incorporación de este dictamen al orden del día.

Sala de las comisiones, 25 de septiembre de 2012.

Rubén H. Giustiniani.

INFORME

Honorable Senado:

A principios de siglo los legisladores socialistas desempeñaron un rol protagónico en la concreción de las primeras leyes protectoras del trabajo y reparadora de los daños producidos a raíz de accidentes de trabajo.

En este sentido, la primera ley de accidentes de trabajo en la Argentina fue sancionada en 1915 por iniciativa del legislador socialista Alfredo Palacios (Ley de Accidentes de Trabajo –ley 9.688–). Con sucesivas modificaciones, el núcleo de esa norma estuvo vigente hasta la sanción en junio de 1996 de la ley 24.557, de riesgos de trabajo, instauró un régimen de

seguridad colectiva y seguro obligatorio administrado por empresas privadas.

Al presentar el proyecto, Palacios, decía: “Las consecuencias de los peligros ocasionados por el funcionamiento de la máquina deben estar a cargo de la industria. El accidente surge de la industria; ella es quien lo crea. Es con este criterio que mi proyecto cubre los riesgos del accidente, de la enfermedad y la maternidad”. El proyecto ponía a cargo del empresario la reparación del daño sufrido por sus obreros o empleados a consecuencia no sólo de accidentes sino también de enfermedades contraídas en el ejercicio de la industria, en cuanto consideraba que “no hay razón ninguna para dejar sin reparación la enfermedad en los casos que se indemniza el accidente, ya que la circunstancia de que en éste la lesión se produzca repentinamente no es el fundamento del derecho de la víctima a ser indemnizada: ese derecho se funda en que el patrón asume los riesgos de su negocio. Si el deterioro de la salud del obrero es una consecuencia inevitable de la industria, ese riesgo debe estar a cargo del empresario, interesando poco que la salud se altere de un modo repentino o gradual”. Y decía por ello: “Mi proyecto protege lo mismo al obrero que pierde un miembro en la polea de una rueda que al que se ha intoxicado, después de muchos años de trabajo, por el arsénico, el plomo o el fósforo”.

El neoliberalismo y la privatización de la seguridad social

El sistema de relaciones laborales definido en base a un importante grado de intervención estatal en el mercado de trabajo, sufrió en la década del '90 modificaciones legislativas en sus principales características. Fue entonces cuando, al calor del Consenso de Washington, se fueron imponiendo un conjunto de reformas en la legislación laboral y en el sistema de seguridad social en base al falaz argumento de que los problemas del mercado de trabajo eran producidos por la acción combinada de una rígida legislación laboral y de costos laborales muy altos. Por ello, las políticas recomendadas por los organismos internacionales debían, por un lado, introducir mecanismos de flexibilidad para la contratación y el uso de la fuerza de trabajo, y por el otro, reducir los costos de las empresas para financiar la seguridad social.

La falacia de este discurso no permitió otra cosa más que aumentar la explotación, precarizar a los trabajadores, y volcar la relación de fuerzas aún más hacia el capital, en la medida en que tendió a satisfacer las demandas de las grandes organizaciones empresarias/ financieras, y de los organismos internacionales de crédito. No sólo no logró intensificar la creación de empleo, sino que incluso en los períodos de expansión la relación entre crecimiento y empleo no difirió de la que había caracterizado a la década anterior.

Montados sobre este discurso, los máximos representantes del neoliberalismo en nuestro país –Cavallo

y un grupo de banqueros— intentaron liquidar el sistema de seguridad social en la Argentina.

En lo que respecta al sistema previsional, la reforma sancionada en 1994 se inspiró en los “modelos” promocionados por la denominada Nueva Ortodoxia Previsional (NOP), parte de las políticas impuestas por el Consenso de Washington en la región, que sostenía que la previsión social no debería tener como función la redistribución de ingresos, sino fundamentalmente el fomento del mercado de capitales, a través de un esquema de capitalización individual.

De esta forma, mediante la ley 24.241, sancionada con la férrea oposición de los legisladores socialistas Guillermo Estévez Boero y Alfredo Bravo, el gobierno nacional transformó el Sistema Nacional de Previsión Social creando el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), introduciendo la posibilidad de capitalización de los aportes de los trabajadores en cuentas individuales administradas por empresas del sector privado —muy vinculadas a los grandes bancos— denominadas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

Este modelo previsional tenía como correlato el sistema de riesgos de trabajo de la ley 24.557 sancionada en 1995. Es más, la gran mayoría de las aseguradoras de riesgos de trabajo estaban estrechamente vinculadas con las AFJP, lo que demuestra cabalmente que la creación de estas empresas tenía como lógica exclusiva la realización de un negocio financiero.

En este marco, desde el socialismo entendemos que es imprescindible abordar el debate de una nueva ley que reemplace la actual de riesgos del trabajo (24.557), impregnada de la matriz neoliberal “flexibilizadora” de los noventa y tachada de inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Las modificaciones al régimen de riesgos de trabajo propuestas por el Poder Ejecutivo

El proyecto del Poder Ejecutivo profundiza, sin embargo, el tufillo neoliberal de la ley 24.557, en cuanto el núcleo de la reforma planteada sigue siendo en el fondo la garantía de la ganancia empresaria.

En este sentido, detrás del aumento del 20% de las indemnizaciones dispuesto en el proyecto, se busca satisfacer el recurrente reclamo empresario de “previsibilidad” que se había originado en la llamada “doble vía” (ver editorial de *La Nación*). Recordemos que, si bien la ley 24.557 prohibía a los trabajadores accidentados o sus familias recurrir a la Justicia (aceptando la indemnización tarifada), esta norma había sido declarada inconstitucional habilitándose la posibilidad de reclamar en el fuero civil.

Esta solución planteada por el Ejecutivo en relación al “conflicto de la doble vía” no es otra que la propuesta por la Unión Argentina de Riesgos de Trabajo (UART): pasar a un sistema tarifado “generoso”, actualizable periódicamente, que resulte “más conveniente” que la iniciación de acciones judiciales por vía civil.

Lamentablemente, se pierde una gran oportunidad de plasmar un nuevo marco legal que impulse políticas de prevención, que son sólo efectivas como lo dicta la experiencia internacional, cuando se garantiza la participación de los trabajadores en un marco de la libertad y democracia sindical.

El proyecto contempla a las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), que son las verdaderas protagonistas del fracaso del sistema, como actrices del nuevo instrumento legal. Y esto es precisamente lo que habla a las claras de la persistencia de la matriz neoliberal del sistema.

La simple existencia de estas entidades de orden privado, ligadas al capital financiero y piedra angular del sistema surgido como parte del paquete de flexibilización y precariedad laboral de los años 90, presupone una inversión de los principios rectores del derecho laboral: a saber, la protección de los más débiles en la relación entre empleadores y trabajadores.

Por otra parte, debe señalarse que el sistema vigente y el que se está consolidando con el proyecto del Ejecutivo excluyen la participación de los trabajadores, como única norma eficaz de formulación e implantación de una política de prevención, tal como dicta la experiencia internacional, los convenios y recomendaciones de la OIT: en particular el Programa Internacional para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (PIACT), el convenio 1.553 y la resolución 1.644.

Con respecto a las llamadas ART “mutuas” que crea el proyecto de ley, se está allanado el camino a los “gordos de la CGT”, que pretenden engrosar la tajada que ya perciben en el negocio de los seguros del trabajo o de los grupos empresarios que pretenden darle a las ART este nuevo formato de mutuas. Además, debe decirse que una vez más estamos copiando sistemas que en otros países han fracasado.

El actual sistema de riesgos de trabajo, que el proyecto del Poder Ejecutivo mantiene incólume, consolida un sistema en que las políticas preventivas tienen carácter meramente enunciativo y sin ninguna eficacia: mostrando su verdadera cara, que es la de garantizar el lucro empresario.

En definitiva, la persistencia del sistema, “aggiornado” ahora con el proyecto del Ejecutivo, sólo beneficia al sector empresario enriquecido en estos años, no dispuesto a distribuir la renta, y sí a descargar su propia “crisis” sobre los trabajadores, denigrando las condiciones de trabajo, y a una burocracia sindical distraída, cuando no cómplice de las políticas patronales, que avala esta degradación de las condiciones de trabajo y las consecuencias que provocan y provocarán sobre el futuro y la salud de los trabajadores y sus familias.

Por todo lo expuesto, desde el socialismo creemos que es necesario avanzar hacia un nuevo sistema que contemple primordialmente la prevención, con la defensa de la integridad psicofísica de los trabajadores como eje y no en la ganancia empresaria; eliminando

lisa y llanamente la figura de las ART, reemplazándolas por un órgano de derecho público no estatal, con representación tripartita. Una política en este sentido debe contemplar en primer lugar una eficaz política preventiva, que permita eliminar el riesgo en su origen. Y esto no es posible sin la participación de los trabajadores en comités mixtos y la instauración de la figura del delegado de prevención.

Nuestra propuesta

En el entendimiento de que el proyecto de ley de prevención de riesgos laborales y reparación de daños e incapacidades derivados de accidentes de trabajo y enfermedades laborales que fue elaborado técnica y participativamente por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y presentado en la Cámara de Diputados por Víctor De Gennaro (expediente 6.462-D.-2012) satisface los objetivos descritos, hacemos nuestra dicha iniciativa.

El proyecto plantea derogar la denominada Ley de Riesgos del Trabajo, 24.557, que entró en vigencia en julio de 1996 que creó un sistema de cobertura de los accidentes de trabajo y las enfermedades —que considera arbitrariamente laborales en un listado cerrado— a través de ART concebidas como entidades con finalidad lucrativa y eximiendo a los empresarios de sus deberes de seguridad, indemnidad y de reparación integral. En la medida en que dicha ley implicaba la privación a los trabajadores del acceso a la Justicia y de la priorización de la ventaja económica del empleador a costa de la vida, la salud o la seguridad de los trabajadores, dio lugar a sucesivas declaraciones de inconstitucionalidad a diversos artículos de la misma por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos citados más arriba.

Nuestra propuesta parte de una visión integral de la seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo y constituye un cambio de paradigma en relación al régimen vigente ya que reemplaza a las aseguradoras de riesgos del trabajo como gestoras del sistema por una entidad sin fines de lucro y en cuya administración de carácter tripartito participan los trabajadores: el Banco de Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales.

Ello además de fomentar la participación de los trabajadores en el diseño y control de las acciones de prevención; asegurar la reparación integral de los daños sufridos por accidentes de trabajo, enfermedades laborales y de establecer la automaticidad, calidad, eficacia y universalidad de las prestaciones, entre otras tantas previsiones de suma importancia.

Ámbito de aplicación (artículo 3º): comprende a toda relación de trabajo, quedando así incluidas tanto las relaciones de trabajo de derecho privado como aquellas que se prestan en la esfera de las administraciones públicas en cualquiera de sus niveles, con la única exclusión de los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad.

Comprende también a los trabajadores rurales, del servicio doméstico, y quienes presten cualquier

forma de trabajo en establecimientos penitenciarios en régimen de privación de la libertad. De igual modo, sus disposiciones se aplican a las sociedades, asociaciones y cooperativas en las que existan socios o asociados cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal así como también a las relaciones alcanzadas por el Sistema de Pasantías Educativas, regidas por la ley 25.165 y demás normas complementarias, becarios, aprendices, trabajadores autónomos, trabajadores voluntarios, personas obligadas a la prestación de servicios de carga pública y a toda persona que preste un servicio laboral y que como contraprestación reciba retribución monetaria y/o en especie.

Para alcanzar los objetivos declarados de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y reparar los daños e incapacidades ocasionados por accidentes del trabajo y enfermedades laborales, incluyendo la rehabilitación y recalcificación laboral de los trabajadores damnificados (artículo 1º) el anteproyecto se estructura a partir de dos ejes fundamentales: la prevención y la reparación.

La ejecución de las políticas y gestión del sistema que abonan al cumplimiento de tales fines está a cargo de cuatro instituciones: la Oficina Nacional de Seguridad y Salud Laboral (artículo 8º) cuya misión es el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo así como la promoción y apoyo al mejoramiento, la vigilancia y el control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales y sobre higiene y seguridad en el trabajo. Se le asignan actividades científico-técnicas entre las que se encuentra la de administrar por sí el Registro Nacional de Incapacidades Laborales en el cual se registrarán los datos identificatorios del siniestro, la empresa en la que ocurrió, época del infortunio, prestaciones abonadas, incapacidades reclamadas y, además, deberá elaborar los índices de siniestralidad por empleador y por actividad. Debe llevar también el registro de enfermedades laborales y desarrollar los estudios estadísticos sobre epidemiología laboral. Está a su cargo fomentar la cultura de la seguridad mediante la sensibilización de la pública. Tiene funciones de vigilancia y control de la normativa sobre higiene y seguridad en el trabajo y sobre prevención de riesgos laborales; de asesoramiento a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada, etcétera.

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral (artículo 12), como órgano asesor en materia de políticas de prevención de riesgos laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, de las administraciones del trabajo de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará integrada por representantes de cada región en que se divida el territorio nacional; Banco de Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales (artículo 61): que estará a cargo de la gestión de las prestaciones dinerarias y en especie (brindar asistencia médica y farmacéutica; suministrar prótesis y ortopedia; pro-

veer la rehabilitación; recalificación profesional, y el servicio funerario, artículo 8º) y demás acciones previstas en el anteproyecto de ley y funcionará como persona jurídica de derecho público no estatal, con individualidad económica, financiera y administrativa. Es destacar que el gobierno y administración del Banco de Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales estarán a cargo de un directorio ejecutivo nacional cuya composición tripartita estará integrada por los representantes de los trabajadores.

Comisiones médicas (artículo 82): encargadas de determinar la naturaleza laboral del accidente o la enfermedad; el carácter y grado de la incapacidad; el contenido y alcance de las prestaciones en especie, cuando existiera discrepancia entre las partes. Es de destacar que los damnificados pueden optar por someter el conflicto a la decisión de las comisiones médicas o concurrir directamente ante los respectivos tribunales del trabajo.

El anteproyecto reconoce expresamente los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores (artículos 18 y 36) y establece la consulta obligatoria para los empleadores que pretendan adoptar medidas en algunos supuestos (artículo 35), limitando y condicionando en favor de la salud de los trabajadores, el derecho de organización reconocido por el orden jurídico a los empleadores a través del derecho de participación de los trabajadores.

En igual sentido, es muy significativa la instauración de los delegados de prevención (artículo 37) designados por voto directo y secreto de los trabajadores de la empresa, en cuya representación cumplen funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo y control de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo y del Comité de Prevención de Riesgos en el Trabajo (artículo 42) como órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica y supervisión de las actuaciones de la empresa o explotación en materia de prevención de riesgos.

Cobra singular importancia en términos de protección integral de la salud del trabajador la novedosa incorporación dentro del marco tutelar dispuesto por el anteproyecto de la ley a las enfermedades derivadas de los factores de riesgos psicosociales (artículo 26), entendiéndose por éstos a los riesgos laborales derivados de las interacciones entre el contenido, la organización, y la gestión del trabajo y de las condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades del trabajador, por otra.

Protección de la maternidad: se establece la obligatoriedad del empleador de evaluar los riesgos para la seguridad y salud de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente y de adoptar las medidas necesarias para evitar su exposición a los riesgos específicos que puedan influir negativamente en la salud de la mujer, del feto o del hijo en período de lactancia (artículo 27).

El anteproyecto de ley impone la responsabilidad solidaria de las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras y o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo por las consecuencias derivadas del incumplimiento de la normativa sobre salud y prevención de riesgos laborales (artículo 24).

Reparación integral: la reparación de los daños derivados del trabajo está a cargo del banco. Sin embargo, la ley reconoce el derecho de los trabajadores damnificados o sus derechohabientes o herederos declarados en juicio a reclamar ante el empleador responsable de la contingencia la reparación de los daños y perjuicios que pudiera corresponderles de acuerdo a las normas del Código Civil, de las que se deducirán únicamente el valor de las prestaciones por incapacidad permanente definitiva que hayan percibido del Bsatyel (artículo 92). Se asegura de este modo el derecho a la reparación integral del daño sufrido por el accidente de trabajo, enfermedad laboral o accidente *in itinere*. En relación a ello, se dispone la posibilidad de que los empleadores contraten una póliza de responsabilidad civil adicional (artículo 93) para hacer frente a las demandas en las cuales se les impute responsabilidad y por las que deba responder de acuerdo a las normas del Código Civil a las que refiere el párrafo anterior.

Competencia: el anteproyecto dispone que sea la justicia ordinaria del trabajo (artículo 103) la encargada de dirimir los conflictos en los cuales se diriman conflictos relacionados con la aplicación de las disposiciones previstas en el anteproyecto de ley.

Discriminación: El anteproyecto de ley establece una tutela especial (artículo 98) de dos años para aquellos trabajadores que se reintegren al trabajo luego de haber sufrido un accidente o una enfermedad laboral y sean despedidos por el empleador. La norma presume, salvo prueba en contrario, la motivación discriminatoria del despido y otorga al trabajador la potestad de solicitar su reincorporación o exigir una indemnización especial adicional a las indemnizaciones comunes que le correspondan.

Deber de seguridad del empleador y derecho del trabajador a rehusarse a prestar tareas en caso de peligro inminente: el anteproyecto propone el retorno a la redacción original del artículo 75 de la ley 20.744 en el cual se establece además del deber de seguridad a cargo del empleador, la posibilidad que el trabajador rehúse la prestación de trabajo, sin que ello le ocasione pérdida o disminución de la remuneración, cuando le fuera exigido trabajar en transgresión a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre higiene y seguridad en el trabajo y exista peligro inminente de daño o se hubiera configurado el incumplimiento de la obligación, mediante constitución en mora.

El proyecto que presentamos tiende a restablecer la vigencia plena de los derechos de los trabajadores, particularmente, la tutela de salud, bajo los principios de prevención y de reparación integral, y el cumplimiento

del mandato constitucional contenido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Consideramos que es el momento de desmontar definitivamente todas las reformas características de la flexibilización laboral, aportando de esta forma al restablecimiento pleno del principio protectorio, vector fundamental del derecho laboral.

Rubén H. Giustiniani.

Sanción del Honorable Senado

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...

RÉGIMEN DE ORDENAMIENTO DE LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS DERIVADOS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

CAPÍTULO I

Ordenamiento de la cobertura

Artículo 1° – Las disposiciones sobre reparación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales constituyen un régimen normativo cuyos objetivos son la cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones dinerarias y en especie establecidas para resarcir tales contingencias.

A los fines de la presente, se entiende por régimen de reparación al conjunto integrado por esta ley, por la Ley de Riesgos del Trabajo, 24.557 y sus modificatorias, por el decreto 1.694/09, sus normas complementarias y reglamentarias, y por las que en el futuro las modifiquen o sustituyan.

Art. 2° – La reparación dineraria se destinará a cubrir la disminución parcial o total producida en la aptitud del trabajador damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, así como su necesidad de asistencia continua en caso de gran invalidez, o el impacto generado en el entorno familiar a causa de su fallecimiento.

Las prestaciones médico-asistenciales, farmacéuticas y de rehabilitación deberán otorgarse en función de la índole de la lesión o la incapacidad determinada. Dichas prestaciones no podrán ser sustituidas en dinero, con excepción de la obligación del traslado del paciente.

El derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su proceden-

cia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad profesional.

El principio general indemnizatorio es de pago único, sujeto a los ajustes previstos en este régimen.

Art. 3° – Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, el damnificado (trabajador víctima o sus derechohabientes) percibirá, junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, equivalente al veinte por ciento (20 %) de esa suma.

En caso de muerte o incapacidad total, esta indemnización adicional nunca será inferior a pesos setenta mil (\$ 70.000).

Art. 4° – Los obligados por la ley 24.557 y sus modificatorias al pago de la reparación dineraria deberán, dentro de los quince (15) días de notificados de la muerte del trabajador, o de la homologación o determinación de la incapacidad laboral de la víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, notificar fehacientemente a los damnificados o a sus derechohabientes los importes que les corresponde percibir por aplicación de este régimen, precisando cada concepto en forma separada e indicando que se encuentran a su disposición para el cobro.

Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas en este régimen de reparación o las que les pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. Los distintos sistemas de responsabilidad no serán acumulables.

El principio de cobro de sumas de dinero o la iniciación de una acción judicial en uno u otro sistema implicará que se ha ejercido la opción con plenos efectos sobre el evento dañoso.

Las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad sólo podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente prevista en este artículo.

La prescripción se computará a partir del día siguiente a la fecha de recepción de esa notificación.

En los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se aplicarán la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil.

Art. 5° – La percepción de las prestaciones en dinero, sea imputable a la sustitución de salarios en etapa de curación (ILT) o sea complementaria por gran invalidez, así como la recepción de las prestaciones en especie, no implicará en ningún caso el ejercicio de la opción excluyente prevista en el artículo precedente.

Art. 6° – Cuando por sentencia judicial, conciliación o transacción se determine la reparación con fundamento en otros sistemas de responsabilidad, la

aseguradora de riesgos del trabajo deberá depositar en el respectivo expediente judicial o administrativo el importe que hubiera correspondido según este régimen, con más los intereses correspondientes, todo lo cual se deducirá, hasta su concurrencia, del capital condenado o transado.

Asimismo, la ART interviniente deberá contribuir en el pago de las costas, en proporción a la parte del monto indemnizatorio que le hubiera correspondido respecto del total del monto declarado en la condena o pactado en la transacción.

Si la sentencia judicial resultare por un importe inferior al que hubiera correspondido abonar por aplicación de este régimen de reparación, el excedente deberá depositarse a la orden del Fondo de Garantía de la ley 24.557 y sus modificatorias.

Art. 7º – El empleador podrá contratar un seguro aplicable a otros sistemas de responsabilidad que puedan ser invocados por los trabajadores damnificados por daños derivados de los riesgos del trabajo, en las condiciones que fije la reglamentación que dicte la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Art. 8º – Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia.

Art. 9º – Para garantizar el trato igual a los damnificados cubiertos por el presente régimen, los organismos administrativos y los tribunales competentes deberán ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos al listado de enfermedades profesionales previsto como anexo I del decreto 658/96 y a la tabla de evaluación de incapacidades prevista como anexo I del decreto 659/96 y sus modificatorios, o los que los sustituyan en el futuro.

CAPÍTULO II

Ordenamiento de la gestión del régimen

Art. 10. – La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) en forma conjunta con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) establecerá los indicadores que las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) habrán de tener en cuenta para establecer su régimen de alcúotas, entre los cuales se considerarán el nivel de riesgo y la siniestralidad presunta y efectiva, con más una suma fija que, por cada trabajador, corresponda integrar al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales.

Entre los citados indicadores se deberá considerar:

- a) El nivel de riesgo se ajustará a categorías que se determinarán de acuerdo al grado de

cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad, y demás parámetros objetivos que la reglamentación establezca;

- b) El rango de alcúotas fijado para cada categoría no podrá superponerse con los rangos de alcúotas establecidos para los restantes niveles;
- c) La prohibición de esquemas de bonificaciones y/o alcúotas por fuera del nivel de riesgo establecido;
- d) La prohibición de discriminación directa o indirecta basada en el tamaño de la empresa.

La determinación de la base imponible se efectuará sobre el monto total de las remuneraciones y conceptos no remunerativos que declare mensualmente el empleador.

Art. 11. – El sistema de alcúotas deberá estar sujeto a lo normado por el artículo 26 de la ley 20.091, sus modificatorias y disposiciones reglamentarias, y será aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Si transcurridos treinta (30) días corridos de la presentación efectuada por la aseguradora de riesgos del trabajo (ART) el organismo de control no hubiera notificado objeción o rechazo alguno, el régimen se considerará aprobado.

Una vez transcurrido un (1) año desde la incorporación de la alcúota al contrato del empleador, la aseguradora de riesgos del trabajo (ART) podrá modificarla dentro del régimen de alcúotas aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y previo aviso de manera fehaciente con sesenta (60) días de anticipación al empleador. En este supuesto, el empleador podrá optar por continuar con el contrato de afiliación y la nueva alcúota o cambiar de aseguradora de riesgos del trabajo (ART). Cuando el empleador tuviera la obligación legal de ajustarse a un sistema de contrataciones por licitaciones públicas, dicho plazo se extenderá a seis (6) meses.

Art. 12. – A los fines de una adecuada relación entre el valor de la cuota y la siniestralidad del empleador, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) pondrá a disposición de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) toda la información sobre siniestralidad registrada en cada uno de los establecimientos de los empleadores incluidos en el ámbito de aplicación del régimen.

Art. 13. – Transcurridos dos (2) años de la vigencia de la presente, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), en forma conjunta con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), podrán establecer nuevos indicadores para la fijación del sistema de alcúotas por parte de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), orientados a reflejar la vinculación entre las cuotas y la siniestralidad efectiva y presunta, así como los niveles de cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad.

Podrán considerar a tales efectos: alcúotas básicas, un componente de proporcionalidad entre la actividad

económica principal y la de mayor riesgo que realice el empleador afiliado, suplementos o reducciones proporcionalmente relacionados tanto con el nivel de incumplimientos del empleador a la normativa vigente en materia de higiene y seguridad, como con los índices de siniestralidad.

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), en forma conjunta con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), podrán fijar un sistema de alícuotas uniformes por colectivo cubierto, que sólo reconocerá variaciones de acuerdo al nivel de riesgo probable y efectivo.

Art. 14. – Para el supuesto de cobertura de la reparación fundada en otros sistemas de responsabilidad, por lo que exceda de lo cubierto en el presente régimen, deberán establecerse separadamente las primas para hacer frente a la misma, conforme a las normas que rigen en la materia, fijadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

Art. 15. – Los empleadores tendrán derecho a recibir de la aseguradora de riesgos del trabajo (ART) a la que se encuentren afiliados, información respecto del sistema de alícuotas, de las prestaciones y demás acciones que este régimen pone a cargo de aquélla.

Art. 16. – Las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) deberán limitar su presupuesto en gastos de administración y otros gastos no prestacionales al porcentaje que establezcan conjuntamente la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), el que no podrá superar el veinte por ciento (20 %) de los ingresos que les correspondan para ese seguro. Dentro de ese importe, podrán asignar a gastos de comercialización o intermediación en la venta del seguro hasta el cinco por ciento (5 %) del total.

CAPÍTULO III

Disposiciones generales

Art. 17. –

1. Deróganse los artículos 19, 24 y los incisos 1, 2 y 3 del artículo 39 de la ley 24.557 y sus modificatorias. Las prestaciones indemnizatorias dinerarias de renta periódica, previstas en la citada norma, quedan transformadas en prestaciones indemnizatorias dinerarias de pago único, con excepción de las prestaciones en ejecución.
2. A los efectos de las acciones judiciales previstas en el artículo 4º, último párrafo, de la presente ley, será competente en la Capital Federal la justicia nacional en lo civil.

Invítase a las provincias para que determinen la competencia de esta materia conforme el criterio establecido precedentemente.

3. En las acciones judiciales previstas en el artículo 4º, último párrafo, de la presente ley,

resultará de aplicación lo dispuesto por el artículo 277 de la ley 20.744. Asimismo, se deberá considerar como monto del proceso a todos los efectos de regulaciones de honorarios e imposición de costas, la diferencia entre el capital de condena y aquel que hubiera percibido el trabajador –tanto en dinero como en especie– como consecuencia del régimen de reparación contenido en esta ley, no siendo admisible el pacto de cuota litis.

4. A los fines del depósito contemplado en el artículo 6º, primer párrafo, de la presente ley, en sede judicial se aplicarán los intereses a la tasa dispuesta en la sentencia desde la exigibilidad de cada crédito. En sede administrativa, el depósito se hará en un fondo especial administrado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), aplicándose los intereses a la tasa prevista para la actualización de créditos laborales.
5. Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha.
6. Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1.694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1º de enero del año 2010.

La actualización general prevista en el artículo 8º de esta ley se efectuará en los mismos plazos que la dispuesta para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) por el artículo 32 de la ley 24.241, modificado por su similar 26.417.

7. Las disposiciones atinentes al importe y actualización de las prestaciones adicionales por gran invalidez entrarán en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente, con independencia de la fecha de determinación de esa condición.

Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

AMADO BOUDOU
Juan H. Estrada.

Votación Nominal

130º Período Legislativo - Ordinario- 11º Sesión

DICTAMEN EN EL MENSAJE Y PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO, SOBRE RÉGIMEN DE ORDENAMIENTO DE LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS DERIVADOS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

ORDEN DEL DÍA 1041 Y ANEXO
(PE-155/12)

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: Dictamen de mayoría. Con modificaciones

Acta N°:	8	Fecha:	3-10-12	Hora:	21:46
Tipo de Quórum:	mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida:	mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72	
Presidente:	BOUDOU, Amado	Desenpare: NO			

Presentes Identificados:	60	Votos afirmativos:	41
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	19
Total Presentes:	60	Abstenciones:	-
Ausentes:	12	RESULTADO de la VOTACIÓN	
Votos Afirmativos Necesarios:	31		
		AFIRMATIVA	

Informe de auditoría de modificaciones

	Versión Original	Actual
LEGUIZAMÓN, María Laura	AUSENTE	AFIRMATIVO

Observaciones:

La senadora Leguizamón se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo

Modificaciones realizadas el 3/10/12

Presentes Identificados:	60	Votos afirmativos:	42
Presentes No Identificados:	1	Votos Negativos:	19
Total Presentes:	61	Abstenciones:	-
Ausentes:	11	RESULTADO de la VOTACIÓN	
Votos Afirmativos Necesarios:	31		
		AFIRMATIVA	

Votación Nominal

130° Período Legislativo - Ordinario- 11° Sesión

DICTAMEN EN EL MENSAJE Y PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO, SOBRE RÉGIMEN DE ORDENAMIENTO DE LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS DERIVADOS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

ORDEN DEL DÍA 1041 Y ANEXO
(PE-155/12)

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: Dictamen de mayoría. Con modificaciones

Acta N°: 8

Fecha: 3-10-12

Hora: 21:46

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: BOUDOU, Amado

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUIRRE, Hilda Clelia	AFIRMATIVO	LABADO, María Ester	AFIRMATIVO
ARTAZA, Eugenio Justiniano	NEGATIVO	LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO
BARRIONUEVO, Walter Basilio	AFIRMATIVO	LEGUIZAMÓN, María Laura	LEV.VOT
BASUALDO, Roberto Gustavo	AFIRMATIVO	LINARES, Jaime	NEGATIVO
BERMEJO, Rolando Adolfo	AFIRMATIVO	LOPEZ, Osvaldo Ramón	AFIRMATIVO
BIANCALANI, Fabio Darío	AFIRMATIVO	LORES, Horacio	AUSENTE
BLAS, Inés Imelda	AFIRMATIVO	LUNA, Mirtha María Teresita	AFIRMATIVO
BONGIORNO, María José	AFIRMATIVO	MANSILLA, Sergio Francisco	AFIRMATIVO
BORELLO, Marta Teresita	NEGATIVO	MARINO, Juan Carlos	NEGATIVO
CABANCHIK, Samuel Manuel	AUSENTE	MARTINEZ, Alfredo Anselmo	NEGATIVO
CABRAL, Salvador	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Ángel	AFIRMATIVO
CANO, José Manuel	NEGATIVO	MBABE de MATHO, Josefina Angélica	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Aníbal	AFIRMATIVO	MÉNEM, Carlos Saúl	AUSENTE
CIMADEVILLA, Mario Jorge	AUSENTE	MONLLAU, Blanca María del Valle	AUSENTE
COLAZO, Mario Jorge	AFIRMATIVO	MONTERO, Laura Gisela	NEGATIVO
CORRADI de BELTRÁN, Ana María	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Rubén	NEGATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	AFIRMATIVO	MORANDINI, Norma Elena	AUSENTE
DE LA ROSA, María Graciela	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	NEGATIVO
DI PERNA, Graciela Agustina	NEGATIVO	NIKISCH, Roy Abelardo	NEGATIVO
DÍAZ, María Rosa	AFIRMATIVO	PARRILLI, Nanci María Agustina	AFIRMATIVO
ESCUADERO, Sonia Margarita	NEGATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	AFIRMATIVO
ESTENSSORO, María Eugenia	AUSENTE	PERSICO, Daniel Raúl	AFIRMATIVO
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	NEGATIVO
FERNANDEZ, Aníbal Domingo	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Ángel	AFIRMATIVO
FILMUS, Daniel Fernando	AFIRMATIVO	RACHED, Emilio Alberto	NEGATIVO
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	NEGATIVO
GIMENEZ, Sandra Daniela	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	NEGATIVO	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	NEGATIVO
GODOY, Ruperto Eduardo	AFIRMATIVO	ROJES de ALPEROVICH, Beatriz L.	AFIRMATIVO
GONZALEZ, Pablo Gerardo	AFIRMATIVO	ROLDAN, José María	AFIRMATIVO
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel	AFIRMATIVO	ROMERO, Juan Carlos	AUSENTE
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	RUÍZ DÍAZ, Elsa Beatriz	AFIRMATIVO
HIGONET, María de los Angeles	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AUSENTE
IRRAZABAL, Juan Manuel	AFIRMATIVO	VERA, Arturo	NEGATIVO
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AFIRMATIVO	VERANI, Pablo	AUSENTE
JUEZ, Luis Alfredo	AUSENTE	VERNA, Carlos Alberto	NEGATIVO

V

INSERCIONES

Las inserciones remitidas por los señores senadores a la Dirección General de Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:

1

**SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
DI PERNA**

**Reparación de los años derivados de los accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales
(O.D. 1.041/12 y anexo)**

Señor presidente:

Desde la Comisión de Trabajo se ha firmado un dictamen sin escuchar a los representantes de las centrales obreras. Se firmó incluso antes de que el ministro Tomada pudiera finalizar su exposición. Fue un tratamiento que no merece otra calificación menor a nefasto. Se le ha dado el tratamiento expreso a un proyecto que va en desmedro de los trabajadores y que de ninguna manera va a solucionar el problema de fondo. Es por ello que voy a votar en contra de este proyecto y para ello me voy a detener en tres puntos que considero vitales y que, creo, van en perjuicio de los trabajadores. Son: 1. la prohibición de la doble vía, 2. los mecanismos de actualización y 3. el listado de enfermedades.

En primer lugar, este proyecto prohíbe la posibilidad de la doble vía y viola así el principio de la Corte Suprema donde se tiene que facilitar la indemnización tarifada al trabajador y, si éste entiende que la suma no repara el daño, tiene la posibilidad de hacer su reclamo en el fuero de trabajo donde deberá demostrar y fundamentar la reparación que pretende.

Esta modificación que se pretende introducir no cambia nada porque evidentemente se abre la puerta a una nueva oleada de inconstitucionalidades porque la doctrina de la Corte no se va a cambiar por la voluntad de los legisladores y funcionarios.

En segundo lugar están los mecanismos de actualización que se pretende introducir como algo novedoso y que también van a resultar en un detrimento del trabajador porque no resulta del todo claro cuál va a ser el procedimiento que se va a realizar para establecerlo. En principio parece estará realizado en base a un mecanismo de estadísticas y censos que el Estado llevará adelante. Y la verdad es que, con el manejo de las estadísticas que lleva el gobierno en ese aspecto, resulta algo verdaderamente temerario.

Como tercero y último punto creo se mantiene la idea errónea del listado de enfermedades cerrado. Y ello es caer de nuevo en el mismo absurdo porque las enfermedades no las define la inteligencia de cada uno sino la acción que cada trabajador lleva adelante en cada una de las empresas. Este tema necesita un tratamiento más profundo, con más tiempo, y que al parecer se ha tomado a la ligera. Se le impide al juez que vaya más

allá de las figuras que están establecidas por el decreto que marcan las enfermedades. Impidiéndole desarrollar ese concepto de reparación integral. Es más grave aún cuando hay antecedentes que amplían el nomenclador de las enfermedades laborales de la OIT que ya han sido aplicados por la Corte y el resto de los fueros inferiores.

En este sentido lo más oportuno hubiera sido contemplar la posibilidad de constituir comités mixtos de empresas para promover la prevención de accidentes y lograr mayor conciencia de los trabajadores respecto de las normas de seguridad e higiene. Es un tema serio y hay que tener en cuenta lo que dijo Pablo Micheli, estamos hablando de cuatro accidentes fatales por día.

Para finalizar y a modo de conclusión, creo que este proyecto no avanza en absoluto en la protección de la filosofía de la protección de trabajador. Se retrocede porque no se tuvo en cuenta un montón de inconstitucionalidades que van a seguir siendo dictadas por la misma Corte Suprema.

Le da al trabajador un tratamiento inhumano porque lo obliga a elegir entre ser indemnizado por la ART o esperar a recibir lo que merece por vía judicial con todo lo que puede tardar la Justicia. Se juega así con la desesperación y se olvida que detrás de todo trabajador hay un ser humano, una familia y un montón de necesidades para sobrevivir. No se tiene en cuenta lo humano y sólo se toman en cuenta las estadísticas.

El gobierno debería ser un poco más abierto y auto-crítico. No podemos aprobar una ley hecha sin consenso y a los empujones. Se debería haber trabajado este proyecto con los gremios y dejar de lado esa visión de amigo-enemigo. No es congruente acusar de desestabilizador o de hacerle el juego a la derecha a aquellos que reclaman que el salario no es ganancia o que el salario familiar sea para los hijos de los argentinos porque haciendo eso sólo se aleja más de los trabajadores. Y eso es algo que desde mi bloque jamás pienso hacer.

Por ello, señor presidente voy a votar en contra del proyecto que estamos tratando en el día de hoy.

2

**SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
BLAS**

**Modificación del Código Penal. Incorporación
de la figura del delito de femicidio
(O.D. N° 983/12)**

Señor presidente:

Considerar la figura del femicidio como delito autónomo e incorporarla al Código Penal nos indica

que hemos tomado conciencia como sociedad sobre la gravedad de la violencia de género, que finalmente se visibiliza en la enorme cantidad de vidas que se ha cobrado esta problemática.

Damos hoy un paso importante, ya que la justicia penal ofrece una respuesta al problema, pero no es suficiente, persisten aún estereotipos y prejuicios de género, existe aún una percepción social de que los hechos de violencia contra las mujeres son tolerados y crean un ambiente que facilita la violencia doméstica.

Generamos un gran avance pero aún no es suficiente, se deben generar condiciones necesarias con acciones que apunten a la sensibilización, difusión y contención de aquellas mujeres y familias que se presentan vulnerables o son víctimas de violencia de género.

Resulta esta medida una decisión de suma importancia y se constituye en el puntapié inicial para propiciar un cambio cultural, que mitigue los efectos de prácticas arraigadas históricamente y que posicionan a la mujer en desventaja y debilidad frente a la violencia.

Por todo ello, acompaño con mi voto positivo el presente proyecto.

3

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PÉRSICO

**Modificación del Código Penal. Incorporación
de la figura del delito de femicidio
(O.D. N° 983/12)**

Señor presidente:

Como bien se puso de manifiesto, la norma que se trata tiene como objeto establecer, no sólo un agravamiento en la pena en caso de homicidio cuando se trate de cónyuges, excónyuges, conviviente, exconviviente y el promovido por el odio a la orientación sexual, la identidad de género o su expresión, sino también incorporar la tipificación del delito de femicidio como artículo 80 bis del Código Penal, siendo la vida de la mujer, el bien jurídico a proteger.

Este Congreso ha asumido con mucha responsabilidad la protección de la vida de la mujer, debido a que la violencia de género se ha difundido lo suficiente como para tomar nota de que como sociedad estamos frente a un problema sistémico y estructural, del cual, como representantes del pueblo, no hemos hecho oídos sordos, sino accionar los resortes institucionales para producir un cambio normativo.

Asimismo, tenemos que ser conscientes de que este mal no lo resolveremos sólo con la sanción de esta norma. Las modificaciones al Código Penal no garantizan la solución de esta cuestión. Esta problemática requiere de una política de Estado que sea, a la vez, acompañada por el Poder Judicial, receptado en sus fallos.

De esta manera vamos a estar modificando una tendencia cultural, que se inicia con el cambio en las

normas, para luego ser reflejadas en los fallos judiciales, que impactan finalmente en la sociedad.

Señor presidente, los avances que hemos producido en estos años en la legislación civil, reconociendo nuevos derechos civiles, y las implicancias que éstos tienen en la formación de una familia, motiva a que incluyamos en el proyecto de ley que estamos tratando a los convivientes y exconvivientes, equiparando la no formalización del vínculo dentro del agravamiento.

Este marco de reconocimientos se encuadra en el lineamiento constitucional del artículo 37 al cual debemos interpretarlo comprensivamente y que plantea la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres, la cual debe ser acompañada por medidas de acción positiva. Es decir que para igualar las condiciones del hombre y la mujer debemos intervenir a los fines de asegurarla y protegerla por medio de leyes que la garanticen. Y esto es lo que hoy estamos haciendo.

Entendiendo que el cambio refleja lo intolerable que resulta esta conducta para nuestra sociedad y para este Congreso, nos manifestamos firmemente para desarraigar este prejuicio de género estableciendo penas ejemplares.

Por otro lado, quiero sumar estas palabras al resto de mis pares para que conste una posición unánime de esta Cámara en contra del abaratamiento de las penas en cuanto al delito que hoy se trata, cuando se trate de un homicida con historial de violencia contra la mujer, planteos de celopatía, de violencia excesiva por parte del hombre que sólo intentaba lesionar a la mujer y que termina en homicidio preterintencional, emoción violenta, etcétera y, todo esto para que obre como espíritu de la norma que estamos tratando. Así como dijo un senador preopinante: "...Al violento no le vamos a dar el beneficio de la emoción violenta o de las circunstancias extraordinarias de atenuación...".

Finalmente, señor presidente, deseo destacar la labor de la Banca de la Mujer, que ha tomado una participación activa en la lucha contra la violencia de género y en pos de una igualdad real de derechos.

Por lo expuesto, señor presidente, es que mi voto es favorable al presente proyecto y espero sea aprobado por unanimidad.

4

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
RIOFRIO

**Reparación de los daños derivados de los accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales
(O.D. N° 1.041/12 y anexo)**

Señor presidente:

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo –modificadorio de la ley 24.557, de riesgos del trabajo– se propone atender la reparación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, configurando

un régimen de reparación que integre las normas de la especialidad.

La iniciativa tuvo en cuenta los reproches constitucionales que le realizara a diversos artículos de la ley 24.557 la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (verbigracia: “Castillo” [1] *Fallos*, 327:3610; “Aquino” [2], *Fallos*, 327:3753 y “Milone”, *Fallos*, 327:4607, entre otros).

El proyecto establece que el derecho a la reparación dineraria se computará, independientemente del momento en que se determine su procedencia, desde el acaecimiento del daño o desde la determinación de la relación de causalidad adecuada de la enfermedad profesional (artículo 2°).

Por otra parte, cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, el damnificado percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en el régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas del sistema, de modo tal que el régimen ofrezca una reparación plena del daño. Dicha indemnización adicional será equivalente al 20 % y en caso de muerte o incapacidad total, nunca será inferior al \$ 70.000 (artículo 3°).

Asimismo, se establece una opción a favor del damnificado o sus derechohabientes entre las indemnizaciones previstas en este régimen o las que les pudieran corresponder por igual concepto con fundamento en otros sistemas de responsabilidad, los que no serán acumulables, quedando sin efecto la restricción impuesta en el artículo 39 de la ley 24.557 (artículo 4°) constituyendo, en consecuencia, uno de los aspectos centrales de esta reforma.

En el nuevo sistema, los obligados por la ley 24.557 y sus modificatorias al pago de la reparación dineraria deberán, dentro de los 15 días de notificados de la muerte del trabajador, o de la homologación o determinación de la incapacidad laboral de la víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, notificar fehacientemente a los damnificados o a sus derechohabientes los importes que les corresponde percibir por aplicación de este régimen, precisando cada concepto en forma separada e indicando que se encuentran a su disposición para el cobro (artículo 4°).

A partir de esta notificación: *a)* se podrán ejercer las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad y *b)* comenzará a computarse el plazo de prescripción.

Otra cuestión novedosa en el proyecto es la habilitación al empleador para contratar un seguro aplicable a otros sistemas de responsabilidad que puedan ser invocados por los trabajadores damnificados (artículo 7°).

También se prescribe un ajuste general de los importes por incapacidad laboral, de acuerdo a la variación del RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables) publicado por la Secretaría

de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (artículo 8°).

Por considerar que esta iniciativa coloca en mejor situación a los trabajadores que lamentablemente sufren un infortunio laboral, adelanto mi voto favorable al dictamen en tratamiento y solicito el acompañamiento de mis colegas.

5

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER

Modificación del Código Penal. Incorporación de la figura del delito de femicidio (O.D. N° 983/12)

Señor presidente:

El proyecto de ley que estamos tratando reviste gran importancia ya que toma nota de una realidad dolorosa, lamentable y creciente vinculada a la forma extrema de violencia ejercida por un hombre en perjuicio de una mujer o persona que se autopercibe con identidad de género femenina: el femicidio.

Me parece oportuno señalar, en primer lugar, que la problemática de la violencia de género no estuvo ni está al margen del proceso constante de ampliación de derechos experimentado desde el año 2003 al presente. En efecto es posible mencionar a modo ejemplificativo numerosos avances que se han dado en los tres poderes del Estado, con la firme voluntad de luchar contra este flagelo.

Así, podemos señalar la sanción de la ley 26.485 –Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales–; la creación del Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres –año 2010–; la creación de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual –año 2011–; la creación de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (Consavig) –año 2011–; entre otras.

También es dable destacar la creación de la Oficina de Violencia Doméstica en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Es decir, se observa cómo los tres poderes del Estado, desde sus respectivas incumbencias han encarado el abordaje de esta problemática, en un contexto determinado por la búsqueda continua de la protección de los derechos de las personas, fundamentalmente aquellos que fueron postergados o ignorados por mucho tiempo.

La violencia ejercida por hombres sobre las mujeres, en sus distintas modalidades tales como lesiones, abusos sexuales y homicidios se encontraba hasta no hace mucho tiempo oculta en las sociedades modernas. Es recién en la segunda mitad del siglo XX que las mujeres a partir de sus experiencias comienzan a visibilizar socialmente estas cuestiones considerándolas como

que ingresan de urgencia a la guardia de un hospital con evidencia de violencia del tipo descrito, pero al fallecer en sus certificados de defunción figura muerte por paro cardiorrespiratorio u otra causal, invisibilizando la violencia que generó el cuadro traumático.

Otro ejemplo es el caso de mujeres que aparecen en las noticias como muertas por suicidio, pero que han padecido previamente una situación de violencia sexista en sus vidas.

Para concluir me gustaría citar a Amnistía Internacional, que ha afirmado que “la violencia contra las mujeres es la mayor atrocidad cometida contra los derechos humanos en nuestro tiempo. Desde que nacen hasta que mueren, tanto en tiempos de paz como de guerra, las mujeres se enfrentan a la discriminación y la violencia del Estado, la comunidad y la familia”.

Señor presidente, convencida de la necesidad imperiosa de contar con esta herramienta legislativa, es que voto afirmativamente el proyecto bajo tratamiento.

6

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
CORRADI DE BELTRÁN

**Modificación del Código Penal. Incorporación
de la figura del delito de femicidio
(O.D. N° 983/12)**

Señor presidente:

El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad.

De acuerdo a la definición establecida por la ONU el femicidio es: “El asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género que ocurre tanto en el ámbito privado como en el espacio público”.

Del 50 al 70% de los asesinatos de mujeres en el mundo son perpetrados por sus maridos, novios o convivientes o por sus exmaridos, expovios o convivientes. A diferencia de los crímenes de hombres efectuados por sus mujeres, que no superan el 5%.

Porque no existe una justicia ejemplarizante que meta a la cárcel al hombre después de la primera que-rella. Por no existir un seguimiento a las denuncias, esto deja al hombre libre para cometer el crimen.

Es necesario avanzar con esta ley como parte de la erradicación de la violencia de género, pero hay que continuar en la implementación de políticas sociales que apunten a la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres.

Es necesario considerar a la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos, de esta forma se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva sobre la que se debe actuar de manera inmediata.

En mi provincia, Santiago del Estero, sólo entre enero y agosto de este año (2012) hubo 2.340 ataques a mujeres.

El escalofriante dato surge de la cantidad de denuncias que se realizaron en la provincia, en lo que va del 2012. Por si fuera poco, en 780 casos, los victimarios fueron reincidentes en al menos tres oportunidades.

La violencia de género es el delito que más se atiene en las comisarías.

Los principales resultados indican que los agresores suelen presentar con frecuencia alteraciones psicológicas (falta de control sobre la ira, dificultades en la expresión de emociones, distorsiones cognitivas, déficit de habilidades de comunicación y de solución de problemas y baja autoestima).

Son personas celosas, viven obsesionadas por ejercer el dominio entre quienes las rodean, doble personalidad, repiten el ciclo de violencia, no tienen sentimiento de culpa luego de golpear a una mujer, menosprecian a la víctima en privado o en público.

Asociaciones como la Casa de las Mujeres Santiagueñas son impulsoras de movilizaciones y luchas en contra de la violencia de género en mi provincia y creemos que las herramientas legislativas son imprescindibles para ganar esta batalla.

Las denuncias recibidas en la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y de la Mujer, que depende del Poder Judicial de Santiago del Estero, tuvieron un fuerte incremento del 45 % este año respecto de 2011, de acuerdo con las cifras del séptimo informe estadístico, que reúne datos hasta junio último.

Este drama, además, provoca otro problema de complejas implicancias y difícil solución: los niños huérfanos. De acuerdo con los datos de la Dirección de Género de la provincia, la violencia doméstica dejó, en lo que va del año, un total de 26 niños sin su mamá, mientras que, si se suman los hechos de 2011, la cifra sube a 49 –en ellos no se suman los casos de femicidio vinculado–. A ello se agrega que, en la mayoría de los casos, su papá quedó preso.

Señor presidente, voy a acompañar la sanción de esta ley porque sin lugar a dudas contribuiría al reclamo de nuestra sociedad, que al unísono expresa: “Basta de matar a las mujeres”.

7

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
RACHED

**Reparación de los daños derivados
de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales (O.D. N° 1.041/12 y anexo)**

Señor presidente:

El proyecto sobre modificación a la Ley de Riesgos del Trabajo que estamos tratando tiene el apoyo del bloque del Frente para la Victoria, que defiende el proyecto oficial, y de la Unión Industrial Argentina (UIA), pero no tiene el apoyo de los trabajadores.

Ello se deduce de la reunión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que preside la senadora Ana Corradi de Beltrán, a la que fueron invitados solamente los defensores del proyecto, pero no así quienes con argumentos propios y consistentes se oponían al mismo. En dicha reunión participaron algunos miembros del Poder Ejecutivo, como el ministro de Trabajo Tomada, el señor De Mendiguren, como representante de la UIA, y algunos gremialistas cercanos al gobierno como el señor Caló. Ahora bien, no se invitó, por ejemplo, a la Confederación General del Trabajo (CGT), ni a participar ni mucho menos a exponer su punto de vista.

El titular de la Confederación General del Trabajo (CGT), en la audiencia que se desarrolló a propuesta de nuestros bloques, ha manifestado su rechazo al proyecto con argumentos que son por demás atendibles y que nosotros compartimos.

Fundamentalmente el cambio que se le cuestiona al proyecto por parte de la dirigencia sindical es que se quita al fuero laboral la competencia para entender en los juicios que se promuevan por los accidentes o enfermedades de los trabajadores para entregársela al fuero civil y comercial. Como se sabe la justicia civil es menos propensa para fallar a favor de los trabajadores y los montos indemnizatorios son sensiblemente menores a los que establece la justicia del trabajo, más sensible a los derechos de los trabajadores.

Indudablemente, el proyecto en tratamiento va en contra de los trabajadores, porque, como se dijo, se quita la competencia de los tribunales laborales para dársela a la justicia civil, que, por su concepción, otorga normalmente menor monto indemnizatorio a quienes hayan sufrido un accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Por eso estamos en contra de este proyecto, que además ha tenido un cuestionable tratamiento por parte de la comisión correspondiente, ya que el mismo ingresó a este Congreso el día jueves 20 de septiembre de 2012 y el día martes 25 (luego del feriado del 24) se emitió dictamen escuchando solamente a las personas que defendían el proyecto y no así a aquellos que pudieran haber tenido una visión diferente al respecto.

Nuevamente el oficialismo ha hecho pesar la fuerza del número por sobre la fuerza de los argumentos pero queremos denunciar esta situación y dejar en claro que este proyecto va en contra de los intereses de los trabajadores y no a favor, como se quiere hacer creer. Nada más.

8

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LUNA

**Modificación del Código Penal. Incorporación
de la figura del delito de femicidio
(O.D. N° 983/12)**

Señor presidente:

En este breve lapso desde que asumí la banca en representación de la provincia de La Rioja, tuve el

gran honor de participar, debatir y votar leyes de gran trascendencia para nuestro país en su conjunto y para mi provincia en particular; leyes que han transformado a nuestra sociedad en una sociedad más justa e inclusiva. Sin embargo, estamos en falta con la sanción de una ley que la comunidad femenina exige a gritos que definamos y sancionemos; es esta ley de tipificación de la conducta penal del delito de homicidio contra una mujer o de quien se autoperciba como tal.

Por eso, como legisladora de una provincia del norte del país, donde los conceptos patriarcales y machistas se encuentran muy arraigados en la sociedad, es un gran honor para mí posibilitar con mi voto el dar respuesta a un reclamo genuino de miles de mujeres que perciben que en algún momento pueden ser víctimas de femicidio.

No es casual tampoco que este dictamen que hoy tratamos sea el primer dictamen que la Comisión de la Banca de la Mujer emite estrenando competencias que recién fueron habilitadas en el reglamento de esta Cámara este año.

La República Argentina ratificó la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos, hemos incorporado la Convención de las Naciones Unidas sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer a la Constitución Nacional en el año 1994 y hemos sancionado en el año 2009 la ley 26.485 sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, no es suficiente para que se establezca que la defensa contra actos de violencia contra la mujer en todas sus expresiones se convierta en verdadera política de Estado. Por eso, depende en gran medida de que nosotras, legisladoras de la Nación y dirigentes en nuestras provincias, nos aboquemos a la elaboración de leyes protectivas del género.

La propuesta que debatirá el Senado trata de poner fin a esta expresión extrema de odio al género, del goce enfermizo que produce en cierta clase de hombres la vulnerabilidad extrema de la mujer cuando no puede defenderse de los acosos, insultos, agresiones físicas y psicológicas que terminan en la violencia extrema de exterminio de esa mujer que no supo o no pudo defenderse, o lo que es más grave aún, que el Estado desatendió por no tener una sanción que exteriorice el reproche penal que para ese delito se necesita tipificar.

Ésta es una gran falencia de nosotros como legisladores, porque estamos actuando cuando los datos estadísticos nos demuestran la gravedad de los hechos. Esta vez vamos detrás de los hechos, cuando nuestra obligación como depositarios del voto popular es adelantarnos a los hechos que dañan a nuestra sociedad, sobre todo a la más vulnerable.

En sociedades como las nuestras, y sobre todo en las del norte del país, como mi provincia de La Rioja, el modelo familiar se construyó siempre sobre una jerarquía interna estructurada en el ejemplo del hombre adulto fuerte, quien siempre está en posición de dominación en relación a su compañera o en relación